

Bogotá D.C.

Doctor

HUMBERTO LÓPEZ NARVAEZ

JUEZ 27 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ- SECCIÓN SEGUNDA

Correo electrónico correscanbta@cendoj.ramajudicial.gov.co

Referencia:

EXPEDIENTE No.	11001333502720230022700
MEDIO DE CONTROL	Acción Popular
ACCIONANTE	Cristina Pardo Ballesteros, en representación del Conjunto Residencial Alondra
DEMANDADAS	Alcaldía Mayor de Bogotá D.C: Secretaría Distrital de Gobierno- Alcaldía Local de Bosa Secretaría Distrital de Movilidad Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público –DADEP- Policía Metropolitana de Bogotá
VINCULADAS	Secretaría Distrital de Salud Secretaría Distrital de Hábitat
DERECHOS COLECTIVOS INVOCADOS	Goce de un ambiente sano, goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público, seguridad y salubridad públicas, realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes
ASUNTO	Contestación demanda

ALVARO ARDILA MORA, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando como apoderado de Bogotá Distrito Capital- Secretaría Distrital de Gobierno- Alcaldía Local de Bosa, Secretaría Distrital de Movilidad, Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público –DADEP- (demandadas) Secretaría Distrital de Salud y Secretaría Distrital de Hábitat (vinculadas), en el proceso de la referencia, atendiendo lo dispuesto por su Despacho mediante auto admisorio del 5 de julio de 2023¹, el cual fue notificado el 6 de julio de 2023, a los buzones de notificaciones de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.², me permito dar contestación en términos a la demanda promovida en ejercicio del medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos por la representante legal del Conjunto Residencial Alondra, ubicado en la Localidad de Bosa³, en contra de las referidas entidades distritales y la Policía Metropolitana de Bogotá, en los siguientes términos:

¹ Mediante el cual se dispuso: "1. ADMITIR a trámite la acción popular instaurada por la señora Cristina Pardo Ballesteros, en representación del Conjunto Residencial Alondra. 2. VINCULAR a este trámite constitucional a la Secretaría de Salud de Bogotá, a la Secretaría del Hábitat de Bogotá, a la Constructora Fundación Compartir y a la Asociación de Recicladores "Reciclemos Todos", toda vez que pueden resultar afectadas con la decisión de fondo que se adopte en este asunto. 3. NEGAR la vinculación a este trámite constitucional a la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente. AP-2023-00227-00 2 4. NOTIFICAR personalmente este proveído a los representantes legales de las entidades demandadas y vinculadas, y correr traslado de la demanda por el término de diez (10) días para los fines previstos en los artículos 22 y 23 de la Ley 472 de 1998."

² Entre otros, notificacionesjudiciales@secretariajuridica.gov.co

³ Ubicado en la Diagonal 56 Bis Sur No. 84A-10 de la Localidad de Bosa, de la ciudad de Bogotá, Teléfono 3112693943, correo electrónico: coniuntoresidencialalondra@gmail.com

Carrera 8 No. 10 – 65
Código Postal: 111711
Tel: 3813000
www.bogotajuridica.gov.co
Info: Línea 195



CO21/962806



I. OBJETO DE LA ACCION POPULAR

La presente acción popular está relacionada con la presunta vulneración de los derechos e intereses de rango colectivo establecidos por Ley 472 de 1998⁴, que tienen que ver con el goce de un ambiente sano⁵, goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público⁶, seguridad y salubridad públicas⁷, y realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes⁸.

Lo anterior porque en criterio de la actora dicha agrupación residencial presenta afectaciones a causa de las acciones desarrolladas por transeúntes y residentes de predios aledaños en el espacio público que colinda con el área posterior del conjunto, en un sector de la vía Calle 55 Sur y Carrera 82 B, por un perímetro aproximado de dos cuadras, ubicado desde la nomenclatura Carrera 82B N°. 54 B Sur- 11 y el Parque Vecinal situado en la parte posterior de la propiedad horizontal, donde se presenta invasión del espacio público por diferentes actores, parqueo estacionario de vehículos de carga, usufructo del espacio público por actividades desarrolladas en los mismos (acopio, clasificación, carga y descarga de material reciclaje), ocupación del parque con estos mismos materiales y el excesivo ruido que generan estas actividades durante todo el día y hasta altas horas de la madrugada, lo cual también ha derivado en problemas de salubridad por la presencia de roedores e incremento de la inseguridad de este sector residencial.

Señala la accionante que en dicho sector se desarrollan diversas actividades, entre ellas, el almacenamiento y manipulación de reciclaje, oficio que en este lugar es adelantado por habitantes en condición de calle que pernoctan en el sitio, haciendo de éste una completa olla, en la que se consumen bebidas alcohólicas y sustancias estupefacientes, generan riñas, realizan sus necesidades fisiológicas a la intemperie; y por otra parte, el área que colinda de manera inmediata con las últimas torres del Conjunto Alondra, no cuenta con ninguna franja de retiro sobre la vía, ni intervención, ni aislamiento, y mucho menos cerramiento, lo cual genera que en este lugar se presenten, además de la invasión de diferentes actores y el desarrollo de toda clase de actividades, el parqueo continuado de vehículos de carga, en muchas ocasiones con olores nauseabundos por su contenido y el alto riesgo de tener estos automotores casi adheridos a las viviendas.

Considera la parte activa que la vulneración de los derechos colectivos invocados obedece a la falta de acción de las entidades del distrito, al permitir la invasión flagrante al espacio público, lo que ha impedido el disfrute del parque que fue destinado para el desarrollo de actividades deportivas y lúdicas, que hasta hoy es imposible cumplir, por lo que estima que se requiere ordenar a los organismos competentes llevar a cabo las gestiones administrativas requeridas para superar de manera definitiva esta grave problemática y ejercer en debida forma la vigilancia y control en cuanto a la invasión del espacio público, y el parqueo irregular de vehículos de carga, y sobre las actividades de reciclaje que se adelantan en la calle 55 sur, en especial en la parte posterior al conjunto residencial Alondra, además de adoptar medidas urgentes tendientes a que se cumplan las normas urbanísticas en relación la posible falta de cumplimiento en la entrega de las áreas de cesión obligatorias, como es el caso de las franjas de retiro de los edificios sobre las vías.

⁴ "Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones"

⁵ Previsto por el literal a) del artículo 3º de la Ley 472 de 1998

⁶ Consagrado por el literal d), ídem

⁷ Conforme lo dispone el literal g) de la Ley 472 de 1998

⁸ Establecido en el literal m), ídem

II. PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LOS HECHOS DE LA ACCIÓN POPULAR

2.1 Frente a los hechos de la demanda

Al hecho primero: Parcialmente cierto, pues aunque el Conjunto Residencial Alondra de la localidad de Bosa se encuentra en la ubicación señalada, las demás afirmaciones sobre las condiciones de sus propietarios no le constan a las entidades distritales que represento en la medida que corresponden a supuestos fácticos de la parte actora que deberá probarse dentro del proceso.

Al hecho segundo: No le consta a las entidades distritales que represento, corresponde a una afirmación de la parte actora que deberá probarse dentro del proceso.

Al hecho tercero: No le consta a las entidades distritales que represento, corresponde a supuestos fácticos que deberán probarse dentro del proceso.

No es cierto respecto a la falta de gestión de la Alcaldía Mayor, se aclara que dentro del presente escrito se hará referencia a las actividades y gestiones que las entidades distritales competentes han adelantado en relación con el manejo y preservación del espacio y vías públicas aledañas al conjunto residencial.

Al hecho cuarto: No es cierto, de conformidad con lo informado por la Oficina Asesora Jurídica del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público –DADEP–, al remitir concepto sobre la presente acción⁹ las zonas de cesión gratuita correspondientes al Conjunto Residencial Alondra, no han sido entregadas formalmente al Distrito Capital por el urbanizador: Constructora Fundación Compartir, pese a que esa entidad le ha efectuado a la fecha tres (3) requerimientos formales para que efectúe dicha entrega, sin obtener respuesta.

Ahora bien, el DADEP hizo saber también que las zonas de cesión de dicha agrupación se encuentran afectas al uso público, de conformidad con lo establecido en el artículo 140¹⁰ del Decreto Distrital 555 de 2021, independientemente de que no hayan sido entregadas material y jurídicamente al Distrito Capital y aun cuando permanezcan dentro del dominio privado, y precisó que en cualquier caso, de conformidad con lo establecido en el artículo 122¹¹ *ídem*, no es posible efectuar el cerramiento de los elementos que conforman dicho sistema de espacio público peatonal y para el encuentro a excepción de lo establecido en el literal f del numeral 1 del citado precepto.

Al hecho quinto: No le consta a las entidades distritales que represento, corresponde a supuestos fácticos que deberán probarse dentro del proceso.

No obstante, cabe reiterar que más adelante se detallarán algunas de las actuaciones que entidades como la Secretaría Distrital de Gobierno, por conducto de la Alcaldía Local de Bosa, han

⁹ Mediante comunicación 20231300108191 del 21 de julio de 2023, que se adjunta como prueba

¹⁰ **“Artículo 140. Señalamiento de espacios públicos.** Las zonas definidas como de uso público en los instrumentos de planificación y en los proyectos urbanísticos o parcelaciones aprobados por las autoridades competentes y respaldados por la correspondiente licencia de urbanización, cuando aplique, quedarán afectas a este fin específico, aun cuando permanezcan dentro del dominio privado, con el solo señalamiento que de ellas se haga en los instrumentos de planificación o en las licencias urbanísticas. En los proyectos de iniciativa pública que generen espacio público se elaborará el plano definitivo de los diseños aprobados por la entidad encargada de su ejecución. El plano será el documento de soporte para su recibo e inclusión en el inventario de patrimonio inmobiliario de la ciudad, sin que para ello se requiera plano urbanístico.”

¹¹ **“Artículo 122. Criterios de diseño para el sistema de espacio público peatonal y para el encuentro.** Atendiendo la estrategia de cualificación, integración y conectividad del sistema con las demás estructuras territoriales, se propiciará recorridos seguros, accesibles, autónomos, sostenibles, limpios y equitativos, con garantía de accesibilidad universal y calidad para todas las personas que hacen uso del espacio público, en especial para las mujeres, los niños y las niñas, las personas mayores y personas con discapacidad, se deberán seguir los siguientes criterios de diseño: (...) f. Se prohíben los cerramientos de los elementos que conforman el sistema de espacio público peatonal y para el encuentro. Excepcionalmente se permitirá el cerramiento de la infraestructura deportiva al interior de los parques de la red estructurante cuando se requiera para su correcto funcionamiento. Para los parques existentes que cuenten con cerramiento a la fecha de expedición del presente plan se deberá prever la eliminación paulatina del cerramiento atendiendo los criterios de vitalidad, conforme a la programación de su mantenimiento, diseño y/o construcción.”

venido realizando en procura de garantizar el manejo, preservación y adecuado uso del espacio público del sector donde se ubica la propiedad horizontal actora en este proceso.

Al hecho sexto: No es cierto, se recalca que las zonas de cesión gratuita obligatorias vinculadas al Conjunto Residencial Alondra de la Localidad de Bosa, no ha sido entregada formalmente por el urbanizador, pero en cualquier caso, dado su carácter de espacio público, tampoco es procedente su cerramiento, como lo pretende la parte actora.

Al hecho séptimo: No le consta a las entidades distritales que represento en relación con la conformación poblacional de los residentes del Conjunto Residencial Alondra, corresponde a supuestos fácticos que deberán probarse dentro del proceso.

Parcialmente cierto en cuanto al eventual estacionamiento de vehículos de carga “...junto a la reja del conjunto”, pues de conformidad con la comunicaciones emitidas por la Subdirección de Control de Tránsito y Transporte de la Secretaría Distrital Movilidad, a que se alude en los hechos 13, 17 y 38 de la demanda¹², esa entidad, actuando en el ámbito de las competencias técnicas que le atribuye el Decreto Distrital 672 de 2018¹³, entre otras, para ejecutar políticas y programas en materia de gestión de tráfico, ha venido adelantando operativos de control en el sector objeto de la presente acción popular, de conductas como el estacionamiento permanente o posible abandono de vehículos en lugares prohibidos, en coordinación con la Policía Metropolitana de Bogotá, esta última como autoridad líder en control y manejo de tráfico y circulación de vehículos, e incluso, puso en conocimiento de la actora el reporte de comparendos impuestos durante el periodo 2022-2023, en el sector comprendido entre la Calle 56 Sur y la Calle 51A Sur, entre carreras 81 y 85 (localidad de Bosa), asociadas a este tipo de infracciones de tránsito.

Parcialmente cierto en lo que atañe a la contaminación por olores que se refiere en este hecho, puesto que la Secretaría Distrital de Salud al presentar informe previo a la contestación de la demanda¹⁴, señaló que esa entidad, por conducto de la entidad adscrita al sector salud: Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente –E.S.E.–¹⁵, realizó visita de inspección al referido conjunto con el objeto de verificar el estado de saneamiento básico del conjunto residencial así como las posibles afectaciones externas, de acuerdo con la zona de problemática señalada, y poder valorar el posible grado de perturbación en la calidad de vida de los habitantes, y frente al tema de contaminación por olores efectuó las recomendaciones para realizar las acciones pertinentes en el espacio público en aras del bienestar de los habitantes del sector.

Esto permite desvirtuar la afirmación de que en la zona aledaña al Conjunto Residencial Alondra se presenta un permanente parqueo de vehículos, pues pone en evidencia las acciones de la autoridad de tránsito distrital y la Policía Metropolitana, sin perjuicio de que este tipo de conductas sean reiteradas y deban ser objeto de control y reprensión mediante nuevos operativos, y en el mismo sentido, resalta las gestiones llevadas a cabo para mitigar la contaminación por olores proveniente del espacio público aledaño a dicha propiedad horizontal, sin que por ello se entienda agotada la problemática o finalizada la gestión de inspección y control que adelanta la Secretaría Distrital de Salud en el ámbito funcional que le otorga el Decreto Distrital 507 de 2013¹⁶.

Al hecho octavo: No es cierto que se presente una situación de “abandono” por parte de las autoridades, pues como se infiere de las distintas comunicaciones e informes a que se hace referencia en los hechos de la demanda, las entidades distritales competentes en materia de

¹² Incorporadas como pruebas documentales del libelo

¹³ “Por medio del cual se modifica la estructura organizacional de la Secretaría Distrital de Movilidad y se dictan otras disposiciones”

¹⁴ Mediante comunicación que se dirigió a la Dirección Distrital de Gestión Judicial de la Secretaría Jurídica Distrital, que se adjunta como prueba

¹⁵ En los términos del artículo 32 del Acuerdo Distrital 641 de 2016 “Por el cual se efectúa la reorganización del Sector Salud de Bogotá, Distrito Capital, se modifica el Acuerdo 257 de 2006 y se expiden otras disposiciones”

¹⁶ “Por el cual se modifica la Estructura Organizacional de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, D.C.”

manejo y preservación del espacio público, protección del medio ambiente y seguridad, tales como la Secretaría Distrital de Gobierno, en este caso a través de la Alcaldía Local de Bosa, el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, la Secretaría Distrital de Movilidad, y las Secretarías Distritales de Salud y Ambiente, han llevado a cabo, dentro del marco propio de sus funciones, misionalidad y capacidades institucionales, distintas actuaciones tendientes a atender las problemáticas referenciadas por la parte actora, mediante operativos y visitas de control y sensibilización, procesos policivos por indebida ocupación del espacio público y actividades en procura de mejorar las condiciones de ocupación, tránsito y seguridad del sector.

Al hecho noveno: No le consta a las entidades distritales que represento, corresponde a supuestos fácticos relacionados con las condiciones psicológicas de los residentes del Conjunto Residencial Alondra, que deberán probarse dentro del proceso.

Al hecho décimo: No le consta a las entidades distritales que represento, corresponde a supuestos fácticos relacionados con la implementación de medidas para reforzar la seguridad del conjunto, que deberán probarse dentro del proceso.

No es cierto en relación con las supuestas “evasivas” por parte de las autoridades distritales para atender los temas relacionados con el manejo del espacio público aledaño a la agrupación residencial Alondra, se recalca en este sentido que la Alcaldía Local de Bosa, la Secretaría Distrital de Movilidad y demás organismos a los que corresponde la preservación de las zonas como andenes, parques y vías exteriores a la propiedad horizontal, vienen ejecutando acciones para garantizar el adecuado uso del espacio público en el sector.

Sin embargo, resulta evidente que como quiera que la posible invasión u ocupación temporal o permanente del mismo, así como el parqueo o circulación en zonas prohibidas son situaciones recurrentes, resultará necesario continuar llevando a cabo operativos de control y sensibilización con acompañamiento de la Policía Nacional, organismo encargado, por conducto de los agentes de la Policía Metropolitana, de adelantar las acciones que correspondan y/o imponer las sanciones y comparendos que permitan dar inicio si, resulta del caso, a las actuaciones policivas por parte de las inspecciones de policía de Bosa en el marco de la Ley 1801 de 2016¹⁷.

Al hecho décimo primero: Parcialmente cierto, la comunicación a que se alude en este hecho da cuenta de la situación de los parques vecinales aledaños al Conjunto Residencial Alondra, de acuerdo con la información que sobre estos registra el Sistema de Información Geográfica de la Defensoría el Espacio Público- SIGDEP.

Al hecho décimo segundo: No es cierto, pues dentro de la comunicación a la cual se hace referencia en este hecho, la Alcaldía Local de Bosa también hizo saber a la administradora del Conjunto Residencial Alondra, que se llevarían a cabo visitas de verificación sobre posible invasión del espacio público.

En ese sentido, dicho organismo local, al presentar su informe para atender este medio de control¹⁸ dio cuenta de distintos operativos de inspección, vigilancia y control llevados a cabo durante el primer y segundo trimestre del presente año con el fin de adelantar acciones de recuperación de espacio público en el sector, e incluso reportó las actuaciones policivas asociadas que vienen desarrollando las inspecciones de policía de la localidad, que se detallarán la hacer referencia a las actividades ejecutados por dicha instancia.

¹⁷ "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana"

¹⁸ Mediante comunicación 20235731113381, del 17 de julio de 2023, que se adjunta con la presente contestación de la demanda

Al hecho décimo tercero: No es cierto, se reitera en su integridad lo manifestado en la contestación del hecho séptimo de la demanda, en el sentido de señalar que la Subdirección de Control de Tránsito y Transporte de la Secretaría Distrital Movilidad, mediante la comunicación 202332303513781 del 21 de marzo de 2023, que se cita en el hecho 38, dio cuenta de la realización de operativos de control en el sector objeto de la presente acción popular, respecto de conductas como el estacionamiento permanente o posible abandono de vehículos en lugares prohibidos, en coordinación con la Policía Metropolitana de Bogotá, lo que indica que contrario a lo manifestado por la actora, esa entidad si ha adelantado actividades tendientes a mitigar este tipo de comportamientos en las vías aledañas a la agrupación residencial, y continuará ejecutando operativos en coordinación con la Policía Metropolitana de Bogotá.

Al hecho décimo cuarto: No es cierto, pues conforme se indica en la comunicación emitida por la UAESP, a que se alude en este hecho, esa entidad realizó el 19 de abril de 2022, en el marco de sus competencias, una visita al sector de la Diagonal 56B Sur 84A-10, oportunidad en la cual no se evidencio la presencia de población recicladora, ni población habitante de calle, e igualmente se constató que el espacio público se encontraba sin sin residuos.

Lo anterior no puede entenderse como la inexistencia de dicha problemática en la zona, pero si pone en evidencia que la entidad ha ejecutado actividades y visitas de verificación para atender las quejas presentadas por la comunidad de la zona, como la efectuada el 13 de marzo de 2023, de la cual da cuenta la comunicación dirigida a la Personería de Bogotá, a la cual se alude en el hecho 37 de la demanda.

Al hecho décimo quinto: No es cierto, porque como lo admite la parte actora, la Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre de la Secretaría Distrital de Ambiente, informó a la administradora del Conjunto Residencial Alondra, mediante la comunicación a la que se hace referencia en este hecho, que esa entidad adelantó el 11 de abril de 2022, una visita de evaluación silvicultural al parque aledaño a esa agrupación, y se identificó la presencia de distintos individuos arbóreos, encontrándose una especie que podría representar *“interferencia con la estructura del conjunto”*, por lo que se dispuso programar la actividad de bloqueo y traslado del individuo a una zona del parque apta para su replante, lo que permite acreditar que esa entidad ha actuado en el marco de sus competencias, gestiones para mejorar las condiciones para el óptimo uso de ese espacio de esparcimiento y actividad física en favor de los residentes del sector.

Al hecho décimo sexto: No es cierto, porque si bien el IDRD no es la entidad distrital competente para el control de la convivencia ciudadana, como se indica en la respuesta que emitió esa entidad, citada en este hecho, como se ha indicado, la Alcaldía Local de Kennedy viene efectuando operativos para la recuperación y conservación del espacio publico en el sector y zonas de recreación y descanso próximas al Conjunto Alondra.

Incluso, en el hecho 23 de la demanda se alude a la respuesta que emitió la Policía Nacional, por conducto del Comando de Atención Inmediata -CAI- Antonia Santos, mediante la cual se indica que en el parque ubicado en la Diagonal 56 Bis Sur 84A-10, aledaño a la agrupación residencial Alondra, se realizan constantes actividades de patrullaje y revista por parte de los uniformados del cuadrante, sin que se hayan detectado actividades delictivas o contravencionales de alto impacto en el sector.

Dichas actividades deberían ser permanentes y en cualquier caso, no pueden garantizar la no comisión de delitos o conductas que puedan atentar contra la convivencia, pero permiten concluir que en la zona la alcaldía local de Bosa atiende y realiza operativos de control asociado al adecuado uso y ocupación del espacio público, pero además la policía adelanta actividades para la

preservación de la tranquilidad que deben redundar en una mejor percepción de la seguridad de la zona.

Al hecho decimo séptimo: No es cierto, se recalca lo expuesto en los hechos séptimo y décimo tercero de la presente contestación de la demanda, pues a partir de esos pronunciamientos, que fueron oportunamente puestos en conocimiento de la administradora del Conjunto Residencial Alondra, es posible acreditar ante el despacho judicial que esa entidad sí ha desplegado, en conjunto con la Policía Metropolitana, operativos para el control de tráfico y la verificación y reprensión de conductas que atentan contra la movilidad y circulación de automotores en el sector, incluido el indebido estacionamiento en las vías aledañas a la propiedad horizontal.

Al hecho décimo octavo: No es cierto, se reitera en su integridad lo manifestado en la contestación del hecho 7 de la demanda, frente a la información que suministró la Secretaría Distrital de Salud para atender este medio de control, en cuanto advierte que el 10 de julio de 2023, la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente –E.S.E.– llevó a cabo visita de verificación al conjunto residencial que representa la actora popular para verificar entre otros asuntos, la posible presencia vectores, sin que se detectara existencia de organismos vivos que puedan transmitir enfermedades, pese a lo cual se agendaron nuevas actividades de control vectorial, circunstancia que controvierte que la falta de actuación de esa entidad distrital en dicha materia, sin que por ello se presuma la inexistencia de la problemática o se haya finalizado la labor de seguimiento que resulta necesaria para garantizar la salubridad pública de los residentes del sector.

Al hecho décimo noveno: No le consta a las entidades distritales que represento, pues se trata del pronunciamiento efectuado por una de las empresas concesionarias del servicio de recolección de basuras en la ciudad de Bogotá D.C., que no hace parte de la estructura orgánica de esta entidad territorial, por lo que deberá ser probado en el proceso.

Al hecho vigésimo: Es cierto, la respuesta emitida por la Alcaldía Local de Bosa a que se hace referencia en este hecho permite ilustrar al despacho que ese organismo local, además de las actividades descritas en precedencia, ejecutó dos (2) visitas técnicas de inspección, vigilancia y control para la recuperación del espacio público, el 3 y 18 de mayo de 2022, con lo cual es claro y se encuentra demostrado que dicha dependencia viene ejerciendo cabalmente sus competencias en esta materia, garantizando con el ello el derecho al disfrute del espacio público de los residentes del sector al que se refiere la demanda popular, y continuará haciéndolo en el marco de sus capacidades institucionales y presupuestales.

A los hechos vigésimo primero a vigésimo tercero: No le constan a las entidades distritales que represento, pues se trata de los pronunciamientos efectuados por la Policía Nacional, autoridad del orden nacional que no hace parte de la estructura administrativa del Distrito Capital. Sin embargo, los apartes transcritos en estos hechos de las comunicaciones que al parecer fueron dirigidas a la actora, convalidan la argumentación expuesta en torno a las distintas actividades que cumple ese organismo para asegurar la pacífica convivencia en el cuadrante donde se ubica el Conjunto Residencial Alondra, así como las vías, parques y espacios aledaños a aquel.

Al hecho vigésimo cuarto: No es cierto, lo que ponen de presente las distintas solicitudes que han formulado los residentes y administradora de la referida copropiedad, pero en especial las respuestas que han recibido de parte de las autoridades distritales competentes, es que estas han llevado a cabo de manera articulada, dentro del marco competencial que le es propio, distintas gestiones y actuaciones tendientes a verificar la ocupación del espacio público en la zona donde la parte actora refiere que se presenta la problemática de invasión por manejo y acopio de material reciclaje, así como de control al tráfico y estacionamiento de vehículos en lugares prohibidos,

verificación de las condiciones de salubridad y contaminación por olores, mantenimiento de parques vecinales y demás situaciones que se manifiestan en la demanda, las cuales han sido informadas a la administradora de la agrupación.

Resulta evidente el inconformismo de la actora ante las dificultades que señala se presentan en la zona, pero esto no puede dejar de lado que las entidades distritales demandadas han realizados operativos de control, visitas técnicas para corroborar y manejar las posibles conductas de invasión, sensibilizar a la comunidad residente y circundante sobre el manejo de dichos espacios, las conductas prohibidas en zonas de circulación peatonal y vehicular, y se insiste, tales gestiones tienen una vocación de permanencia dado que se trata de circunstancias que resultan recurrentes, por lo que ameritan labores continuas asociadas a la protección de los derechos colectivos cuya protección se reclama.

A los hechos vigésimo quinto a vigésimo séptimo: No le constan a las entidades distritales que represento, porque corresponden a los trámites adelantados por los residentes de la propiedad horizontal ante la Personería de Bogotá, así como de las actuaciones y visitas que surtió ese ente control, por lo que deberán ser probadas dentro del proceso.

A los hechos vigésimo octavo y vigésimo noveno: No son ciertos, pues si bien corresponden a requerimientos efectuados por la Personería Distrital a la Alcaldía Local de Bosa y a la Secretaría Distrital de Planeación, los cuales fueron oportunamente atendidos por esas entidades, no puede darse como cierto que la eventual existencia de fenómenos de invasión del espacio público obedezca a la falta de actuaciones de esa instancia local.

Al hecho trigésimo: No es cierto, cómo se ha indicado al dar contestación a los hechos precedentes, la respuesta emitida por la Alcaldía Local de Bosa para atender el requerimiento efectuado por la Personería de Bogotá, a que se hace referencia en este hecho, además de aludir a las competencias propias de ese organismo local, informó sobre los operativos que fueron ejecutados para verificar la presunta ocupación y usufructo del espacio público en el sector donde se encuentra el Conjunto Residencial Alondra.

Al hecho trigésimo primero: Es cierto, corresponde a la respuesta suministrada por la Secretaría Distrital de Planeación al requerimiento efectuado por la Personería de Bogotá, comunicación en la que se hace referencia a la ubicación planimétrica de los predios donde su ubica la agrupación residencial, y respecto al componente de la malla vial arterial aledaña se precisa que se trata de una zona de reserva vial para la Avenida Primero de Mayo comprendido entre la Avenida Agoberto Mejía Cifuentes y la Avenida Ciudad de Cali, en tanto que para la malla vial local se indica que se trata de una vía intermedia.

Al hecho trigésimo segundo: No es cierto, de acuerdo con lo informado por las entidades distritales que representó, las actividades para atender las situaciones referenciadas en la demanda popular han sido integrales y han cubierto las zonas aledañas al Conjunto Residencial Alondra de la localidad de Bosa, por lo que han incluido “...el perímetro afectado con las problemáticas descritas.”

Al hecho trigésimo tercero: No es cierto, pues si bien corresponde al requerimiento efectuado por la Personería Distrital al DADEP, el cual fue oportunamente atendido por esa entidad, no puede darse como cierto que la eventual existencia de fenómenos de invasión del espacio público obedezca a la falta de actuaciones de dicho organismo.

Al hecho trigésimo cuarto: No es cierto, pues si bien corresponden al requerimiento efectuado por la Personería Distrital a la UAESP, el cual fue oportunamente atendido por esa entidad, no

puede darse como cierto que la eventual existencia de fenómenos de invasión del espacio público obedezca a la falta de actuaciones de dicho organismo.

Al hecho trigésimo quinto: No es cierto, pues si bien corresponden al requerimiento efectuado por la Personería Distrital a la Secretaría Distrital de Movilidad, el cual fue oportunamente atendido por esa entidad, no puede darse como cierto que la eventual existencia de fenómenos de invasión del espacio público obedezca a la falta de actuaciones de dicho organismo.

Al hecho trigésimo sexto: No es cierto, se reitera lo manifestado en la contestación del hecho décimo primero, puesto que la comunicación a que se alude en este hecho da cuenta de la situación de los parques vecinales aledaños al Conjunto Residencial Alondra, de acuerdo con la información que sobre estos registra el Sistema de Información Geográfica de la Defensoría el Espacio Público- SIGDEP.

Adicionalmente se destaca que la comunicación 20231000031761 a que se hace referencia en este hecho, no se adjunta en la demanda.

Al hecho trigésimo séptimo: Es cierto, corresponde a la respuesta suministrada por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos UAESP, al requerimiento efectuado por la Personería de Bogotá, comunicación en la que se informó a ese ente de control que para atender las solicitudes hechas por los residentes y administradora del Conjunto Residencial Alondra, esa entidad, en el marco de sus funciones, llevó a cabo una visita al sector el 13 de marzo de 2023, y ante la evidencia de uso inadecuado del espacio público por parte de recicladores, se impartió la sensibilización y recomendaciones necesarias para optimizar la prestación del servicio de aprovechamiento y mantener en adecuadas condiciones de aseo los sitios dispuestos para la actividad, entre otros asuntos, actividad que permite ilustrar al despacho sobre las gestiones que viene adelantando ese organismo, desde su ámbito competencial, para garantizar el derecho al uso y goce del espacio público y salubridad de los habitantes del sector.

Al hecho trigésimo octavo: No es cierto, se reitera en su integridad lo manifestado en la contestación de los hechos séptimo, décimo tercero y décimo séptimo, porque dentro de la comunicación a que se hace referencia en este hecho, la Subdirección de Control de Tránsito y Transporte de la Secretaría Distrital Movilidad informó a la administradora de la agrupación residencial actora en este medio de control sobre la realización de operativos de control en el sector en conjunto con la Policía Metropolitana de Bogotá, adelantados para verificar y sancionar conductas que atentan contra la movilidad y circulación de automotores en el sector, incluido el indebido estacionamiento en las vías aledañas a la propiedad horizontal, de modo que se hacen patentes las gestiones surtidas por esa entidad para mitigar conductas que atentan contra la movilidad y debida ocupación del espacio público en la zona, que se espera continuar ejecutando en forma periódica y en tanto sea necesario para preservar los intereses colectivos cuya protección se reclama.

Al hecho trigésimo noveno: Parcialmente cierto, porque como se manifestó en la contestación de los hechos octavo, décimo segundo, vigésimo y trigésimo, la Alcaldía Local de Bosa informó a la administradora del Conjunto Residencial Alondra y a la Personería de Bogotá, no sólo respecto al operativo que se pretendía llevar a cabo el 28 de abril de 2023, en conjunto con la UAESP, la Secretaría Distrital de Movilidad y el DAEP, “...en aras de proteger y preservar el ejercicio de los derechos que le asisten a todos los ciudadanos.”, sino respecto a distintos operativos y visitas de control y sensibilización, procesos policivos por indebida ocupación del espacio público y actividades en procura de mejorar las condiciones de ocupación, tránsito y seguridad del sector.

Frente al hecho cuadragésimo: No es cierto, pues constituye un reconocimiento expreso del demandante respecto de las actividades y visitas técnicas que han ejecutado las entidades distritales, en articulación con la Policía Nacional, para atender dentro del marco competencial de cada una de ellas, las problemáticas que ha puesto de presente la actora popular, de manera que no puede afirmarse que esas autoridades hayan dejado de adoptar las medidas necesarias para la protección de los derechos colectivos que aquí se reclaman, asunto sobre el que conviene precisar que la representante legal de la agrupación residencial reclama en este hecho medidas “definitivas”, dejando de lado que las gestiones promovidas para mitigar las dificultades asociadas a la indebida ocupación y eventual invasión del espacio público aledaño a la copropiedad, si bien deben tener un carácter permanente, no pueden garantizar la erradicación absoluta de conductas que atenten contra los derechos colectivos, pues se requiere la sensibilización y educación de la ciudadanía, aspectos en los que como se ha indicado, también vienen trabajando las autoridades.

Al hecho cuadragésimo primero: No es cierto, porque dentro del oficio remitido por el DADEP a la Personería de Bogotá, al cual se hace referencia en este hecho, se informa que el Consorcio Limpieza Metropolitana S.A E.S.P –LIME- adelanta en Bosa, entre otras localidades del Distrito Capital, y en virtud del contrato de concesión que le fue otorgado¹⁹ labores de recolección y transporte de residuos no aprovechables, de manera continua e ininterrumpida en las frecuencias y horarios establecidos, actividad que para el 11 de mayo de 2023, en el sector objeto de la acción popular, evidenció que pese a no existir escombros se reportaba material reciclable, ante lo cual resultaba necesario que las autoridades de policía adelantar los operativos correspondientes en el marco de la Ley 1801 de 2016.

En este sentido, como se indicó en la contestación del hecho décimo segundo de la demanda, la Alcaldía Local de Bosa reportó algunas actuaciones policivas que vienen tramitando las inspecciones de policía de la localidad de Bosa, sin perjuicio de los operativos que corresponda desarrollar a la Policía Nacional.

Al hecho cuadragésimo segundo: No es cierto, se recalca que si bien no se desconoce la problemática expuesta por la parte actora, es claro que las entidades distritales competentes han venido adelantando las gestiones, actividades, visitas y operativos que en el marco de sus funciones, resultan necesarias para mitigar y reducir significativamente los comportamientos vinculados a una indebida ocupación del espacio y vías públicas en el sector aledaño al Conjunto Residencial Alondra de la Localidad de Bosa, en coordinación con la Policía Nacional, y continuarán desplegando los trámites que se requieran para salvaguardar los derechos colectivos que se reclaman en este medio de control.

A los hechos cuadragésimo tercero y cuadragésimo cuarto: No son ciertos, puede afirmarse que en el sub examine se ha evidenciado, a partir incluso de las pruebas aportadas en la demanda, la intervención y gestiones desplegadas por las entidades distritales demandadas, de manera que no puede afirmarse que aquellas desconocen la situación o han sido negligentes y descuidadas, como lo sostiene la actora, por el contrario, se encuentra probado que estas han atendido los pedidos y requerimientos que respecto de la problemática denunciada, han formulado la administradora y residentes del Conjunto Residencial Alondra de la localidad de Bosa y la Personería de Bogotá, sin perjuicio de la necesidad de continuar con los operativos y actuaciones que resulten necesarias, en el marco propio de las funciones que desarrollan las autoridades distritales, para preservar el cuidado y adecuado uso del espacio y vías públicas aledañas a esa propiedad horizontal.

¹⁹ Contrato 284 de 2018

Recuérdese además que según lo informado por el DADEP las zonas de cesión gratuita de la referida agrupación, no fueron entregadas al Distrito Capital por el urbanizador- constructor.

Al hecho cuadragésimo quinto: No corresponde a un supuesto fáctico sino a una solicitud de la parte actora al despacho judicial.

III. OPOSICIÓN A LAS PRETENSIONES DE LA ACCIÓN POPULAR

Actuando como apoderado de las entidades demandadas y vinculadas en el presente medio de control Bogotá Distrito Capital- Secretaría Distrital de Gobierno- Alcaldía Local de Bosa, Secretaría Distrital de Movilidad, Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público –DADEP-, Secretaría Distrital de Salud y Secretaría Distrital de Hábitat, me opongo desde ya a la prosperidad de todas las pretensiones formuladas en esta acción popular, teniendo en cuenta que desde el punto de vista jurídico, de derecho, factico y técnico, y dentro del ámbito competencial de mis representadas, no se han vulnerado ni por acción ni por omisión los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público, seguridad y salubridad públicas, realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes, sin perjuicio de continuar ejerciendo las actividades que le corresponden a cada uno de ellas para atender y erradicar la problemática vinculada al manejo del espacio y vías públicas, y conservación del orden y seguridad en el sector de que da cuenta la parte actora.

Cabe aclarar en este punto que en materia de preservación y mantenimiento del orden público, seguridad y convivencia ciudadana, las competencias que cumplen las entidades distritales demandadas resultan complementarias y de apoyo a las funciones que ostenta la Policía Metropolitana de Bogotá, que hace parte de la Policía Nacional, a partir de las previsiones del artículo 218 Constitucional²⁰, como cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz.

Téngase en cuenta que de conformidad con lo dispuesto por la Ley 62 de 1993²¹, la Policía Nacional es una autoridad del orden nacional instituida para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida honra bienes, creencias y demás derechos y libertades y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares, así como para el conservar las condiciones necesarias para hacer efectivo el goce de los derechos y libertades públicas, con el fin propósito de los promover la convivencia pacífica.

Ese por ello que el artículo 19²² de dicho estatuto faculta a la Policía Nacional para ejercer de manera permanente funciones de Policía Judicial, respecto de los delitos y contravenciones: educativa, a través de orientación a la comunidad en el respecto a la ley; preventiva, de la comisión de hechos punibles; de solidaridad entre la Policía y la comunidad; de atención al menor, de vigilancia urbana, rural y cívica; de coordinación penitenciaria; y, de vigilancia y protección de los

²⁰ **"ARTÍCULO 218.** La ley organizará el cuerpo de Policía. La Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz."

²¹ **"Por la cual se expiden normas sobre la Policía Nacional, se crea un establecimiento público de seguridad social y bienestar para la Policía Nacional, se crea la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y se reviste de facultades extraordinarias al Presidente de la República".**

²² **"ARTÍCULO 19.** Funciones Generales. La Policía Nacional está instituida para proteger a todas las personas residentes en Colombia, garantizar el ejercicio de las libertades públicas y los derechos que de éstas se deriven, prestar el auxilio que requiere la ejecución de las leyes y las providencias judiciales y administrativas y ejercer, de manera permanente, las funciones de: Policía Judicial, respecto de los delitos y contravenciones: educativa, a través de orientación a la comunidad en el respecto a la ley; preventiva, de la comisión de hechos punibles; de solidaridad entre la Policía y la comunidad; de atención al menor, de vigilancia urbana, rural y cívica; de coordinación penitenciaria; y, de vigilancia y protección de los recursos naturales relacionados con la calidad del medio ambiente, la ecología y el ornato público, en los ámbitos urbano y rural."

recursos naturales relacionados con la calidad del medio ambiente, la ecología y el ornato público, en los ámbitos urbano y rural.

De manera que sin perjuicio de las funciones y competencias que cumplen y continuarán desarrollando las autoridades distritales demandas y vinculadas que represento, es necesario precisar que la Policía Metropolitana de Bogotá ostenta el rol de autoridad líder y primer respondiente en las actividades de verificación, control y patrullaje para mantener o restablecer las condiciones de seguridad en los espacios públicos (vías, andenes, parques, plazas y demás elementos constitutivos de dicho concepto), atención de los eventos de policía que puedan involucrar la comisión de delitos o conductas que atenten contra la seguridad ciudadana y convivencia pacífica.

En consecuencia, se solicita al despacho no acceder a las pretensiones consistentes en que se declare la existencia de una vulneración de los aludidos derechos colectivos, y consecuencialmente, se ordene a las demandas adelantar actuaciones para conjurar las dificultades derivadas de la eventual ocupación o invasión del espacio y vías públicas adyacentes al Conjunto Residencial Alondra, control de actividades económicas en dichas zonas, pues se repite, dichas gestiones ya vienen siendo desarrolladas por las autoridades distritales y continuarán siendo ejecutadas en el marco funcional y de sus capacidades institucionales y presupuestales en tanto sea necesario para asegurar el goce de dichos intereses de la comunidad.

En relación con la improcedencia de la pretensión de cerramiento del sector posterior a esa propiedad horizontal, que se solicita como medida cautelar y pretensión de la demanda, cabe reiterar, por un lado, que las zonas de cesión gratuita obligatoria de la propiedad horizontal no han sido material ni jurídicamente entregadas al Distrito Capital, y de otro, que sin perjuicio de la legalización de dicha cesión, por expresa disposición del artículo 122 del POT, no resulta procedente el confinamiento o aislamiento de elementos o vías que hagan parte del espacio público, como dichos predios de cesión o las calles aledañas.

IV. RAZONES DE LA DEFENSA

4.1 Consideraciones de improcedencia de la acción presentada

Con fundamento en los argumentos planteados cabe recalcar que el medio de control propuesto no está llamado a prosperar porque no se aportaron por parte del extremo activo de la *litis*, pruebas suficientes que permitan establecer que Bogotá Distrito Capital- Secretaría Distrital de Gobierno- Alcaldía Local de Bosa, Secretaría Distrital de Movilidad, Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público –DADEP-, Secretaría Distrital de Salud y Secretaría Distrital de Hábitat, han incurrido en una acción u omisión que haya configurado o pueda ocasionar un daño, peligro, amenaza o vulneración a los intereses colectivos cuya protección se reclama.

En consecuencia, no es posible acreditar en el *sub examine*, respecto de las entidades distritales que represento, una posible relación o nexo de causalidad directa o inmediata entre las actuaciones que en ejercicio de sus competencias han realizado, y la presunta afectación de los referidos intereses colectivos que se alega en la demanda popular, se recalca, sin perjuicio de que todas las autoridades y organismos distritales que deban ejercer acciones para mitigar y de ser posible erradicar las posibles conductas de invasión o indebida ocupación del espacio público, mediante actividades como el acopio o aprovechamiento de material reciclable u otras que puedan afectar la seguridad y salubridad de los ciudadanos, parqueo o abandono de vehículos en las vías aledañas, y para asegurar el adecuado mantenimiento de los parques vecinales y espacios de recreación del sector donde se ubica el Conjunto Residencial Alondra de la localidad Bosa, continúen adelantando en el marco de sus competencias, las gestiones que resulten pertinentes.

Ilustrativo resulta traer a colación lo señalado por el Consejo de Estado, entre otras, en la sentencia dictada por la Sección Primera, el 18 de mayo de 2022²³, frente a los presupuestos de procedencia de una sentencia favorable al actor popular:

“h) Por la finalidad que persigue la acción popular y en virtud a su configuración normativa, se tienen entonces, como presupuestos de una eventual sentencia estimatoria los siguientes:

- *Una acción u omisión de la parte demandada;*
- *Que para la época en que se dicte la sentencia se presente daño contingente, peligro, amenaza, vulneración o agravio de derechos o intereses colectivos;*
- *Que se demuestre la relación de causalidad entre la acción o la omisión y la señalada afectación de los referidos derechos e intereses.”*

No se cumplen en este caso los presupuestos que ha establecido el Consejo de Estado para que el juez dicte una sentencia de condena contra Bogotá Distrito Capital- Secretaría Distrital de Gobierno- Alcaldía Local de Bosa, Secretaría Distrital de Movilidad, Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público –DADEP-, Secretaría Distrital de Salud y Secretaría Distrital de Hábitat, o cualquier otra autoridad de la alcaldía mayor, porque el actor popular no aportó medios de convicción que permitan probar que las actividades que estas ha adelantado amenacen o vulneren los intereses colectivos que se enuncian como desconocidos, por el contrario, las pruebas aportadas junto con la demanda y las que se anexan con la contestación, permiten acreditar que han venido atendiendo la problemática denunciada por la comunidad del sector y conjunto residencial que representa la actora popular, y que seguirán adelantado los operativos, visitas, actuaciones administrativas, policivas y demás operaciones y determinaciones a que haya lugar para preservar los derechos colectivos al goce del espacio público, adecuada utilización de los bienes públicos, salubridad y demás intereses generales que se invocan en el libelo.

4.2 Competencias y actuaciones adelantadas por la Secretaría Distrital de Gobierno- Alcaldía Local de Bosa

Según se indicó al emitir pronunciamiento frente a los hechos de la demanda, en el presente caso la Secretaría Distrital de Gobierno ha actuado en el marco de las funciones que le asignó el Decreto Distrital 411 de 2016²⁴, para liderar, orientar y coordinar la formulación, adopción y ejecución de políticas para la defensa del espacio público, y el saneamiento y registro de los bienes constitutivos del patrimonio inmobiliario distrital (artículo 1º literal d)²⁵, en este caso por conducto de la Alcaldía Local de Bosa, instancia esta última que viene cumpliendo en el sector donde se ubica el Conjunto Residencial Alondra, las funciones que el artículo 5º²⁶ *idem* le entregó a los organismos locales para coordinar el desarrollo de las acciones policivas con

²³ Radicación: 13001233100020110031501 Actor: David Leonardo Sandoval, Demandado: La Nación- Presidencia de la República y otros, Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

²⁴ “Por medio del cual se modifica la Estructura Organizacional de la Secretaría Distrital de Gobierno”

²⁵ “ARTÍCULO 1º. OBJETO Y FUNCIONES ESENCIALES. La Secretaría Distrital de Gobierno es un organismo del Sector Central con autonomía administrativa y financiera que tiene por objeto orientar y liderar la formulación y seguimiento de las políticas encaminadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática en el ámbito distrital y local, mediante la garantía de los derechos humanos y constitucionales, la convivencia pacífica, el ejercicio de la ciudadanía, la promoción de la paz y la cultura democrática, el uso del espacio público, la promoción de la organización y de la participación ciudadana y la coordinación de las relaciones políticas de la Administración Distrital en sus distintos niveles. Además de las atribuciones generales establecidas para las Secretarías, la Secretaría Distrital de Gobierno para el cumplimiento del objeto general, conforme a lo dispuesto en el artículo 15 del Acuerdo Distrital 637 de 2016 tiene las siguientes funciones básicas: (...) d) Liderar, orientar y coordinar la formulación, adopción y ejecución de políticas para la defensa del espacio público, y el saneamiento y registro de los bienes constitutivos del patrimonio inmobiliario distrital.”

²⁶ “ARTÍCULO 5º. ALCALDÍAS LOCALES. Corresponde a las Alcaldías Locales el ejercicio las siguientes (sic) funciones: (...) f) Coordinar el desarrollo de las acciones de policía de las autoridades locales que operan bajo la orientación control administrativo de la Secretaría Distrital de Gobierno como entidad competente. g) Coordinar el desarrollo de los programas y acciones policivas, tendientes a disminuir y prevenir las contravenciones definidas en la Ley, así como en el trámite y desarrollo del proceso asociado a las infracciones en el ámbito local.”

las autoridades de su jurisdicción en aras a prevenir y disminuir las contravenciones y coadyuvar en el trámite por infracciones asociadas a los comportamientos descritos en el Código de Policía.

Lo anterior en armonía con las atribuciones que el artículo 86 del Decreto Ley 1421 de 1993²⁷, Estatuto Orgánico de Bogotá, modificado por el artículo 11 de la Ley 2116 de 2021²⁸, le atribuyó a las alcaldías locales en materia de protección, recuperación y conservación del espacio público, en concordancia con el artículo 7º del Acuerdo Distrital 740 de 2019²⁹, en cuanto establece que corresponde a esa autoridades *“Desarrollar labores de inspección y vigilancia en materia de función policiva y de facilitador y coordinador en la gestión administrativa e institucional que permita al Inspector de Policía y al Corregidor desarrollar su responsabilidad de las labores de control en la respectiva Localidad.”* (numeral 5º, literal A).

Cabe señalar que el artículo 5º³⁰ del referido acuerdo distrital señala que es función de los alcaldes locales la construcción y mantenimiento de los parques vecinales y de bolsillo (literal 4º), competencia que se origina sólo en cuanto estos espacios se encuentren debidamente incorporados al patrimonio inmobiliario del Distrito Capital, circunstancia que como se advirtió, no ha ocurrido respecto de la cesión a título gratuito al Distrito Capital, por parte del urbanizador del Conjunto Residencial Alondra de la Localidad de Bosa, de las zonas y espacios para el tránsito peatonal y vehicular, recreación y asociados al encuentro generados como consecuencia del desarrollo de ese proyecto de vivienda.

El cumplimiento de las labores propias de ese organismo local queda evidenciado en las pruebas documentales que aportó la parte actora, tales como la comunicación 20225730912771 del 3 de junio de 2022³¹, mediante la cual se informó a la representante legal de la precitada copropiedad que en desarrollo de las labores de inspección, vigilancia y control la alcaldía local adelantó, entre otras, dos visitas al sector, la primera el 3 de mayo de 2022 *“...donde no se evidenció ocupación de espacio público con material de reciclaje”*, y la segunda el 18 de mayo del mismo año, *“...donde se identificaron a dos vendedores informales que se encontraban en el paradero SITP 253B09 a quienes se les realizó la sensibilización por ocupación del espacio público, para que estos hechos no se continúen presentando.”*, amén de solicitar a la Estación Séptima de Policía de Bosa, verificar la situación de posible invasión del espacio público e imponer las medidas correctivas a que hubiere lugar.

Adicionalmente, la actora popular incorporó como medio de convicción las comunicaciones 20225701901181 del 28 de octubre de 2022³², con la que se puso en conocimiento de la Personería de Bogotá que *“...dentro de los operativos de Inspección y Vigilancia, se ordenó una visita técnica de verificación a un profesional del Área de Gestión Policiva y Jurídica, al lugar denunciado, por la presunta ocupación y usufructo de espacio público, por parte de diferentes actores.”*, y 20235730505601 del 31 de marzo de 2023³³, con la que hizo saber al ente de control que debido a la complejidad de las problemáticas referidas, que requieren la coordinación y concurrencia de distintas entidades, y la participación de la comunidad, se convocó a DADEP, la Secretaría Distrital de Movilidad y la Estación de Policía de Bosa *“...para el viernes 28 de abril de 2023 a las 8:00 am, con el fin de realizar las acciones pertinentes a la recuperación del espacio público de acuerdo con las competencias y misionalidad de los entes Distritales.”*

²⁷ “Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Santafé de Bogotá”

²⁸ **“POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA EL DECRETO LEY 1421 DE 1993, REFERENTE AL ESTATUTO ORGÁNICO DE BOGOTÁ (...) Artículo 86. Atribuciones. Corresponde a los alcaldes locales: (...) 9. Dictar los actos y ejecutar las operaciones necesarias para la protección, recuperación y conservación del espacio público, el patrimonio cultural, arquitectónico e histórico, los monumentos de la localidad, los recursos naturales y el ambiente, con sujeción a la ley, a las normas nacionales aplicables, y a los acuerdos distritales y locales.”**

²⁹ “Por el cual se dictan normas en relación con la organización y el funcionamiento de las localidades de Bogotá, D.C.”

³⁰ **“ARTÍCULO 5.- Competencias de los alcaldes locales. En consonancia con los principios de concurrencia, subsidiariedad, complementariedad y coordinación los Alcaldes Locales tienen las siguientes competencias que se desarrollarán en el ámbito local: (...) 4. Adelantar la construcción y mantenimiento de parques vecinales y de bolsillo.”**

³¹ Al que se alude en el hecho 20 de la demanda

³² A la cual se alude en el hecho 30 de la demanda

³³ Citada en el hecho 39 de la demanda

En armonía con las actuaciones efectuadas por la Secretaría Distrital de Gobierno- Alcaldía Local de Bosa, que se encuentran probadas desde la presentación de la demanda, el organismo local, al presentar el insumo para atender el presente medio de control³⁴, hizo referencia a las siguientes gestiones de inspección, vigilancia y control, así como de ejercicio de la función policiva llevadas a cabo durante la presente anualidad en el sector objeto de la acción popular:

“En ese orden de ideas, la Alcaldía Local de Bosa realizó las siguientes acciones de vigilancia y control de actividades económicas y otros temas en la zona:

El 20 de abril de 2023 se adelantó sensibilización en el sector conocido como Palos Verdes a los diversos establecimientos de comercio ubicados en la zona, ocupantes de espacio público indicándoles que se realizaran en la zona operativos de recuperación de espacio público.

El 24 de abril de 2023 se realizó operativo de espacio público entre las calles 55 sur y 82 b con los siguientes resultados: Se evidenciaron acumulación de residuos, por lo anterior se solicitó y autorizó el retiro de estos residuos. Igualmente se evidencio una estructura metálica tipo caseta y ante la indicación de la prohibición de tenerla en espacio público es retirada de forma voluntaria por la persona responsable de la misma. De la misma forma, se realizó desmonte de 2 cambuches en los cuales no se evidencio presencia de algún ciudadano, se estableció un compromiso de levantar una estructura tipo caseta para el 5 de mayo de 2023. Se realizó sensibilización a 4 carreteros de acuerdo con el Decreto 014 de 2023

El 18 de mayo 2023 se realizó operativo de espacio público en la Diagonal 56 Bis Sur # 82 A – 10. Se evidenció presencia de vendedores informales transitorios. No se evidenciaron laborales de reciclaje en la zona, de manera que se procedió a la sensibilización a cada una de las vendedoras y de las entidades estatales que brindan apoyo en las actividades de venta informal.

El 13 de junio 2023 se adelantó operativo de carreteros. Se realizó sensibilización a 18 personas en cinco puntos visitados carreteros y a tres bodegas de reciclaje. Dentro de los puntos visitados se observa la Calle 55 sur # 82 B – 05. Se evidenció el uso indebido del espacio público por extensión de actividad económica de dichas bodegas, no se contó con acompañamiento de la Policía Nacional, de manera que se procedió a la sensibilización correspondiente.

Igualmente, se consultó los procesos que se encuentran en las Inspecciones de Policía de localidad encontrando los siguientes procesos policivos en la zona objeto de la acción:

Dependencia Reparto	Número Expediente	Estado	Dirección Completa de los Hechos	Localidad	Comportamiento	Número Radicado	Número Caso
Inspección 7B	2019574490132740E	Archivo Definitivo	KR 82 B SUR # 54 B - 11	Bosa	135.6. B) Actuaciones en los inmuebles declarados de conservación e interés cultural.	20195710181842	4309892
Inspección 7C	2021574490101504E	Avoca Conocimiento	KR 82 B # 54 B - 11 SUR	Bosa	92.16. Desarrollar la actividad económica sin cumplir cualquiera de los requisitos	20215730020013	7898539
Inspección 7C	2021574490100453E	Audiencia Pública (10 septiembre 2024)	KR 82 B # 54 B - 11 SUR	Bosa	92.12. Incumplir las normas referentes al uso reglamentado del suelo y las disposiciones	20215710064772	5426208
Inspección 7D	2019574880100908E	Archivo Definitivo	KR 82 B CL. 54 B - 11 SUR	Bosa	92.4. Quebrantar los horarios establecidos	20195740465563	443558
Inspección 7C	2021574490101522E	Audiencia Pública (30 octubre 2023)	KR 82 B # 54 B - 11 SUR MJ 252	Bosa	92.16. Desarrollar la actividad económica sin cumplir cualquiera de los requisitos	20215730020023	8018605
Inspección 7D	2022574490101120E	Archivo Definitivo	KR 82 B # 54 B - 11 SUR MJ 213	Bosa	140.4. Ocupar el espacio público en violación	20225710121802	12986130
Inspección 7C	2022574490101344E	Audiencia Pública (19 ago)	KR 82 B # 54 B - 11 SUR CS MJ 213 GASTROBAR WHISKY Y TEQUILA	Bosa	92.12. Incumplir las normas referentes al uso reglamentado del suelo y las disposiciones	20225730037303	13533601
Inspección 7A	2023574490100150E	Audiencia Pública (19 octubre 2023)	KR 85 B # 54 B - 11 SUR MEJORA 186 CHIP: AAA0204ENEP - CARRERA 82 B # 54 B - 11 SUR (LOTE DE MAYOR EXTEN	Bosa	92.12. Incumplir las normas referentes al uso reglamentado del suelo y las disposiciones	20235730018513	15365578

³⁴ Mediante oficios 202357310822171 del 11 de julio de 2023 y 20235731113381 del 17 de julio de 2023, suscritos por la Alcaldesa Local de Bosa

Todo lo anterior, como acciones necesarias para la protección, recuperación y conservación del espacio público en la zona, en el marco de nuestras competencias.”

De manera que resulta razonable y consistente con las pruebas aportadas al proceso concluir, desvirtuando con ello lo manifestado en la demanda, que la Secretaría Distrital de Gobierno, en este caso por conducto de la Alcaldía Local de Bosa, ha ejecutado de manera constante y articulada con las demás autoridades distritales, y en conjunto con la Policía Metropolitana de Bogotá, distintos operativos de inspección, vigilancia y control, visitas técnicas y de sensibilización e incluso operaciones administrativas para lograr la recuperación y conservación del espacio público aledaño al sector donde se localiza el Conjunto Residencial Alondra, amén del adelantamiento por parte de las inspecciones de policía de la localidad de los procesos vinculados a infracciones por indebida ocupación del espacio público u uso del suelo y ejercicio de actividades económicas sin el cumplimiento de requisitos.

Importante recalcar que si bien la Alcaldía Local de Bosa viene gestionando actividades de sensibilización en materia de seguridad ciudadana, el control efectivo de los factores y comportamientos contrarios a la convivencia pacífica o que pudieran constituir delitos o afectación a la seguridad en el sector, deben ser atendidos directamente por la Policía Nacional sin perjuicio de la coadyuvancia que en esta materia puedan prestar la Secretaría Distrital de Gobierno o esa instancia local.

No sobra indicar al despacho que la Alcaldía Local de Bosa seguirá propendiendo, dentro del marco de su misionalidad y funciones, por mitigar la problemática que refiere la actora en su condición de representante legal y administradora de la aludida agrupación de vivienda, asunto respecto del cual se hace necesario señalar al despacho que esta instancia atiende una multitud de requerimientos para adelantar operativos sobre el espacio público y asuntos relacionados con el cumplimiento de sus competencias, por lo que la ejecución material de este tipo de actividades está sujeta a su agendamiento de acuerdo con la disponibilidad de funcionarios, presupuesto y coordinación con la Policía Nacional.

4.3 Competencias y actuaciones adelantadas por la Secretaría Distrital de Movilidad

La Dirección Técnica de Representación Judicial de la Secretaría Distrital de Movilidad, al allegar informe respecto a la demanda popular³⁵, indicó que el objetivo misional de esa entidad está establecido por el artículo 1º del Decreto Distrital 672 de 2018, en armonía con el artículo 108 del Acuerdo 257 de 2006³⁶, y consiste en liderar y orientar la formulación de las políticas del sistema de movilidad para atender los requerimientos de desplazamiento de pasajeros y de carga en la zona urbana, tanto vehicular como peatonal y de su expansión en el área rural del Distrito Capital en el marco de la interconexión del Distrito Capital con la red de ciudades de la región central, con el país y con el exterior.

Dentro de ese contexto normativo, dichas disposiciones le atribuyen funciones a la Secretaría Distrital de Movilidad, entre otras, para formular y orientar las políticas sobre la regulación y control del tránsito y el mejoramiento de las condiciones de movilidad, fungir con autoridad de tránsito y liderar y orientar las políticas para la formulación de los planes, programas y proyectos de

³⁵ Mediante comunicación 202351006407271 que se anexa como prueba

³⁶ “Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá, Distrito Capital, y se expiden otras disposiciones (...) **Artículo 108. Naturaleza, objeto y funciones básicas de la Secretaría Distrital de Movilidad.** La Secretaría Distrital de Movilidad es un organismo del Sector Central con autonomía administrativa y financiera que tiene por objeto orientar y liderar la formulación de las políticas del sistema de movilidad para atender los requerimientos de desplazamiento de pasajeros y de carga en la zona urbana, tanto vehicular como peatonal y de su expansión en el área rural del Distrito Capital en el marco de la interconexión del Distrito Capital con la red de ciudades de la región central, con el país y con el exterior.”

construcción, mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura vial y de transporte del Distrito Capital (literales a, b y c del artículo 108 del Acuerdo 257 de 2006³⁷, en concordancia con el artículo 2º, numerales 1 y 2 del Decreto 672 de 2018³⁸).

Con fundamento en estas atribuciones la Dirección Técnica de Representación Judicial de la Secretaría Distrital de Movilidad señala que la pretensión contenida en la demanda en el sentido de que se ordene a esa entidad adelantar acciones para “...evitar el parqueo continuo de vehículos automotores, en el sector del corredor de la Calle 55 Sur y Carrera 82 B, por un perímetro aproximado de dos cuadras, ubicado desde la nomenclatura Carrera 82 B No. 54 B Sur – 11 y el Parque Vecinal que colinda en la parte posterior del Conjunto Residencial Alondra...”, no resulta procedente toda vez que:

“...se logró determinar que la Calle 55 sur entre Carrera 81i y Carrera 82 B Bis, corresponde a una vía perteneciente a la Malla vial arterial del Distrito Capital, la cual, en la actualidad se encuentra en material agregado (No asfaltada o pavimentada), y no presenta definición en los paramentos de separación entre vía vehicular y zona peatonal, razón por la cual, el corredor de la Calle 55 sur a la altura de la zona del requerimiento se considera que es una vía arterial no consolidada, lo cual no limita los aspectos de funcionalidad en movilidad y la misma no es susceptible de no impedir su libre circulación, lo anterior de acuerdo a las competencias de la SDM indicadas.”

En ese sentido se hace referencia a las previsiones del artículo 15 de la Ley 1383 de 2010³⁹, en relación con los lugares prohibidos para parquear vehículos, tales como andenes, zonas verdes o sobre espacio público destinado para peatones, recreación o conservación, vías arterias, autopistas, zonas de seguridad o dentro de un cruce, y destaca que en efecto sobre el corredor vial de la Calle 55 sur entre Carrera 81i y Carrera 82B Bis, no se encuentra permitida la actividad de estacionamiento en vía, independientemente de que la misma no sea una vía arterial consolidada, toda vez que se genera una afectación directa a la movilidad del sector.

No obstante, la Dirección Técnica de Representación Judicial de la Secretaría Distrital de Movilidad advierte que el aludido tramo corresponde a un predio de cesión incorporado al Registro Único de Patrimonio Inmobiliario -RUPI- en condición de zona de reserva vial destinado al control ambiental, aislamiento y afectación al plan vial.

Al respecto se indica lo siguiente:

“...una vez revisada la base de datos georreferenciada de la Entidad se pudo establecer que el uso asociado sobre el cual se presenta la actividad de estacionamiento, corresponde a una zona con Registros Únicos de Patrimonio Inmobiliario (RUPI):

RUPI 4486-4 Zonas Viales - Área de Control Ambiental o Aislamiento

³⁷ “Artículo 108. Naturaleza, objeto y funciones básicas de la Secretaría Distrital de Movilidad. (...) La Secretaría Distrital de Movilidad tiene las siguientes funciones básicas: a. Formular y orientar las políticas sobre la regulación y control del tránsito, el transporte público urbano en todas sus modalidades, la intermodalidad y el mejoramiento de las condiciones de movilidad y el desarrollo de infraestructura vial y de transporte b. Fungir como autoridad de tránsito y transporte. c. Liderar y orientar las políticas para la formulación de los planes, programas y proyectos de construcción, mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura vial y de transporte del Distrito Capital.”

³⁸ “Artículo 2. Funciones. La Secretaría Distrital de Movilidad, conforme al Acuerdo Distrital 257 de 2006, tiene las siguientes funciones básicas: 1. Formular y orientar las políticas sobre la regulación y control del tránsito, el transporte público urbano en todas sus modalidades, la intermodalidad y el mejoramiento de las condiciones de movilidad y el desarrollo de infraestructura vial y de transporte. 2. Fungir como autoridad de tránsito y transporte.”

³⁹ “Por la cual se reforma la Ley 769 de 2002 - Código Nacional de Tránsito, y se dictan otras disposiciones (...) Artículo 15. El artículo 76 de la Ley 769 de 2002, quedará así: Artículo 76. Lugares prohibidos para estacionar. Está prohibido estacionar vehículos en los siguientes lugares: Sobre andenes, zonas verdes o sobre espacio público destinado para peatones, recreación o conservación. En vías arterias, autopistas, zonas de seguridad, o dentro de un cruce. En vías principales y colectoras en las cuales expresamente se indique la prohibición o la restricción en relación con horarios o tipos de vehículos. En puentes, viaductos, túneles, pasos bajos, estructuras elevadas o en cualquiera de los accesos a estos. En zonas expresamente destinadas para estacionamiento o parada de cierto tipo de vehículos, incluyendo las paradas de vehículos de servicio público, o para limitados físicos. En carriles dedicados a transporte masivo sin autorización. A una distancia mayor de treinta (30) centímetros de la acera. En doble fila de vehículos estacionados, o frente a hidrantes y entradas de garajes. En curvas. Donde interfiera con la salida de vehículos estacionados. Donde las autoridades de tránsito lo prohiban. En zona de seguridad y de protección de la vía férrea, en la vía principal, vías secundarias, apartaderos, estaciones y anexidades férreas.”

RUPI 4486-1 Zonas Viales - Afectación al Plan vial



Predio 4486-4	
RUPI	4486-4
ID_ESTADO	1500
TIPO_RUPI	PREDIO
ID_ESTADO	519
ESTADO	INCORPORADO
NOMBRE_URBANIZACION	PALOS VERDES
NUMERO_URBANIZACION	4486
NATURALEZA_URBANISTICA	URBANISMO LEGAL
TIPO_URBANIZACION	PUBLICOS DE CESION
URBANIZADOR	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO
USO_NIVEL_1	ZONAS VIALES
USO_NIVEL_2	AREA DE CONTROL AMBIENTAL O AISLAMIENTO
USO_ESPECIFICO	CONTROL AMBIENTAL



Predio 4486-1	
RUPI	4486-1
ID_ESTADO	1500
TIPO_RUPI	PREDIO
ID_ESTADO	519
ESTADO	INCORPORADO
NOMBRE_URBANIZACION	PALOS VERDES
NUMERO_URBANIZACION	4486
NATURALEZA_URBANISTICA	URBANISMO LEGAL
TIPO_URBANIZACION	PUBLICOS DE CESION
URBANIZADOR	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO
USO_NIVEL_1	ZONAS VIALES
USO_NIVEL_2	AFECTACION AL PLAN VIAL
USO_ESPECIFICO	VIA ARTERIA AV. PRIMERO DE MAYO (PARA MAYOR

A partir de esta información se aclara que aunque en virtud de lo previsto por el artículo 11 del Decreto Distrital 552 de 2018⁴⁰, la Secretaría Distrital de Movilidad tiene la calidad de entidad administradora de todos los espacios y vías que presenten un elemento de Malla Vial (RUPI Zonas Viales- Vías Vehiculares), como quiera que el sector al que se viene haciendo referencia corresponde a zona de cesión, esa entidad no es la competente para definir y regular las condiciones dadas sobre el espacio ubicado en el costado sur de la Calle 55 sur entre Carrera 81i y Carrera 82 B Bis.

Por otra parte, la Dirección Técnica de Representación Judicial de la Secretaría Distrital de Movilidad encuentra que resulta necesario determinar el estado de la vía en forma previa a realizar nuevos operativos de control en la zona, y para tal efecto destaca que de conformidad con lo previsto por el artículo 26 del Decreto 672 de 2018⁴¹, corresponde a la Subdirección de Control de Tránsito y Transporte ejecutar las políticas, planes, programas y proyectos relacionados con el control del tránsito y el transporte, coordinar y ejercer el control de tránsito y transporte de los diferentes actores viales y hacer seguimiento y disponer de los recursos necesarios para los operativos de control en vía, requeridos para mejorar las condiciones de movilidad, con lo cual

⁴⁰ "Por medio del cual se establece el Marco Regulatorio del Aprovechamiento Económico del Espacio Público en el Distrito Capital de Bogotá y se dictan otras disposiciones"

⁴¹ "Artículo 26. Subdirección de Control de Tránsito y de Transporte. Son funciones de la Subdirección de Control de Tránsito y de Transporte las siguientes: 1. Ejecutar las políticas, planes, programas y proyectos relacionados con el control del tránsito y el transporte. 2. Coordinar y ejercer el control de tránsito y transporte de los diferentes actores viales. 3. Coordinar, hacer seguimiento y disponer de los recursos necesarios para los operativos de control en vía, requeridos para mejorar las condiciones de movilidad."

busca verificar las condiciones de seguridad y cumplimiento de las disposiciones legales en materia de tránsito y transporte por parte de los diferentes actores viales a través de operativos de control desarrollados con la Policía Metropolitana de Tránsito de Bogotá y el Cuerpo de Agentes Civiles de Control de Tránsito y Transporte en la ciudad de Bogotá.

Dicho lo anterior se precisa que “...la Secretaria Distrital de Movilidad no está facultada para inmovilizar y conducir a los patios, a aquellos vehículos que se presuman abandonados o que estén infringiendo las normas de tránsito al interior de predios públicos o privados que presenten algún tipo cerramiento, como se encuentra la zona actualmente:



Es así como se indica que la competencia de la Secretaría Distrital de Movilidad se circunscribe a aquellos vehículos mal estacionados o abandonados en la malla vial (espacio público) de conformidad con los artículos 76, 77, 78 y 127 del Código Nacional de Tránsito Terrestre, lo que impide que la entidad pueda retirar con grúa o cualquier otro medio este tipo de vehículos, como lo pretende la parte actora.

En ese sentido se informa que una vez la se realice la recuperación del espacio público y el retiro del cerramiento ilegal existente en el sector, la Secretaria Distrital de Movilidad a través de la Subdirección de Control de Tránsito y Transporte brindara el apoyo de acuerdo a sus competencias y a la disponibilidad de recursos técnicos y humanos para efectuar la recuperación de espacio pertinente, actividad que según se ha indicado, viene cumpliendo la Alcaldía Local de Bosa en articulación con la Policía Nacional.

Precisamente, en cumplimiento de las referidas actividades técnicas de apoyo en materia de regulación y control de tránsito y condiciones de movilidad, resulta pertinente recordar que dentro de los hechos de la demanda se hace referencia a la comunicación 20223234300281 del 20 de abril de 2022⁴², con la cual la citada Subdirección de Control de Tránsito y Transporte puso en conocimiento de la actora popular que con el fin atender los requerimientos que esta formuló para que se atendieran conductas de estacionamiento permanente de vehículos de carga en zonas verdes o con restricción externas al conjunto, se habían aunado esfuerzos con la Policía Metropolitana de Tránsito, por lo que la correspondiente gestión:

*“...será vinculada a las actividades de control operativas mediante **OP-124612-20** y su ejecución estará sujeta a la disponibilidad de recursos humanos y técnicos, buscando con ello romper patrones negativos de conducta y desacato a las normas de tránsito.*

⁴² A la cual se alude en el hecho 13 de la demanda

El resultado de los operativos realizados por la Policía Metropolitana de Tránsito, será publicado en la página web de esta entidad entrando a www.movilidadbogota.gov.co por Atención al Ciudadano, sección Consulta en Línea, luego en el aplicativo de “Consulta Operativos de Tránsito” ingresa el número de OP relacionado en el presente oficio cuyo link es: <https://www.movilidadbogota.gov.co/web/resultadosoperativosdetransito>”

Al hilo de la realización de los operativos de control que la Secretaría Distrital de Movilidad realiza en articulación con la Policía Metropolitana, en los hechos de la demanda también se cita la comunicación 202232304988841 del 17 de mayo de 2022⁴³, con la que la Subdirección de Control de Tránsito y Transporte hizo saber a la administradora de la aludida propiedad horizontal sobre la realización de nuevas actividades de control de tránsito⁴⁴.

Y para dar cuenta del cumplimiento de sus funciones técnicas de apoyo por parte de la Secretaría Distrital de Movilidad para coadyuvar a las autoridades de policía en la verificación y eventual sanción de conductas contrarias a las normas de tránsito en sectores aledaños a la agrupación residencial demandante, en la demanda se invoca la comunicación 202332303513781 del 21 de marzo de 2023⁴⁵, a través de la misma dependencia informó lo sobre la ejecución de operativos para la verificación y control de infracciones vinculadas al “... estacionamiento permanente y posible abandono de vehículos en lugares prohibidos (segmento con restricción - zona verde - andén) en el sector de la CL 56 SUR Y CL 51 A SUR ENTRE KR 81 I Y KR 85 en la localidad de Bosa, aunando esfuerzos con la Policía Metropolitana de Tránsito, se informa que la solicitud será vinculada a las actividades de control operativas mediante el OP-159055...”

Pero también se reseñaron los resultados de los operativos ejecutados en el sector, presentando el siguiente reporte general de las ordenes de comparendos impuestas en lo corrido de la vigencia 2022- 2023:

CONSOLIDADO ÓRDENES DE COMPARENDO SECTOR DE LA CL 56 SUR Y CL 51 A SUR ENTRE KR 81 I Y KR 85 CÓDIGO Y DETALLE INFRACCIÓN		2022
C02- Estacionar un vehículo en sitios prohibidos.		6
G02- Los peatones y ciclistas que no cumplan con las disposiciones de este código, serán amonestados por la autoridad de tránsito competente y deberá asistir a un curso formativo dictado por las autoridades de tránsito. La inasistencia al curso será sancionada con arresto de uno (1) a seis (6) días.		2
C35- No realizar la revisión técnico-mecánica en el plazo legal establecido o cuando el vehículo no se encuentre en adecuadas condiciones técnico-mecánicas o de emisiones contaminantes, aún cuando porte los certificados correspondientes. Además el vehículo será inmovilizado.		2
Otras infracciones		9
Total		19
Fuente: Base de datos QLIK (Dispositivos de apoyo en vía) periodo comprendido del 1 de enero y el 31 de diciembre de 2022.		

CONSOLIDADO ÓRDENES DE COMPARENDO SECTOR DE LA CL 56 SUR Y CL 51 A SUR ENTRE KR 81 I Y KR 85 CÓDIGO Y DETALLE INFRACCIÓN		2023
C02- Estacionar un vehículo en sitios prohibidos.		1
C35- No realizar la revisión técnico-mecánica en el plazo legal establecido o cuando el vehículo no se encuentre en adecuadas condiciones técnico-mecánicas o de emisiones contaminantes, aún cuando porte los certificados correspondientes. Además el vehículo será inmovilizado.		1
D02- Conducir sin portar los seguros ordenados por la ley. Además, el vehículo será inmovilizado.		1
Total		3
Fuente: Base de datos QLIK (Dispositivos de apoyo en vía) periodo comprendido del 1 de enero y el 28 de febrero de 2023.		

⁴³ Citada en el hecho 17 de la demanda

⁴⁴ Vinculadas a la OP-127140-20.

⁴⁵ Al cual se alude en el hecho 38 de la demanda

Carrera 8 No. 10 – 65
Código Postal: 111711
Tel: 3813000
www.bogotajuridica.gov.co
Info: Línea 195



CO21/962806



Lo manifestado por la Dirección Técnica de Representación Judicial de la Secretaría Distrital de Movilidad pone en evidencia que las vías y zonas aledañas a los Conjuntos Residenciales Alondra (demandante) y Tayrona (que se invoca en la demanda) corresponden a zonas de cesión y espacio público en las que al parecer se presentan fenómenos de cerramiento e indebida ocupación del espacio público, situaciones frente a las cuales la ya se ha señalado que la Alcaldía Local de Bosa en articulación con la Policía Nacional ha venido adelantando actuaciones tendientes a su recuperación e incluso la Subdirección de Control de Tránsito y Transporte ha apoyado operativos de control en el sector objeto de la presente acción popular, respecto a conductas como el estacionamiento permanente o posible abandono de vehículos en lugares prohibidos.

Las actuaciones adelantadas hasta el momento para contrarrestar las conductas de estacionamiento permanente de vehículos de carga en la zona exterior del conjunto, y otras infracciones a las normas de tránsito, resultan ilustrativas para que el despacho encuentre demostrado que no son ciertas las afirmaciones respecto al desconocimiento, negligencia u omisión en la atención de dicha problemática, que se reseñaron en el libelo, pues es claro que las autoridades distritales tales como la Secretaría Distrital de Movilidad, se han ocupado en ejercicio de sus competencias, de desplegar gestiones que coadyuven la detección e imposición de sanciones a los actores viales que obstruyan la circulación en las vías y espacios conexos al Conjunto Residencial Alondra, e incurran en parqueo irregular o permanente en el sector que se menciona en la demanda popular.

Como se indicó con respecto a las actuaciones de la Secretaría Distrital de Gobierno- Alcaldía Local de Bosa, resulta evidente que la Secretaría Distrital de Movilidad deberá continuar coordinando sus actuaciones con la Policía Metropolitana de Tránsito para identificar y reprender este tipo de comportamientos, pero además, se hacen necesarias nuevas actividades de sensibilización conjunta que contribuyan a educar a los actores viales del sector en una utilización adecuada y racional de los espacios y vías públicas, de manera que sea la misma comunidad la que contribuya en forma efectiva a la disminución, y de ser posible, erradicación de los comportamientos ciudadanos que resultan ser la fuente de la problemática que sustenta la protección de los derechos colectivos invocados por la parte actora.

4.4 Competencias y actuaciones del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público- DADEP

Dentro de la contestación al hecho cuarto de la demanda, se hizo referencia al informe presentado por la Oficina Asesora Jurídica del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público- DADEP-, para atender el presente medio de control, precisando que esa entidad ha venido actuando en el presente asunto, conforme lo establece el Acuerdo Distrital 18 de 1999⁴⁶ en cumplimiento de su misión como entidad encargada de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida en Bogotá D.C., por medio de una eficaz defensa del Espacio Público, de una óptima administración del patrimonio inmobiliario de la ciudad y de la construcción de una nueva cultura del Espacio Público que garantice su uso y disfrute común y estimule la participación comunitaria.

En tal virtud, se hizo saber que la Subdirección de Registro Inmobiliario del DADEP ha desarrollado dentro del marco competencial que le otorga el Decreto Distrital 478 de 2022⁴⁷, las gestiones necesarias para gestionar y actualizar la plataforma de inventario general del espacio público y bienes fiscales del Distrito Capital, de conformidad a los lineamientos del DADEP y la normatividad

⁴⁶ "Por el cual se crea la Defensoría del Espacio Público"

⁴⁷ "Por medio del cual se modifica la estructura organizacional del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público"

vigente en la materia (artículo 9, numeral 3⁴⁸), específicamente respecto de las zonas de cesión gratuita del Conjunto Residencial Alondra de la localidad de Bosa.

En sentido el DADEP inicialmente hizo referencia a la ubicación de dicha agrupación, así como a la del el Conjunto Residencial Tayrona, teniendo en cuenta que esta última es utilizada como referencia en la demanda popular, e indicó:

“El Accionante hace referencia a dos (2) Conjuntos Residenciales denominados “Conjunto Alondra” y “Conjunto Residencial Tayrona”, los cuales, de conformidad con la consulta adelantada en Google Maps, corresponden a la siguiente localización:



Imagen 1. Conjunto Residencial Alondra y Conjunto Bosques de Tayrona Fuente: Google Maps.

1. INVENTARIO GENERAL DE ESPACIO PÚBLICO Y BIENES FISCALES DEL SECTOR CENTRAL DEL DISTRITO CAPITAL

1.1. Conjunto Residencial Tayrona - Urbanización Palos Verdes

El Conjunto Residencial Tayrona o Bosques de Tayrona identificado por el Accionante, hace parte de la Urbanización “Palos Verdes”, la cual se encuentra incorporada en el Inventario General de Espacio Público y Bienes Fiscales del Sector Central del Distrito Capital con el Código **RUPI 4486** tal y como se evidencia en la siguiente imagen:

⁴⁸ “ARTÍCULO 9.- SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO INMOBILIARIO. Corresponde a la Subdirección de Registro Inmobiliario del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público cumplir las siguientes funciones: (...) 3. Administrar, gestionar y actualizar la plataforma de inventario general del espacio público y bienes fiscales del Distrito Capital, de conformidad a los lineamientos del DADEP y la normatividad vigente en la materia.”

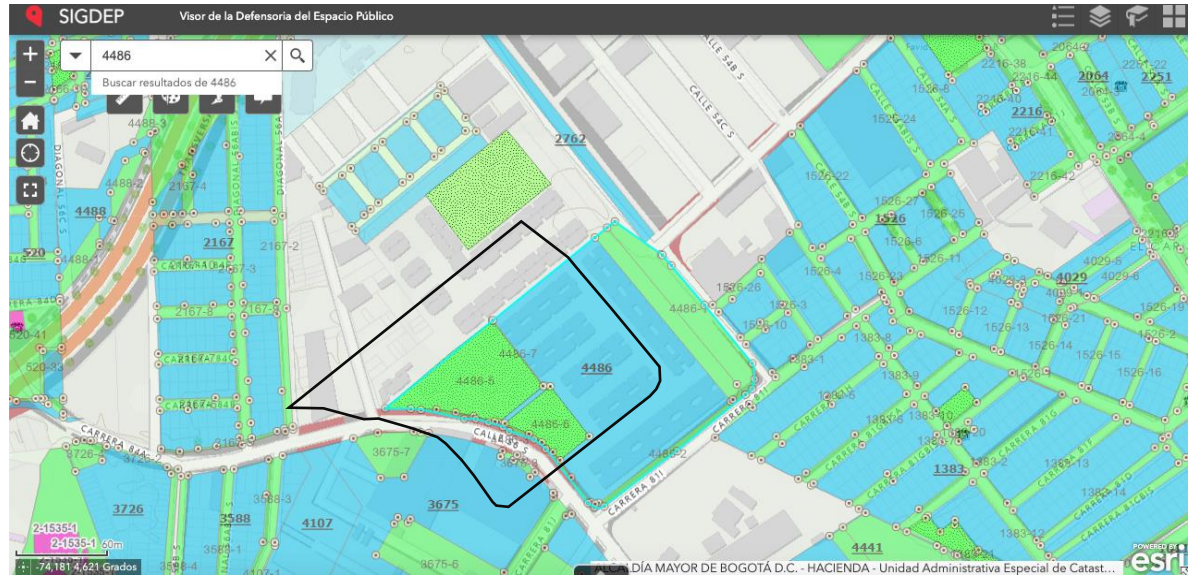


Imagen 2. RUPi 4486. Fuente: SIGDEP.

Consultado el mapa digital de la Defensoría del Espacio Público – **SIGDEP**- y el Sistema de Información de la Defensoría del Espacio Público –**SIDEP**- la Urbanización “Palos Verdes” fue incorporada en el Inventario el 12 de mayo de 2022. Corresponde a un urbanismo legal de la Localidad de Bosa, cuyo urbanizador responsable fue la Caja Colombiana de Subsidio Familiar -Colsubsidio-, cuenta con Licencia de Urbanización aprobada mediante Resolución RES 09-3-0010 del 14/01/2009 emitida por la Curaduría Urbana No. 3, modificada parcialmente por la Resolución RES 09-3-0254 del 10/06/2009 y prorrogada mediante la Resolución RES 11-3-0087 del 21/02/2011 de la Curaduría Urbana No. 3.

La Urbanización Palos Verdes cuenta con el Plano Urbanístico No. CU3-K.2/4-11 aprobado por la Resolución RES 09-3-0254 del 10/06/2009, urbanización que generó 7 zonas de cesión gratuitas al Distrito Capital, correspondientes a vías, control ambiental y parques, tal y como se evidencia a continuación:

RUPi	Nomenclatura/Ubicación	CHIP	Uso Nivel 2	Estado	Ver
4486-1	AC 55 SUR 82B 11	AAA0217CEO	AFECTACION AL PLAN VIAL	INCORPORADO	
4486-2	KR 81I 55 93 SUR	AAA0217CESK	VIAS VEHICULARES	INCORPORADO	
4486-3	CL 56 SUR 81J 04	AAA0217CERU	VIAS VEHICULARES	INCORPORADO	
4486-4	AC 55 SUR 82B 11 IN 1	AAA0217CEKL	AREA DE CONTROL AMBIENTAL	INCORPORADO	
4486-5	DG 56 SUR 81J 92	AAA0217CENN	PARQUE	INCORPORADO	
4486-6	DG 56 SUR 81J 78	AAA0217CEMS	PARQUE	INCORPORADO	
4486-7	DG 56 SUR 81J 92 IN 1	AAA0217CEPP	PARQUE	INCORPORADO	

Imagen 3. RUPi's Urbanización “Palos Verdes”. Fuente: SIDEPI.

Las citadas zonas de cesión contenidas en el Plano No. CU3-K.2/4-11, fueron recibidas por parte del DADEP mediante entrega simplificada con el Acta de Entrega No. 013 del

22/04/2022 y transferidas al Distrito Capital mediante la Escritura de Cesión No. 2935 del 20/10/2022 de la Notaría 3 del Circuito de Bogotá. Es importante mencionar que estas 7 zonas de cesión que suman 8.437,41 m2 se encuentran individualizadas, incorporadas en el inventario, hacen parte del Patrimonio y se encuentran certificadas.

De conformidad con las observaciones de campo consignadas en el Acta de Entrega Simplificada, "(...) De acuerdo con la visita de inspección realizada el 17 de marzo de 2022, se pudo establecer que las zonas de cesión pública que conforman la Urbanización denominada "PALOS VERDES" de la localidad de Bosa (7), en general se encuentran de conformidad con el Plano No. CU3-K.2/4-11, libres de cerramiento, invasiones indebidas y en uso libre de la comunidad, con excepción de la cesión por mayor edificabilidad dada la naturaleza urbanística (...).

Ahora bien, respecto del Conjunto Residencial Alondra, se recalca lo indicado en la contestación del hecho cuarto de la demanda, respecto a que el DADEP precisó esa propiedad hace parte de la Urbanización Escocia (Lote 18), pero advirtió que no se registra información que evidencie la entrega material y real al Distrito Capital, por parte del Urbanizador: Constructora Fundación Compartir, de la zonas de cesión gratuita obligatoria, pese a que esa entidad le ha efectuado a la fecha tres (3) requerimientos formales para que efectúe dicha entrega, sin obtener respuesta, por lo que no han sido formalmente incorporadas al Registro Único del Patrimonio Inmobiliario del Distrito Capital –RUPI-.

Al respecto indicó el DADEP:

"1.2. Conjunto Residencial Alondra - Urbanización Escocia (Lote 18)

De acuerdo con las consultas adelantadas en el Portal de Mapas Bogotá, el Conjunto Residencial Alondra hace parte de la Urbanización Escocia (Lote 18), urbanismo que, según la información del citado Portal, cuenta con las Resoluciones 10-1-0443 del 3/09/2010 y 11-3-0973 1/11/2011, y los Planos Urbanísticos CU1B322/4-01 y CU3B322/4-03 respectivamente, tal y como se evidencia en la siguiente imagen:



Consultado el Sistema de Información de la Defensoría del Espacio Público -**SIDEP**- la Urbanización Escocia (Lote 18) se encuentra en Pre-Inventario con el Código RUPI 4219, sin embargo, no cuenta con información que permita determinar que el urbanizador

responsable haya hecho entrega de las zonas de cesión gratuita al Distrito Capital. Consultado el mapa digital de la Defensoría del Espacio Público – SIGDEP-, la urbanización identificada con RUPI 4219 no se encuentra incorporada. No obstante, revisada la documentación en ROYAL y ORFEO de la entidad, se encontraron los siguientes antecedentes relevantes en relación con el RUPI 4219:

A. Primer Requerimiento

Mediante Radicado DADEP No. 2013EE11676 del 31/10/2013 este Departamento Administrativo requirió al Urbanizador Responsable, COMPARTIR, para iniciar el trámite de la entrega real y material de las zonas de cesión públicas que conforman la urbanización Escocia (Lote 18), de conformidad con las obligaciones urbanísticas definidas en el documento de aprobación como en lo señalado en el Decreto Distrital 161 de 1999 (modificado por el Decreto Distrital 502 de 2003).

Con el Radicado DADEP No. **2014EE8809 del 03/07/2014** se efectuó requerimiento al Urbanizador Responsable para que allegara la totalidad y de la documentación definida en el Decreto Distrital 161 de 1999 y con el fin de efectuar la incorporación de cada una de las zonas de cesión públicas de la Urbanización Escocia (Lote 18) en el Inventario del patrimonio Inmobiliario del Distrito Capital. Este requerimiento no fue atendido por el Urbanizador Responsable.

B. Segundo Requerimiento

De acuerdo con la información consultada en ROYAL de la entidad, con el Código de Archivo P/E152, se encontraron dos documento relacionados con esta urbanización, los cuales corresponden al Estudio Técnico Jurídico del RUPI 4219 con fecha del 23/07/2015 y al Radicado DADEP No. 2015EE9824 del 12/08/2016.

El citado Estudio Técnico Jurídico del RUPI 4219, concluye entre otras cosas, lo siguiente:

- “En el Sistema de Información de la Defensoría del Espacio Público - SIDEPE, se debe adelantar la incorporación predial en Nivel CENSO de cada una las zonas de cesión públicas de la Urbanización ESCOCIA (LOTE 18) de conformidad con el plano urbanístico No. CU3-B322/4-03 aprobados mediante la Resolución No. RES 11-3-0973 del 01/11/2011 de la Curaduría urbana No. 3.”
- “La Urbanización ESCOCIA (LOTE 18) no ha culminado el proceso de entrega real y material ni ha adelantado la transferencia de la titularidad de las zonas de cesión públicas al Distrito Capital, de conformidad con el procedimiento definido en el Decreto Distrital 161 de 1999 (Modificado Parcialmente por el Decreto Distrital 502 del 2003).”
- “Se debe adelantar requerimiento al Urbanizador Responsable con base en la información solicitada mediante el radicado DADEP No. 2014EE8809 con fecha del 03/07/2014, para que en un término no mayor a quince días, remita la documentación faltante y se culmine el trámite de la entrega real y material de las zonas de cesión de la urbanización ESCOCIA (LOTE 18).” (Subrayado fuera de texto)
- “En el caso que el urbanizador Responsable no remita la totalidad de la documentación requerida para continuar con el trámite de entrega de las zonas de

cesión públicas y expedir el Acta de Recibo, se remitirá el presente informe técnico jurídico a la Oficina Asesora de Planeación del DADEP, para que adelante las acciones jurídicas correspondientes al caso particular.” (Subrayado fuera de texto)

En consecuencia mediante el citado Radicado No. **2015EE9824 del 12/08/2016** el DADEP requirió al urbanizador responsable, COMPARTIR, la entrega de las Zonas de Cesión obligatorias gratuitas de la Urbanización Escocia (Lote 18), dado que este no había allegado la documentación faltante para establecer la viabilidad de adelantar el Acta de Recibo correspondiente, concediendo un término de 15 días hábiles para dar respuesta.

C. Tercer Requerimiento

Mediante Radicado DADEP No. **20232010012811 del 16/02/2023**, con copia a la Alcaldía Local de Bosa, este Departamento Administrativo hizo el tercer requerimiento de entrega de zonas de cesión gratuitas y obligatorias al Distrito Capital, de la Urbanización Escocia (Lote 18), mencionando, entre otras cosas, lo siguiente:

“(…) Teniendo en cuenta lo anterior, el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público – DADEP, una vez consultado el Sistema de Información de la Defensoría del Espacio Público – SIDEP y el Sistema de Información Geográfico de la Defensoría del Espacio Público - SIGDEP, evidenció que a la fecha no se ha cumplido con la obligación de la entrega real y material, ni se ha transferido al Distrito Capital las zonas cesión de uso público de la Urbanización “Escocia (Lote 18)”, ante este Departamento Administrativo.

En razón a lo anterior, esta Defensoría realiza el tercer requerimiento con el fin de que proceda a la entrega de las zonas de cesión obligatorias al Distrito Capital señaladas en las resoluciones de aprobación del referido urbanismo.

(…) En razón a lo anterior y dado que mediante radicados DADEP Nos. 2014EE8809 del 03/07/2014 (Primer requerimiento); 2015EE9824 del 12/08/2016 (Segundo requerimiento), esta Defensoría los ha requerido con el fin de que procedan a la entrega material de las zonas de terreno obligatorias al Distrito Capital señaladas en la resolución de aprobación sin obtener respuesta por su parte; esta Defensoría contar con su respuesta en un término no mayor a 15 días hábiles, luego de los cuales y en caso de no obtener respuesta se trasladará a la oficina Asesora Jurídica de la Entidad y Alcaldía Local con el fin de iniciar las acciones jurídicas a que haya lugar. (…)”.

De acuerdo con lo anterior, se encuentra evidenciado que el urbanizador responsable no atendió la solicitud hecha mediante los citados radicados y no ha adelantado la entrega de las Zonas de Cesión obligatorias gratuitas de la Urbanización Escocia (Lote 18), de conformidad con las Resoluciones RES 10-1-0443 1 del 3/09/2010 y RES 11-3-0973 1/11/2011, y los Planos Urbanísticos CU1B322/4-01 y CU3B322/4-03 respectivamente.”

Adicionalmente, el DADEP identificó las cinco (5) zonas de cesión gratuita obligatoria que se generaron respecto de la Urbanización Escocia (Lote 18), en la cual se ubica el Conjunto Residencial Alondra de la localidad de Bosa y se refiere a los demás sectores que se indican en la demanda popular, destacando que corresponden a áreas de cesión para control ambiental de la Avenida Primero de Mayo.

Sobre este punto señaló el DADEP:

“2. ZONAS IDENTIFICADAS POR EL ACCIONANTE

De acuerdo con el Estudio Técnico Jurídico del RUPI 4219 con fecha del 23/07/2015, la Urbanización Escocia (Lote 18) generó cinco (5) zonas de cesión al Distrito Capital, tal y como se evidencia en la siguiente imagen:

VÍAS VEHICULARES					
DESCRIPCIÓN DE LAS ZONAS DE CESIÓN O AFECTAS AL USO PÚBLICO					
NURB	NPRE	CESIÓN	MOJONES	ÁREA (m²)	Folio M.I.
4219	N/R	ÁREA DE CESIÓN PÚBLICA: AV. PRIMERO DE MAYO PARA AUMENTO DE EDIFICABILIDAD (Calle 55 Sur)	A-B-C-V2-V1-A	875,30	N/R
4219	N/R	DIAGONAL 56 BIS SUR 8V-7)	M1-M2-L-K-J-M1	55,85	N/R
TOTAL CESIÓN VÍAS VEHICULARES:				931,15	
CONTROLES AMBIENTALES					
DESCRIPCIÓN DE LAS ZONAS DE CESIÓN O AFECTAS AL USO PÚBLICO					
NURB	NPRE	CESIÓN	MOJONES	ÁREA (m²)	Folio M.I.
4219	N/R	CONTROL AMBIENTAL	A-B-C-D-E-F-G-A	889,88	N/R
TOTAL CESIÓN DE CONTROLES AMBIENTALES:				889,88	
CESIÓN TIPO A (PARQUES)					
DESCRIPCIÓN DE LAS ZONAS DE CESIÓN O AFECTAS AL USO PÚBLICO					
NURB	NPRE	CESIÓN	MOJONES	ÁREA (m²)	Folio M.I.
4219	N/R	CESIÓN PÚBLICA PARQUE	F-G-V17-H-K-F	2.842,06	N/R
4219	N/R	CESIÓN PÚBLICA ADICIONAL PARQUE PARA AUMENTO DE EDIFICABILIDAD	H-I-J-K-H	1.107,50	N/R
TOTAL CESIONES TIPO A:				3.949,56	
ÁREA TOTAL DE CESIONES AL DISTRITO:				5.770,59	

Imagen 5. Extracto Estudio Técnico RUPI 4219. Fuente: ROYAL DADEP

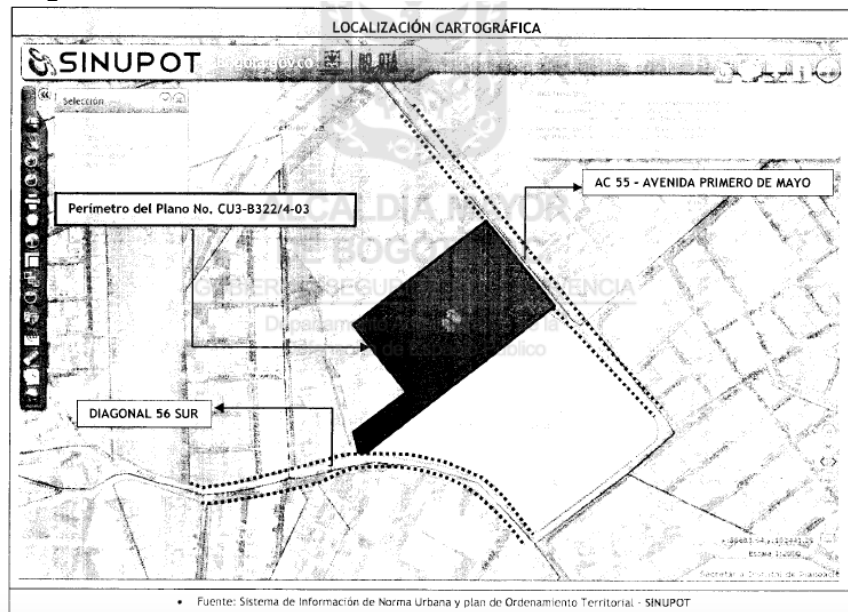


Imagen 6. Extracto Estudio Técnico RUPI 4219. Fuente: ROYAL DADEP

No fue posible conseguir el Plano Urbanístico CU3B322/4-03 que reemplaza el Plano Urbanístico CU1B322/4-01, sin embargo revisado este último se evidencia que las zonas identificadas por el Accionante hacen referencia las cesiones públicas para la Av. Primera de Mayo, para control ambiental y para parque, tal y como se observa en la siguiente imagen:



Imagen 7. Extracto Plano Urbanístico CU1B322/4-01. Fuente: Archivo SDP

Revisado el SINUPOT de la Secretaría Distrital de Planeación -SDP- se evidencia que el área de delimitación de la Urbanización Escocia (Lote 18) se encuentra desenglobada, tal y como se observa en la siguiente imagen:



Imagen 8. Delimitación Urbanización Escocia (Lote 18). Fuente: Imagen SINUPOT intervenida."

Téngase en cuenta que el DADEP indicó que las zonas de cesión de la Urbanización Escocia (Lote 18) del cual hace parte el Conjunto Residencial Alondra de la Localidad de Bosa, se encuentran afectas al uso público, de conformidad con lo establecido en el artículo 140⁴⁹ del Decreto Distrital 555 de 2021, independientemente de que no hayan sido entregadas material y jurídicamente al Distrito Capital y aun cuando permanezcan dentro del dominio privado, pero en cualquier caso, de conformidad con lo establecido en el artículo 122⁵⁰ *ídem*, precisó que no es posible efectuar el cerramiento de los elementos que conforman dicho sistema de espacio público peatonal y para el encuentro a excepción de lo establecido en el litera f del numeral 1 del citado precepto, circunstancia que imposibilita adoptar la medida de confinamiento de la parte posterior externa a la propiedad horizontal solicitada en la medida cautelar y como pretensión de la demanda.

Es por ello que dentro del insumo remitido por el DADEP se plantearon las siguientes conclusiones frente a la situación jurídica particular de las zonas de cesión gratuita obligatoria que corresponden al Conjunto Residencial Alondra:

“CONCLUSIONES

- La Zonas de Cesión gratuita de la **Urbanización “Palos Verdes”**, identificada por el Accionante como el **Conjunto Residencial Tayrona**, se encuentran ejecutadas y entregadas al Distrito Capital de conformidad con el Plano Urbanístico CU3-K.2/4-11, tal y como consta en el Acta de Entrega Simplificada No. 013 del 22/04/2022 y la Escritura de Cesión No. 2935 del 20/10/2022 de la Notaría 3 del Círculo de Bogotá. Al momento de la entrega de las zonas de cesión por parte del urbanizador responsable, tal y como menciona la citada acta, se encontraban libres de cerramiento, invasiones indebidas y en uso libre de la comunidad.
- Las Zonas de Cesión gratuita de la **Urbanización Escocia (Lote 18)**, identificada por el Accionante como el **Conjunto Residencial Alondra**, no han sido entregadas al Distrito Capital por el urbanizador responsable, pese a que el DADEP ha hecho tres (3) requerimientos a la Fundación Empresa Privada Compartir, de la entrega de estas zonas de cesión sin haber obtenido respuesta por parte del urbanizador.
- Las zonas de cesión de la **Urbanización Escocia (Lote 18)** se encuentran afectas al uso público, de conformidad con lo establecido en el artículo 140 del Decreto Distrital 555 de 2021, independientemente de que no hayan sido entregadas material y jurídicamente al Distrito Capital y aun cuando permanezcan dentro del dominio privado.
- De conformidad con lo establecido en el artículo 122 del Decreto Distrital 555 de 2021 no se permite el cerramiento de los elementos que conforman el sistema de espacio público peatonal y para el encuentro a excepción de lo establecido en el litera f del numeral 1 del citado artículo.

⁴⁹ “Artículo 140. Señalamiento de espacios públicos. Las zonas definidas como de uso público en los instrumentos de planificación y en los proyectos urbanísticos o parcelaciones aprobados por las autoridades competentes y respaldados por la correspondiente licencia de urbanización, cuando aplique, quedarán afectas a este fin específico, aun cuando permanezcan dentro del dominio privado, con el solo señalamiento que de ellas se haga en los instrumentos de planificación o en las licencias urbanísticas. En los proyectos de iniciativa pública que generen espacio público se elaborará el plano definitivo de los diseños aprobados por la entidad encargada de su ejecución. El plano será el documento de soporte para su recibo e inclusión en el inventario de patrimonio inmobiliario de la ciudad, sin que para ello se requiera plano urbanístico.”

⁵⁰ “Artículo 122. Criterios de diseño para el sistema de espacio público peatonal y para el encuentro. Atendiendo la estrategia de cualificación, integración y conectividad del sistema con las demás estructuras territoriales, se propiciará recorridos seguros, accesibles, autónomos, sostenibles, limpios y equitativos, con garantía de accesibilidad universal y calidad para todas las personas que hacen uso del espacio público, en especial para las mujeres, los niños y las niñas, las personas mayores y personas con discapacidad, se deberán seguir los siguientes criterios de diseño: (...) f. Se prohíben los cerramientos de los elementos que conforman el sistema de espacio público peatonal y para el encuentro. Excepcionalmente se permitirá el cerramiento de la infraestructura deportiva al interior de los parques de la red estructurante cuando se requiera para su correcto funcionamiento. Para los parques existentes que cuenten con cerramiento a la fecha de expedición del presente plan se deberá prever la eliminación paulatina del cerramiento atendiendo los criterios de vitalidad, conforme a la programación de su mantenimiento, diseño y/o construcción.”

- *El Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público -DADEP- deberá adelantar las acciones tendientes para garantizar la entrega al Distrito Capital, por parte del urbanizador responsable, de las Zonas de Cesión de la Urbanización Escocia (Lote 18) y/o la Toma de Posesión de las mismas, para que sean incorporadas en el Inventario General del Espacio Público y Bienes Fiscales del Distrito Capital del Nivel Central, conforme a lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto 072 de 2023 Por el cual se reglamentan las disposiciones sobre espacio público del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C., y se dictan otras disposiciones,...*

(...)

- *Adicionalmente se recomienda que la Alcaldía Local de Bosa, que en el ejercicio de sus funciones en cuanto al control urbanístico, adelante las acciones tendientes para garantizar que las Zonas de Cesión de la Urbanización Escocia (Lote 18), aunque no hayan sido entregadas al Distrito Capital pero que se encuentran afectas al uso público, permanezcan libres de cerramiento, invasiones indebidas y en uso libre de la comunidad."*

Atendiendo las manifestaciones expuestas por el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, queda claro que esa entidad viene desplegando las actuaciones necesarias y pertinentes en la órbita de sus funciones para la defensa, inspección, vigilancia regulación y control de los bienes fiscales y de uso público del Distrito Capital, y particularmente, en el caso *sub examine*, se encuentra adelantando los trámites para que se formalice la entrega material y jurídica a Bogotá D.C., de las zonas de cesión gratuita obligatoria que hacen parte del Conjunto Residencial Alondra de la localidad de Bosa, en los términos del Decreto Distrital 72 de 2023⁵¹ (artículo 15⁵²), como quiera que éstas no han sido adjudicadas a título de cesión por el Urbanizador de esa agrupación residencial.

4.5 Competencias y actuaciones de la Secretaría Distrital de Salud

Se destacó al dar contestación a los hechos de la demanda⁵³ que la Secretaría Distrital de Salud, por conducto de la Subdirección de Vigilancia en Salud Pública, al remitir el insumo para ejercer la representación de esa entidad en el presente medio de control constitucional, precisó que de conformidad con lo previsto por la Ley 715 de 2001⁵⁴, las entidades territoriales como el Distrito Capital, ejercen acciones de inspección, vigilancia y control en materia de salud, en los mismos

⁵¹ "Por el cual se reglamentan las disposiciones sobre espacio público del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C., y se dictan otras disposiciones

⁵² **Artículo 15. Procedimiento de entrega material de zonas de cesión resultante de procesos urbanísticos.** La entrega material de las zonas objeto de cesión resultante de los procesos de urbanización, parcelación y construcción se realizará mediante acta de recibo suscrita por el urbanizador y/o el titular de la licencia y el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público – DADEP. La solicitud por escrito deberá ser presentada por el urbanizador y/o el titular de la licencia a más tardar dentro de los seis (6) meses siguientes al vencimiento del término de vigencia de la licencia o de su revalidación, según corresponda. El acta de recibo será soportada por los pronunciamientos de las entidades competentes y por una inspección ocular que realizará el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público – DADEP – donde se constate el área y el estado de las obras. Dicha acta dará cuenta del cumplimiento de las obligaciones a cargo del titular de la licencia y/o urbanizador establecidas en la respectiva licencia. Esta acta comprende el recibo material de la totalidad de las zonas de cesión establecidas en la respectiva licencia urbanística o de las etapas urbanísticas independientes y autosuficientes, según corresponda, descritas en el cuadro de mojonos y cesión de zonas de los planos vigentes aprobados por la autoridad competente. Cuando cumplidos los seis (6) meses siguientes al vencimiento del término de la vigencia de la licencia o su revalidación, los urbanizadores y/o titulares de la licencia no hayan realizado la solicitud de entrega, el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público –DADEP – deberá requerirlos para el cumplimiento de la obligación de entrega y escrituración de las áreas públicas objeto de cesión obligatoria. Una vez requerido, el urbanizador y/o titular de la licencia contará con un término que no podrá exceder de quince (15) días hábiles siguientes al recibo del respectivo requerimiento. En caso de no recibir respuesta, el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público – DADEP – procederá con el inicio de las actuaciones administrativas y jurídicas que permitan la incorporación de las zonas de cesión al inventario general de espacio público y bienes fiscales del Distrito Capital a las que se hace referencia en el Subcapítulo 5 del presente Capítulo de este acto administrativo y las demás que sean aplicables en el marco normativo vigente al caso concreto. **Parágrafo 1.** El Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público – DADEP – se abstendrá de realizar el recibo sobre áreas que se encuentren invadidas, ocupadas y/o encerradas; cuando se presente dicha situación, el responsable de la entrega deberá efectuar las acciones correspondientes previo al trámite de entrega material. **Parágrafo 2.** Cuando la licencia de construcción se otorgue de manera simultánea, o dentro de la vigencia de la licencia de urbanización, la habilitación de los usos del proyecto inmobiliario estará sujeta a que el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público – DADEP – haya emitido el acta de recibo o se hayan vencido los términos para atender la solicitud de entrega sin que esta entidad se haya pronunciado.

⁵³ Hechos 7 y 18 de la demanda

⁵⁴ "Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros."

términos que las otorgadas a los departamentos (artículo 45⁵⁵), en relación en asuntos como los factores de riesgo presentes en el ambiente que puedan afectar la salud humana (artículo 44)⁵⁶, competencias que se asumen a través de la referida subdirección en los términos del Decreto Distrital 507 de 2013⁵⁷, artículo 13⁵⁸.

Aclaró la Secretaría Distrital de Salud que dichas funciones se desarrollan en concordancia con el Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas PSPIC, a través del correspondiente Convenio PSPIC suscrito con cada una de las Subredes Integradas de Servicios de Salud –E.S.E.–, cuyo propósito fundamental es incidir en los riesgos colectivos e individuales generados por las condiciones de vida de la población en el contexto urbano y rural para prevenir y controlar la enfermedad, así como contribuir al mantenimiento de la salud.

En ese contexto, la vigilancia en la Línea de Calidad de Agua y Saneamiento Básico tiene como finalidad el mejoramiento de la seguridad sanitaria de la población en el Distrito Capital, a través de la identificación, análisis y gestión de riesgos asociados al uso y consumo de bienes y servicios, como el abastecimiento de agua para consumo humano, manejo integral de residuos y las condiciones higiénico-sanitarias de los objetos de vigilancia de esta línea de salud ambiental.

Al respecto aclara la Secretaría Distrital de Salud que:

“...las intervenciones de la Línea de Calidad de Agua y Saneamiento Básico para consumo humano se realizan sobre establecimientos abiertos al público y no sobre el espacio público o unidades residenciales; no obstante lo anterior, se precisa que, dependiendo del caso particular, la Secretaría Distrital de Salud actúa con base en las competencias de la vigilancia del saneamiento básico, con el objeto de valorar el posible grado de afectación de las edificaciones, infraestructuras o espacio público, en la calidad de vida de los habitantes, cuyo resultado es útil para analizar y determinar las acciones pertinentes.”

Ahora bien, esa entidad informó en relación con el asunto que ocupa la atención del despacho, que por conducto de la entidad Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente –E.S.E.–, adscrita al sector salud en los términos del artículo 32⁵⁹ del Acuerdo Distrital 641 de 2016, realizó visita de inspección al Conjunto Residencial Alondra, el 10 de julio de 2023, con el objeto de verificar el estado de saneamiento básico de la propiedad horizontal así como las posibles afectaciones externas, de acuerdo con la zona de problemática señalada, y poder valorar el posible grado de perturbación en la calidad de vida de los habitantes, la cual fue atendida por la administradora de la agrupación (actora popular), encontrando que para la fecha en que se llevó la actuación se evidenciaban en la zona vehículos de carga y material de desecho que podrían generar olores ofensivos para los residentes, por lo cual se realizaron las recomendaciones para realizar las acciones pertinentes en el espacio público en aras del bienestar de los habitantes.

⁵⁵ “**ARTÍCULO 45.** Competencias en salud por parte de los Distritos. Modificado por el Artículo 25 de la Ley 1176 de 2007. Los distritos tendrán las mismas competencias que los municipios y departamentos, excepto aquellas que correspondan a la función de intermediación entre los municipios y la Nación.”

⁵⁶ “**ARTÍCULO 44.** Competencias de los municipios. Corresponde a los municipios dirigir y coordinar el sector salud y el Sistema General de Seguridad Social en Salud en el ámbito de su jurisdicción, para lo cual cumplirán las siguientes funciones, sin perjuicio de las asignadas en otras disposiciones: (...) 44.1. Adicionado por el Artículo 33 de la Ley 1176 de 2007. De dirección del sector en el ámbito municipal: (...) 44.3. De Salud Pública (...) 44.3.3. Además de las funciones antes señaladas, los distritos y municipios de categoría especial, 1, 2 y 3, deberán ejercer las siguientes competencias de inspección, vigilancia y control de factores de riesgo que afecten la salud humana presentes en el ambiente, en coordinación con las autoridades ambientales.”

⁵⁷ “Por el cual se modifica la Estructura Organizacional de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, D.C.”

⁵⁸ “**ARTÍCULO 13º. SUBDIRECCIÓN DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA.** Corresponde a la Subdirección de Vigilancia en Salud Pública el ejercicio de las siguientes funciones: 1. Implementar estrategias y metodologías para la vigilancia epidemiológica y sanitaria en el Distrito Capital. (...) 12. Cumplir y hacer cumplir las normas de orden sanitario previstas por la ley y normas sanitarias vigentes delegadas a la Secretaría. 13. Supervisar las acciones de vigilancia y control sanitario en el Distrito Capital.”

⁵⁹ “**ARTÍCULO 32º. Integración del Sector Salud.** El Sector Salud está integrado por la Secretaría Distrital de Salud, cabeza del Sector, y las siguientes entidades y organismos: **Entidades Adscritas:** (...) Empresas Sociales del Estado: Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.”

Al respecto se registraron los siguientes hallazgos de la visita técnica⁶⁰:

“Se evidencia presencia de residuos en la parte posterior del conjunto, sin embargo, al momento de la inspección no se evidencia presencia de vectores.

- Se evidencia espacio público en la parte posterior de la unidad habitacional, el cual esta siendo usado como parqueadero. De acuerdo a testimonio de residentes, se informa que también es usado este espacio como cementerio de mascotas.

- Al momento de hacer la inspección y el recorrido por la zona afectada se evidencia presencia de camiones y material de desecho en la zona, lo cual genera olores ofensivos.

En el acta de inspección SB02001038, en el espacio “observaciones de quien atiende la visita”, la señora CRISTINA PARDO BALLESTEROS expresó:

“(…) Solicito jornadas para control de roedores y vectores”

Acción la cual se coordinó para realizar, iniciando con el diagnostico de control vectorial, el día 11/07/2023.”

Con lo anterior se acredita ante el despacho judicial que dentro del marco misional y organizacional que establece el Decreto 507 de 2013, la Secretaría Distrital de Salud cumple actividades de dirección, coordinación, vigilancia y control de la salud pública y del Sistema General de Seguridad Social en el Distrito Capital, mediante la formulación de políticas, estrategias, planes y proyectos, supervisión que en materia de control sanitario lleva a cabo la Subdirección de Vigilancia en Salud Pública, pero además, para el presente caso, se encontró que la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente –E.S.E.–, adelantó una visita técnica para atender e identificar los factores de contaminación por vectores y olores ofensivos que reseña la administradora del Conjunto Residencial Alondra, encontrando que se puede vincular a la ocupación del espacio público aledaño con material de reciclaje y eventual estacionamiento de vehículos de carga, para lo cual, además de efectuar recomendaciones para el manejo de las zonas de espacio público, se agendaron jornadas para el diagnóstico y control de roedores y otros vectores.

Ya se ha señalado que este tipo de actuaciones deben tener un carácter continuado, sin que la realización de visitas y actividades previas e incluso concomitantes a la instauración del medio de control implique el agotamiento de la problemática denunciada.

Lo expuesto lleva a concluir que la Secretaría Distrital de Salud no ejerce competencias directamente vinculadas con la problemática planteada en la demanda popular, sino que las actuaciones pertinentes han sido ejecutadas por conducto de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente –E.S.E., por lo cual se le solicitará al despacho su desvinculación de la presente acción constitucional, sin perjuicio que de resultar necesario y en el marco propio de sus funciones, pueda adelantar o coadyuvar actividades o gestiones tendientes a garantizar los derechos colectivos que se estiman vulnerados.

4.6 Competencias y actuaciones de la Secretaría Distrital del Hábitat

Al remitir el correspondiente insumo para la contestación de la demanda popular⁶¹, la Subsecretaría Jurídica de la Secretaría Distrital del Hábitat señaló que ejerce sus funciones dentro

⁶⁰ Que quedaron consignados en el acta No. SB02001038 que se adjunta como prueba

⁶¹ Mediante escritos con radicaciones 2-2023-50614 del 12 de julio de 2023 y 2-2023-52099 del 18 de julio de 2023, que se adjuntan con la contestación de la demanda

del marco competencial que establecen la Ley 66 de 1968⁶², los Decretos Nacionales 2610 de 1979⁶³, 78 de 1987⁶⁴, y el Decreto Distrital 121 de 2008⁶⁵, este último en virtud del cual su misionalidad consiste en formular las políticas de gestión del territorio urbano y rural en orden a aumentar la productividad del suelo urbano, garantizar el desarrollo integral de los asentamientos y de las operaciones y actuaciones urbanas integrales, facilitar el acceso de la población a una vivienda digna y articular los objetivos sociales económicos de ordenamiento territorial y de protección ambiental (artículo 2^o⁶⁶).

Desde esta perspectiva precisó que en cumplimiento de dicho propósito esencial cumple, por conducto de la Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda (literales b, c y d del artículo 20⁶⁷ del Decreto 121 de 2008), así como a través de la Subdirección de Investigaciones y Control de Vivienda (literales a y b del artículo 22 *ídem*⁶⁸) con la función de realizar inspección, vigilancia y control a la actividad de enajenación de inmuebles destinados a vivienda, actividad que se desarrolla, entre otras acciones, mediante la facultad de tomar los correctivos necesarios para contrarrestar las situaciones de incumplimiento de las normas que rigen la actividad de la enajenación y lograr que las personas vigiladas se adecúen a las mismas, a través de la imposición de órdenes y requerimientos.

En este sentido la Secretaría Distrital del Hábitat precisó que para el caso *sub judice* las funciones que cumple esa entidad no se relacionan en forma directa con los hechos y situaciones descritas en la acción popular, porque las mismas no están referidas a la entrega y culminación de las áreas que se ceden como espacio público al Distrito Capital, en especial teniendo en cuenta, según ya se ha indicado, que las zonas de cesión gratuita obligatoria correspondientes al Conjunto Residencial Alondra de la localidad de Bosa, no han sido entregadas al Distrito Capital por parte del urbanizador.

Igualmente se aclara que es un deber del constructor y urbanizador cumplir a cabalidad con las obligaciones urbanísticas impuestas por la licencia de construcción y, por su parte, corresponde a los inspectores de policía ejercer el control urbano, esto es que se haga seguimiento a las construcciones y obras y que estas se ajusten a las licencias urbanísticas, entre otros comportamientos que favorecen la integridad urbanística, de conformidad con el artículo 135⁶⁹ y el numeral 2^o⁷⁰ del artículo 181 de la Ley 1801 de 2016, así como respecto del adecuado uso del

⁶² Por medio de la cual se dictaron disposiciones sobre el ejercicio de las funciones de inspección y vigilancia de las actividades relacionadas con la enajenación de inmuebles destinados a vivienda y sobre el otorgamiento de créditos para la adquisición de lotes o viviendas o para la construcción de estas

⁶³ "Por el cual se reforma la Ley 66 de 1968"

⁶⁴ "por el cual se asignan unas funciones a entidades territoriales beneficiarias de la cesión del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.)."

⁶⁵ "Por medio del cual se modifica la estructura organizacional y las funciones de la Secretaría Distrital del Hábitat"

⁶⁶ "ARTÍCULO 2°. OBJETO. La Secretaría Distrital del Hábitat tiene por objeto formular las políticas de gestión del territorio urbano y rural en orden a aumentar la productividad del suelo urbano, garantizar el desarrollo integral de los asentamientos y de las operaciones y actuaciones urbanas integrales, facilitar el acceso de la población a una vivienda digna y articular los objetivos sociales económicos de ordenamiento territorial y de protección ambiental."

⁶⁷ "ARTÍCULO 20°. SUBSECRETARÍA DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE VIVIENDA: Modificado por el art. 1. Decreto Distrital 578 de 2011. Son funciones de la Subsecretaría Distrital de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda, las siguientes: (...) b. Ejercer las funciones de inspección, vigilancia y control de las personas naturales y jurídicas que desarrollen actividades de anuncio, captación de recursos, enajenación y arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda con el objeto de prevenir, mantener o preservar el derecho a la vivienda digna, al patrimonio y al orden público, en los términos de la Ley y los reglamentos. c. Ejercer las funciones de inspección, vigilancia y control de las personas naturales y jurídicas que adelanten planes y programas de vivienda por los sistemas de autogestión o participación comunitaria, así como de las transferencias del dominio de las soluciones de vivienda resultantes de los mismos, conforme a las normas y procedimientos establecidos sobre la materia. d. Diseñar mecanismos de prevención, control, inspección y vigilancia de las personas naturales y jurídicas que desarrollen actividades de anuncio, captación de recursos, enajenación o arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda, sin las autorizaciones legales pertinentes."

⁶⁸ "ARTÍCULO 22°. SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES Y CONTROL DE VIVIENDA: Son funciones de la Subdirección de Investigaciones y Control de Vivienda, las siguientes: a. Adelantar las investigaciones y demás actuaciones administrativas pertinentes cuando existan indicios de incumplimiento a las normas vigentes por parte de las personas naturales y jurídicas que realicen las actividades de enajenación o arrendamiento de vivienda. b. Expedir los actos administrativos que sean necesarios para tramitar, sustanciar y resolver las investigaciones y las demás actuaciones administrativas que se adelanten en ejercicio de las facultades de inspección, vigilancia y control a las actividades de anuncio, captación de recursos, enajenación y arrendamiento de vivienda. Estas facultades comprenden las de imponer sanciones, impartir órdenes, decretar medidas preventivas, resolver recursos, entre otras."

⁶⁹ "ARTÍCULO 135. Comportamientos contrarios a la integridad urbanística. Los siguientes comportamientos, relacionados con bienes inmuebles de particulares, bienes fiscales, bienes de uso público y el espacio público, son contrarios a la convivencia pues afectan la integridad urbanística y por lo tanto no deben realizarse, según la modalidad señalada: (...) "

⁷⁰ "ARTÍCULO 181. Multa especial. Las multas especiales se clasifican en tres tipos: (...) 2. Infracción urbanística. A quien incurra en cualquiera de las infracciones urbanísticas señaladas en el Libro II del presente Código o en las disposiciones normativas vigentes, se le impondrá además de otras medidas correctivas que sean aplicables y las sanciones de tipo penal a que haya lugar, multa por metro cuadrado de construcción bajo cubierta, de área de suelo afectado o urbanizado o de intervención sobre el suelo, según la gravedad del comportamiento, de conformidad con el estrato en que se encuentre ubicado el inmueble, así: (...) "

suelo y ocupación del espacio público, como en efecto ha venido ocurriendo de acuerdo con la información suministrada por la Alcaldía Local de Bosa.

Por tal razón, se encuentra improcedente que en este caso se formule como pretensión que se ordene a la Secretaría Distrital del Hábitat adelantar las gestiones necesarias para la incorporación y cesión de las zonas de cesión gratuita pactadas como contraprestación al desarrollo Urbano Conjunto Residencial Alondra, no solo porque según se ha indicado, dicho trámite viene siendo adelantado por el DADEP en ejercicio de sus competencias, sino particularmente porque *“...el caso alegado no corresponde a un asunto que obedezca a un asentamiento humano de carácter informal, que dé lugar a una valoración para una futura legalización urbanística, así una vez verificado el proyecto objeto de la acción popular, se tiene que el mismo se enmarca en un desarrollo por urbanización de origen formal.”*, que en efecto corresponde a la referida propiedad horizontal, la cual hace parte de la Urbanización Escocia (Lote 18).

Frente a la pretensión relacionada con la incorporación de las zonas de cesión que no han sido entregadas al Distrito, se recalca que en el marco de las funciones de la Secretaría Distrital del Hábitat esta no cuenta con la facultad para imponer medidas correctivas, expedir decisiones administrativas o adelantar una actuación contra los urbanizadores que no han formalizado la entrega de los respectivos espacios.

Con todo, en cumplimiento de su propósito esencial de garantizar el desarrollo integral de asentamientos urbanos y facilitar el acceso de las personas a una vivienda digna (literales j, k, l, m, y n del artículo 17⁷¹ del Decreto Distrital 121 de 2008), la Secretaría Distrital del hábitat, a través de la Subdirección de Barrios, coordina la operatividad del proceso de legalización y regularización de desarrollos, asentamientos o barrios localizados en el Distrito Capital, previo a la presentación ante la Secretaría Distrital de Planeación para su aprobación o improbación y surte las demás actuaciones necesarias para la titulación predial, en tanto dicho proceso de regularización urbanística corresponde a un procedimiento o instrumento de planeación utilizado para realizar los ajustes urbanísticos necesarios en los barrios de origen informal que fueron legalizados, situación que no se presenta respecto de la agrupación que entabla la acción popular, como quiera que se trata de una urbanización formalmente desarrollada y entregada a los compradores de las soluciones de vivienda.

Lo expuesto permite inferir razonablemente que la Secretaría Distrital de Hábitat no tiene competencias directamente vinculadas con la problemática planteada en la demanda popular, por lo cual se le solicitará al despacho su desvinculación de la presente acción constitucional, sin perjuicio que de resultar necesario y en el marco propio de sus funciones, pueda adelantar o coadyuvar actividades o gestiones tendientes a garantizar los derechos colectivos que se estiman vulnerados.

4.7 Actuaciones de otras entidades distritales

Sea lo primero advertir que este acápite se desarrollará con el exclusivo propósito de recalcar al despacho judicial las actividades que de manera integral y articulada han sido desplegadas por otras entidades distritales para atender la problemática vinculada a la indebida ocupación y uso del

⁷¹ **“ARTÍCULO 17°. SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS:** Son funciones de la Subdirección de Barrios, las siguientes: (...) j. Coordinar la operatividad del proceso de legalización y regularización de desarrollos, asentamientos o barrios localizados en el Distrito Capital, previo a la presentación ante la Secretaría Distrital de Planeación para su aprobación o improbación. k. Adelantar la gestión del proceso de titulación predial, conforme a lo dispuesto en la normatividad vigente. l. Diseñar esquemas de coordinación interinstitucionales que faciliten la intervención de los programas de legalización y regularización de barrios y titulación predial en el Distrito. m. Diseñar e implementar la construcción de la línea de base y los instrumentos de seguimiento y monitoreo de los programas de legalización y regularización de barrios y titulación predial. n. Adelantar las gestiones y asistencia técnica necesarias para realizar el proceso de legalización urbanística de los asentamientos de origen informal así como para el proceso de regularización de barrios y titulación predial.”

espacio público en el sector aledaño al Conjunto Residencial Alondra de la localidad de Bosa, a que se hace referencia en la demanda popular.

- **Secretaría Distrital de Planeación**

Como se indicó al hacer pronunciamiento a los hechos de la demanda, mediante comunicación 2-2022-155529 del 27 de octubre de 2022⁷², la Dirección de Vías, Transporte y Servicios Públicos de la Secretaría Distrital de Planeación atendió el requerimiento formulado por la Personería de Bogotá en relación con el uso del suelo y la destinación del tramo vial ubicado en la Carrera 82 B, por un perímetro aproximado de dos cuadras, situado frente a la nomenclatura Carrera 82B 54B Sur- 11, donde también está ubicado el Parque Vecinal denominado Urb. Palos Verdes de la Localidad de Bosa.

Al respecto, dicha dependencia suministró la siguiente información:

“La Dirección de Vías, Transporte y Servicios Públicos procede a responder la consulta, en el marco de lo dispuesto por el Decreto Distrital 555 de 2021 y la Base de Datos Geográfica Corporativa – BDGC:

1. Componente Urbanístico:

Se informa que el Predios ubicados en la DG 56 BIS SUR 84 A 8 y KR 82 B 54 B 11 SUR, se encuentran en el Plano Urbanístico cu1b322/4-01, correspondiente a “ESCOCIA LOTE 18”, así como en el Plano de Incorporación Topográfico del Predio “PORTAL DE CALI-AV CIUDAD DE CALI CON CALLE 56 SUR – 2013-209902”, respectivamente. Cabe destacar que el plano 2013-209902 se encuentra desactualizado, este predio en la actualidad es una Área en Estudio para proceso de Legalización. (Ver Imagen No. 1)

2. Componente Malla Vial:

2.1 Componente Malla Vial Arterial: Se informa que revisada la cobertura de Red infraestructura vial arterial de la Base de Datos Geográfica Corporativa (BDGC); que entre los Planos cu1b322/4-01 y 2013-209902 se tiene el trazado de la zona de reserva vial de la Avenida Primero de Mayo, cuyo tramo comprendido entre la Avenida Agoberto Mejía Cifuentes y la Avenida Ciudad de Cali se tipifica como A-2 de 40.00 metros, cuya concreción se tiene prevista en el mediano plazo en el marco del Decreto 555 del 29 de diciembre de 2021. Por el costado Sur de la Avenida Primero de Mayo, se tienen las cesiones al Distrito que se presentan en la Imagen No. 2

⁷² A la cual se alude en el hecho 31



Fuente: Planos cu1b322/4-01 y 2013-209902, Base de datos Geográfica Corporativa y Orthofoto del año 2014 (Imagen No. 1)

2. Componente Malla Vial:

2.1 Componente Malla Vial Arterial:

Se informa que revisada la cobertura de Red infraestructura vial arterial de la Base de Datos Geográfica Corporativa (BDGC); que entre los Planos cu1b322/4-01 y 2013-209902 se tiene el trazado de la zona de reserva vial de la Avenida Primero de Mayo, cuyo tramo comprendido entre la Avenida Agoberto Mejía Cifuentes y la Avenida Ciudad de Cali se tipifica como A-2 de 40.00 metros, cuya concreción se tiene prevista en el mediano plazo en el marco del Decreto 555 del 29 de diciembre de 2021. Por el costado Sur de la Avenida Primero de Mayo, se tienen las cesiones al Distrito que se presentan en la Imagen No. 2.

CUADRO DE MOJONES Y ÁREAS DE CESIONES GRATUITAS AL DISTRITO			
DESCRIPCIÓN	MOJONES	M2	
2. ÁREA CESIÓN PÚBLICA AV. PRIMERO DE MAYO	V1-V2-V3-V4-V5-V6-V7	649.21	
3.1.1 CONTROL AMBIENTAL 1	O-N-Q-P-V8-Q	183.87	
3.1.2 CONTROL AMBIENTAL 2	M-J-J-A-C-K-U-L-M-M	366.74	
3.1.3 CONTROL AMBIENTAL 3	H-H-G-F-I	81.19	
3.2.1 CESIÓN PÚBLICA PARQUE	P-Q-C-C-S-A-V-B-P	2.837.86	
3.4. VÍAS LOCALES	N-M-M-L-L-R-K-V-J-H-F-E-D-C-Q-N	574.82	

Fuente: Plano cu1b322/4-01, Base de datos Geográfica Corporativa y Orthofoto del año 2014 (Imagen No. 1)

2.2 Componente Malla Vial Local:

Consultada la cobertura Sistema vial de la BDGC, se tiene que la Carrera 82B entre la Avenida Primero de Mayo y la Calle 54 B Sur, corresponde una vía Intermedia tipo I-5 de 18,00 metros de ancho mínimo entre líneas de demarcación, con una sección transversal con andenes de 4.50 metros en sus dos costados y una calzada vehicular de 9.00 metros, el radio de demarcación para la intersección de la Avenida Primero de Mayo y la Carrera 82B es de 7.00 metros, tal como se indica en el plano topográfico, esto es conforme con la Resolución 77 de 23/02/1990, la cual se adjunta."

Como se advierte, mediante dicho informe técnico la Secretaría Distrital de Planeación confirma que el sector donde se encuentra el Conjunto Residencial Alondra de la Localidad de Bosa hace parte del predio Escocia (Lote 18), con áreas de estudio para legalización, y respecto al componente de la malla vial arterial aledaña se precisa que se trata de una zona de reserva vial de la Avenida Primero de Mayo comprendido entre la Avenida Agoberto Mejía Cifuentes y la Avenida Ciudad de Cali, tipificada como A-2 de 40 metros de ancho, "...cuya concreción se tiene prevista en el mediano plazo en el marco del Decreto 555 del 29 de diciembre de 2021.", que incluyen por

el costado sur de la Avenida Primero de Mayo, varias zonas de cesión para construcción de la vía, control ambiental y parques.

Por su parte, para la malla vial local se precisa la carrera 82B entre la Avenida Primero de Mayo y la Calle 54B Sur, corresponde a una vía intermedia tipo I-5 de 18 metros de ancho entre líneas de demarcación, con una sección transversal de andenes de 4.50 metros entre sus dos costados, y una calzada vehicular de 9 metros, con un radio de demarcación para la intersección de la Avenida Primero de Mayo y la Carrera 82B de 7 metros, conforme a lo previsto en la Resolución 77 del 23 de febrero de 1990⁷³, expedida por el Departamento Administrativo de Planeación Distrital (hoy Secretaría Distrital de Planeación).

Es así como la Dirección de Defensa Judicial de la Secretaría Distrital de Planeación⁷⁴ informó que en desarrollo de las funciones que el artículo 20⁷⁵ del referido decreto le asigna a la Dirección de Estructuras y Sistemas Territoriales, entre otras, para coordinar la elaboración de estudios e informes técnicos vinculados con las estructuras territoriales, sistemas territoriales, normas de usos del suelo y las áreas de actividad (literal a), así como para definir las zonas de reserva de espacio público, equipamientos, movilidad y servicios públicos (literal g), y en el marco de lo dispuesto por el Decreto Distrital 555 de 2021 y la Base de Datos Geográfica Corporativa -BDGC-, esta última área reiteró la información suministrada en su momento a la Personería Distrital, agregando lo siguiente en relación con la ubicación del Conjunto Residencial Alondra de la localidad de Bosa:

“Con respecto al área específica señalada en la Acción Popular según las imágenes referenciadas como “Consulta Google Maps 23/05/2023 ubicación y señalando perímetro del Conjunto Residencial Alondra y parte posterior3 ” y “MAPA SINUPOT11”, se informa de acuerdo con el plano cu1b322/4-01 que estas corresponden a una vía de servicio de acceso en paralelo de la Futura Avenida Primero de Mayo, a sus correspondientes Zonas de Control Ambiental, así como una cesión pública para dicha vía de la Malla Vial Arterial,...”

Igualmente, dentro del insumo que allegó la Dirección de Defensa Judicial de la Secretaría Distrital de Planeación se ratificó lo relacionado con el componente de malla vial arterial para la Avenida Primero de Mayo, en el tramo comprendido entre la Avenida Agoberto Mejía Cifuentes y la Avenida Ciudad de Cali, como zona de reserva vial, y se agregó que *“Con respecto a la Vía de Servicio de Acceso Paralela a la Avenida Primero de Mayo, correspondiente en el “Cuadro de Mojones y Áreas de Cesiones Gratuitas al Distrito” a Vías Locales”,* teniendo en cuenta la fecha de aceptación del plano cu1b322/4-01 (13 de septiembre de 2010), se aplica lo dispuesto por el artículo 172 del Decreto 190 de 2004⁷⁶, norma que compilaba las anteriores disposiciones sobre Plan de Ordenamiento Territorial -POT- de Bogotá, vigente en ese momento, precepto en virtud de la cual:

“(…) La ejecución de la malla vial intermedia y local en terrenos en proceso de urbanización deberán ser construidas y cedidas gratuitamente al Distrito por parte del urbanizador responsable, y deberá ajustarse a las determinaciones técnicas establecidas para la misma en el presente capítulo y/o a los condicionamientos fijados por los respectivos planes parciales.”

⁷³ “Por la cual se reglamenta el desarrollo incompleto denominado: AMARUC”

⁷⁴ Mediante comunicación 2-2023-76217 del 13 de julio de 2023, que se adjunta como prueba

⁷⁵ **Artículo 20º.- Dirección de Estructuras y Sistemas Territoriales.** Son funciones de la Dirección de Estructuras y Sistemas Territoriales, las siguientes:
a. Coordinar la elaboración de estudios, análisis técnicos y modelaciones asociadas con las estructuras territoriales, sistemas territoriales, planes maestros, ecourbanismo y construcción sostenible, así como las normas de usos del suelo y las áreas de actividad, y los instrumentos de gestión y financiación del suelo. (...) g. Definir las zonas de reserva de espacio público, equipamientos, movilidad y servicios públicos y realizar seguimiento a la ejecución de los proyectos de utilidad pública.”

⁷⁶ “Por medio del cual se compilan las disposiciones contenidas en los Decretos Distritales **619** de 2000 y **469** de 2003”

Normativa que resulta consistente con lo previsto por el artículo 156 del Decreto 555 de 2021, actual POT para Bogotá, en cuanto señala:

“(…) Parágrafo 1. Las mallas intermedia y local en terrenos en proceso de urbanización deberán ser construidas y cedidas gratuitamente al Distrito por parte del urbanizador responsable, y deberá ajustarse a las determinaciones técnicas establecidas para la misma, en el presente Plan y/o en los planes parciales y licencias urbanísticas respectivas. El seguimiento y acompañamiento técnico de este tipo de obras y de las que se desarrollen en la malla arterial por parte de los urbanizadores estará a cargo del Instituto de Desarrollo Urbano –IDU-.”

Se señala también respecto a las zonas de control ambiental, que de acuerdo con el Decreto Distrital 327 de 2004⁷⁷, vigente en el momento de aceptación del Plano cu1b322/4-01 por parte de la Curaduría Urbana No. 1, se aplica igualmente lo previsto por el literal d del artículo 49 de dicha norma, que prevé:

“ARTÍCULO 49. OBLIGACIONES GENERALES DEL URBANIZADOR. Sin perjuicio de lo establecido para urbanizaciones de desarrollo progresivo, son obligaciones del urbanizador, entre otras, las siguientes:

(…)

d. Adecuar y empedrar las zonas de cesión pública para equipamientos y las zonas de control ambiental.”

Se ratifica por su parte la información sobre la categorización de la malla vial local que comprende la Carrera 82B entre la Avenida Primero de Mayo y la Calle 54 B Sur, como vía Intermedia tipo I-5 de 18 metros de ancho mínimo entre líneas de demarcación, y demás datos de dimensión de andenes (4.50 metros), calzada vehicular (9 metros) y radio de demarcación para la intersección de la Avenida Primero de Mayo y la Carrera 82B (7 metros).

Hechas estas consideraciones, dentro del insumo presentado por la Dirección de Defensa Judicial de la Secretaría Distrital de Planeación se concluye que *“la construcción y entrega de las Vías Locales y la adecuación y empedrado de zonas de control ambiental que hacen parte del Plano Urbanístico cu1b322/4-01, corresponden al Urbanizador Responsable.”*, para lo cual ya se ha señalado que el DADEP viene cumpliendo con las actividades que resulten necesarias para el recibo o toma de posesión de las zonas de cesión gratuitas y obligatorias del Conjunto Residencial Alondra, teniendo en cuenta que a la fecha estas no han sido entregadas por la Constructora Fundación Compartir, urbanizadora de dicha agrupación de vivienda.

Adviértase entonces que en el presente asunto la Secretaría Distrital de Planeación ha ejercido a cabalidad con las competencias que le atribuye el Decreto 432 de 2022⁷⁸, como entidad líder en la formulación y seguimiento de las políticas y la planeación territorial, económica, social y ambiental del Distrito Capital, en conjunto con los demás sectores administrativos que conforman la estructura orgánica de la Alcaldía Mayor (artículo 2⁷⁹), y en tal virtud ha elaborado informes técnicos sobre la delimitación, uso del suelo y categorización de la malla vial en el sector aledaño al Conjunto Residencial Alondra de la Localidad de Bosa, de acuerdo con las normas que resulten aplicables.

⁷⁷ “Por el cual se reglamenta el Tratamiento de Desarrollo Urbanístico en el Distrito Capital”

⁷⁸ “Por medio del cual se modifica la estructura organizacional de la Secretaría Distrital de Planeación y se dictan otras disposiciones”

⁷⁹ “Artículo 2º.- Objeto. La Secretaría de Planeación tiene como objeto el de orientar y liderar la formulación y seguimiento de las políticas y la planeación territorial, económica, social y ambiental del Distrito Capital, conjuntamente con los demás sectores.”

- **Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos -UAESP-**

Dentro de los hechos de la demanda se hace referencia a la comunicación 20225000084971 del 22 de abril de 2022⁸⁰, mediante la cual la Subdirección de Aprovechamiento de la UAESP informó a la administradora del Conjunto Residencial Alondra de la localidad de Bosa, actora en este proceso, en relación con la eventual ocupación del espacio público y parques cercanos a la propiedad horizontal por ciudadanos que efectúan actividades de acopio y selección de material reciclable, que esa entidad desarrolla sus funciones en el marco de lo previsto por el Acuerdo 001 de 2012⁸¹, expedido por el Consejo Directivo de ese organismo.

Cabe destacar que la misionalidad de la UAESP se concreta en garantizar la prestación, coordinación, supervisión y control de los servicios de recolección, transporte, disposición final, reciclaje y aprovechamiento de residuos sólidos, la limpieza de vías y áreas públicas; los servicios funerarios en la infraestructura del Distrito y el servicio de alumbrado público (artículo 1^o⁸² del Acuerdo 001 de 2012).

Al hilo de ese objetivo esencial, en la referida comunicación se le indicó a la accionante que la Subdirección de Aprovechamiento de la UAESP cumple las actividades que le fija el artículo 11⁸³ del acuerdo en comento, en asuntos tales como liderar las políticas, planes, programas y proyectos en materia de reciclaje y aprovechamiento de residuos sólidos (numeral 1), y coordinar la supervisión de los servicios de aseo relacionados con la recolección de residuos reciclables, la recolección de escombros, el reciclaje, aprovechamiento y biogás, con énfasis en la participación de la población de recicladores (numeral 2).

Por ello se destacó que la gestión de esa unidad se articula con el propósito de promover acciones afirmativas para la población recicladora, reconocidas por la jurisprudencia Corte Constitucional⁸⁴, que garanticen el fortalecimiento y formalización de las organizaciones de recicladores, en los términos del Decreto Nacional 596 de 2016⁸⁵, entre otros mecanismo, mediante su incorporación al Registro Único de Organizaciones de Recicladores -RUOR- y el Registro Único de Recicladores de Oficio -RURO-, aclarando que respecto de aquellos recicladores u organizaciones no formalizadas, la entidad lleva a cabo acciones de capacitación y sensibilización en el correcto manejo para la recolección, transporte y clasificación de residuos, divulgación de las normas que les permitan su formalización, para garantizar el servicio de aprovechamiento en la ciudad, como quiera que la población que ejerce este oficio y los establecimientos afectos o no afectos al servicio de aseo, de los cuales hacen parte los recicladores no formalizados, pueden incurrir en problemáticas que involucran los residuos sólidos que afectan el espacio público.

Desde esa perspectiva se indicó que las acciones relacionadas con la población recicladora requieren articulación de las autoridades locales, a partir de las funciones de inspección, vigilancia y control, y de carácter policivo, para la conservación y restitución del espacio público y frente a las actividades que ejerzan los establecimientos.

⁸⁰ Citada en el hecho 14 de la demanda

⁸¹ "Por el cual se modifica la estructura organizacional y se determinan las funciones de las dependencias de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos"

⁸² "Artículo 1º. OBJETO. La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos tiene por objeto garantizar la prestación, coordinación, supervisión y control de los servicios de recolección, transporte, disposición final, reciclaje y aprovechamiento de residuos sólidos, la limpieza de vías y áreas públicas; los servicios funerarios en la infraestructura del Distrito y el servicio de alumbrado público."

⁸³ "Artículo 11º. SUBDIRECCIÓN DE APROVECHAMIENTO. Son funciones: 1. Dirigir el desarrollo de las políticas, planes, programas y proyectos en materia de reciclaje y aprovechamiento de residuos sólidos. 2. Dirigir y coordinar la supervisión de los servicios de aseo relacionados con la recolección de residuos reciclables, la recolección de escombros, el reciclaje, aprovechamiento y biogás, con énfasis en la participación de la población de recicladores."

⁸⁴ Entre otras, mediante sentencias T-724 de 2003, T-291 de 2009 y T-783 de 2012

⁸⁵ "Por el cual se modifica y adiciona el Decreto número 1077 de 2015 en lo relativo con el esquema de la actividad de aprovechamiento del servicio público de aseo y el régimen transitorio para la formalización de los recicladores de oficio, y se dictan otras disposiciones"

Nótese que esto es precisamente lo que ha venido ocurriendo en cuanto atañe a los distintos operativos para verificar el adecuado uso del espacio público en los sectores aledaños al Conjunto Residencial Alondra, así como con las distintas actuaciones policivas por parte de las inspecciones locales de policía, de que ha dado cuenta la Alcaldía Local de Bosa, y a las que se ha hecho referencia tanto en la contestación de los hechos de la demanda como en el acápite relativo a las gestiones y competencias que frente a las situaciones denunciadas en el libelo ha desplegado esa instancia local, amén de los patrullajes que de acuerdo con las pruebas y comunicaciones aportadas por la accionante ha ejecutado la Policía Metropolitana de Bogotá y el Comando de Atención Inmediata -CAI- Antonia Santos en los sectores y parques vecinales cercanos a esa agrupación residencial.

En la comunicación de la UAESP, citada por la parte actora, se indicó que ese organismo efectuó visita el 19 de abril de 2022, al punto de requerimiento en la Diagonal 56 Bis Sur 84A-10, oportunidad en la cual no se identificó población recicladora que estuviera ejerciendo la actividad de reciclaje, carreteros, ni población migrante o colombiana en situación de calle, o puntos críticos de basura o uso indebido del espacio público, pese a lo cual esa entidad ha procurado socializar con la comunidad que pueda ejecutar ese oficio:

“...recomendaciones propias a la prestación del servicio público de aprovechamiento; evitar acumulación de material y/o rechazo que afectase la vía pública como resultado de las labores de separación y transporte de material, insistió a los recicladores mantener limpio y organizado sin generar impacto de residuos o puntos críticos, requirió el porte del carné a los recicladores incluidos en el Registro Único de Recicladores de Oficio -RURO y realizó oferta de inclusión RURO a los recicladores no formalizados. Así mismo, se realizaron recomendaciones sobre la inadecuada ocupación del espacio, y se les mencionó la importancia de evitar comportamientos contrarios al orden que atenten contra la convivencia y seguridad.”



Bajo el contexto descrito se señaló que la UAESP no puede adelantar operativos de restitución del espacio público o sancionar a quienes incurran en invasión o uso inadecuado de este, o para el cumplimiento de las normas de tránsito, actividades sobre las cuales ya se ha podido demostrar que vienen ejecutando gestiones la Alcaldía Local de Bosa y la Secretaría Distrital de Movilidad en articulación con la Policía Metropolitana y de tránsito de Bogotá, sin perjuicio de que la unidad continúe desarrollando labores que resulten acordes con su misionalidad en aras de garantizar el servicio de aprovechamiento de residuos.

Carrera 8 No. 10 – 65
Código Postal: 111711
Tel: 3813000
www.bogotajuridica.gov.co
Info: Línea 195



CO21/962806



En el mismo sentido, mediante comunicación 20235000060011 del 17 de marzo de 2023⁸⁶, la Subdirección de Aprovechamiento atendió el requerimiento que le efectuó la Personería Distrital, y puso de presente, en el marco de las ya citadas competencias del Acuerdo 001 de 2012, que se efectuó una nueva visita al sector reportado, el 13 de marzo de 2023, con los siguientes resultados:

“Se identifican 4 bodegas de reciclaje, donde se evidencia invasión y uso inadecuado del espacio público, problemática en vía por el mal parqueo de vehículos. En el marco de las competencias de esta unidad, el equipo de campo realizó las recomendaciones propias a la prestación del servicio de aprovechamiento: evitar acumulación de material y/o rechazo que afectase la vía pública como resultado de las labores de separación y transporte de material, insistió a los recicladores mantener limpio y organizado sin generar impacto de residuos o puntos críticos, requirió el porte de carné a los recicladores incluidos en el Registro Único de Recicladores de Oficio -RURO y realizó oferta de inclusión RURO a los recicladores no formalizados. Así mismo, se realizaron recomendaciones sobre la inadecuada ocupación del espacio, y se les mencionó la importancia de evitar comportamientos contrarios al orden que atenten contra la convivencia y seguridad.”

Manifestó también la UAESP que bajo la conducción y liderazgo de la Policía Nacional, y en conjunto con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF-, la Secretaría Distrital de Gobierno y la Alcaldía Local, actualmente se encuentra en marcha la Estrategia Distrital de Basuras en el marco del Decreto 14 de 2023⁸⁷.

Por su parte, al momento de presentar el informe para dar respuesta a la demanda popular, la Subdirección de Asuntos Legales de la UAESP⁸⁸, hizo énfasis en las funciones que adelanta la Subdirección de Aprovechamiento en materia de capacitación y sensibilizaciones sobre buenas prácticas al momento de realizar labores de recolección, transporte y clasificación de material aprovechable, y se refirió a las visitas que desde esa área se han efectuado al sector ubicado en la Diagonal 56 Bis Sur 84A-10, estos es, las adelantadas el 19 de abril de 2022 y el 13 de marzo de 2023, a las que ya se hizo referencia.

Aclara la UAESP que las Estaciones de Clasificación y Aprovechamiento –ECA pertenecientes a Organizaciones de Recicladores de Oficio en proceso de formalización, es decir, que están en el RUOR, son las afectas al servicio público de aseo, por lo que su vigilancia y control recae directamente sobre la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios -SSPD-, a quien las organizaciones reportan número de material aprovechable y las reportan en el Sistema Único de Información SUI, según las competencias definidas en el Decreto 596 de 2016⁸⁹, en tanto que la inspección, vigilancia y control sobre la actividad de esos establecimientos la adelanta la Alcaldía Local, asunto frente al cual, se insiste, esa instancia local en efecto ha venido adelantando operativos en conjunto con la Policía Nacional frente a eventuales fenómenos de ocupación e invasión del espacio público y respecto a las actividades que desarrollen los establecimientos, amén de las actuaciones policías, por conducto de las inspecciones locales, ante presuntas infracciones y comisión de conductas que atenten contra la integridad del espacio público de conformidad con la Ley 1801 de 2016.

⁸⁶ A la cual se alude en el hecho 37 de la demanda

⁸⁷ “Por medio del cual se profieren órdenes de policía para la reducción de afectaciones al ambiente y al espacio público derivadas de la inadecuada gestión de residuos sólidos en la ciudad de Bogotá D.C y se decide sobre la disposición de bienes incautados, decomisados, o abandonados en el marco del proceso único de policía y se dictan otras disposiciones”

⁸⁸ Mediante comunicación 20236000165611 del 12 de julio de 2023, que se adjunta como prueba

⁸⁹ “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1077 de 2015 en lo relativo con el esquema de la actividad de aprovechamiento del servicio público de aseo y el régimen transitorio para la formalización de los recicladores de oficio, y se dictan otras disposiciones”

- **Secretaría Distrital de Ambiente**

Dentro de los hechos de la demanda se hace referencia a la comunicación 2022EE94544 del 26 de abril de 2022⁹⁰, con la que la Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre de la Secretaría Distrital de Ambiente, informó a la administradora del Conjunto Residencial Alondra que un ingeniero forestal de esa dependencia realizó el 11 de abril de 2022, una visita de evaluación silvicultural al parque ubicado en la Calle 55 Sur con 84A, Barrio Danubio Azul de la UPZ 8 Bosa Occidental en la localidad de Bosa, y se identificó la presencia de distintos individuos arbóreos, encontrándose una especie que podría representar *“interferencia con la estructura del conjunto, que se observa por el contacto directo que existe entre el follaje de la copa del individuo con el límite de la propiedad y el cercado eléctrico debido al insuficiente espacio de emplazamiento”*, por lo que se dispuso programar la actividad de bloqueo y traslado del individuo a una zona del parque apta para su replante, lo que permite acreditar que esa entidad ha actuado en el marco de sus competencias, gestiones para mejorar las condiciones para el óptimo uso de ese espacio de esparcimiento y actividad física en favor de los residentes del sector.

Lo anterior teniendo en cuenta que dentro de la referida comunicación se informó a la actora que *“Durante la evaluación se observó que el parque cuenta con mantenimiento por parte de consorcio de aseo que opera en la localidad, se evidencia el corte de césped y marcas de poda técnica de árboles y completamente libre de residuos”*. Finalmente, la dependencia comunicó a la representante legal de la agrupación que *“...continuará realizando actividades de control y seguimiento para el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente en el marco de nuestras competencias.”*

Téngase en cuenta que de conformidad con lo previsto por los Decretos Distritales 109⁹¹ y 175⁹² de 2009, el propósito esencial de la Secretaría Distrital de Ambiente consiste en orientar y liderar la formulación de políticas ambientales y de aprovechamiento sostenible de los recursos ambientales y del suelo, tendientes a preservar la diversidad e integridad del ambiente, el manejo y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales distritales y la conservación del sistema de áreas protegidas, para garantizar una relación adecuada entre la población y el entorno ambiental y crear las condiciones que garanticen los derechos fundamentales y colectivos relacionados con el medio ambiente (artículo 4⁹³ del Decreto 109 de 2009), por lo que tiene la condición de autoridad ambiental del distrito capital para el cumplimiento de sus competencias y gestión de la normativa y política ambiental vigente (literal d, artículo 5⁹⁴).

Calidad de autoridad ambiental de Bogotá D.C., que se ejerce en armonía con lo previsto por el artículo 66 de la Ley 99 de 1993⁹⁵, en virtud de la cual es la encargada de administrar, dentro de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales (literal f del

⁹⁰ A la cual se alude en el hecho 15 de la demanda

⁹¹ “Por el cual se modifica la estructura de la Secretaría Distrital de Ambiente y se dictan otras disposiciones”

⁹² “Por el cual se modifica el Decreto 109 de Marzo 16 de 2009”

⁹³ “Artículo 4°. Objeto. Corresponde a la Secretaría Distrital de Ambiente orientar y liderar la formulación de políticas ambientales y de aprovechamiento sostenible de los recursos ambientales y del suelo, tendientes a preservar la diversidad e integridad del ambiente, el manejo y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales distritales y la conservación del sistema de áreas protegidas, para garantizar una relación adecuada entre la población y el entorno ambiental y crear las condiciones que garanticen los derechos fundamentales y colectivos relacionados con el medio ambiente.”

⁹⁴ “Artículo 5°. Funciones. La Secretaría Distrital de Ambiente tiene las siguientes funciones: (...) d. Ejercer la autoridad ambiental en el Distrito Capital, en cumplimiento de las funciones asignadas por el ordenamiento jurídico vigente, a las autoridades competentes en la materia.”

⁹⁵ “por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones. (...) ARTÍCULO 66. Competencia de Grandes Centros Urbanos. (Modificado por el art. 13, Decreto 141 de 2011); Los municipios, distritos o áreas metropolitanas cuya población urbana fuere igual o superior a un millón de habitantes (1.000.000) ejercerán dentro del perímetro urbano las mismas funciones atribuidas a las Corporaciones Autónomas Regionales, en lo que fuere aplicable al medio ambiente urbano. Además de las licencias ambientales, concesiones, permisos y autorizaciones que les corresponda otorgar para el ejercicio de actividades o la ejecución de obras dentro del territorio de su jurisdicción, las autoridades municipales, distritales o metropolitanas tendrán la responsabilidad de efectuar el control de vertimientos y emisiones contaminantes, disposición de desechos sólidos y de residuos tóxicos y peligrosos, dictar las medidas de corrección o mitigación de daños ambientales y adelantar proyectos de saneamiento y descontaminación.”

artículo 5⁹⁶ del Decreto 109 de 2009), y se encuentra facultada para otorgar, en el ejercicio de las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental o de la ejecución de obras dentro del territorio de su jurisdicción licencias, concesiones, permisos y autorizaciones requeridos por la Ley para el uso aprovechamiento o movilización de los recursos naturales o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente, además de ejercer control y vigilancia del cumplimiento de las normas de protección ambiental y manejo de los recursos naturales, a través de las acciones administrativas pertinentes como lo es el proceso sancionatorio ambiental.

Por lo anterior, dentro de los informes que la Dirección Legal Ambiental de la Secretaría Distrital de Ambiente presentó⁹⁷ como insumo para atender el presente medio constitucional de derechos colectivos, se precisó que esa entidad se ocupa de cumplir funciones de evaluación, control y seguimiento a los factores que puedan generar deterioro al ambiente sano, propendiendo por la protección de las riquezas naturales, preservación del ambiente y sus distintos ecosistemas, bajo el entendido que el derecho al ambiente sano protege un rango amplio de elementos como: la naturaleza, la biodiversidad, el agua, el aire, la tierra, la fauna, la flora, los ecosistemas, el suelo, el subsuelo, y la energía entre otros, y en este ámbito de protección es que las autoridades ambientales ejercen medidas de evaluación, seguimiento y control ambiental.

De manera entonces que el principio de prevención para la protección de los recursos naturales se materializa a través de la evaluación para el otorgamiento o negación de los permisos que emite la autoridad ambiental del Distrito Capital, en tanto que en el ámbito del seguimiento, la entidad verifica las actividades que fueron objeto de permiso ambiental con el propósito de comprobar que se le esté dando cumplimiento al permiso otorgado, sin perjuicio de realizar visitas de seguimiento a actividades que generen un deterioro a los recursos naturales.

A esto se suma la actividad de control la autoridad ambiental que se ejerce en el marco de la ley 1333 de 2009⁹⁸, norma que considera infracción en materia ambiental toda acción u omisión que constituya violación a las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables, Decreto Ley 2811 de 1974⁹⁹, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994¹⁰⁰ y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente

Enfatiza la Dirección Legal Ambiental de la Secretaría Distrital de Ambiente que esa autoridad realiza control de los desechos sólidos y desechos o residuos peligrosos y tóxicos (literal r del artículo 5¹⁰¹ del Decreto 109 de 2009), por lo que dicta las medidas de corrección o mitigación de daños ambientales, complementando la acción de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - EAAB- para desarrollar proyectos de saneamiento y descontaminación, en coordinación con la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, por lo cual, el Decreto 175 de 2009, consagra la función de control, seguimiento, emisión de los instrumentos de control ambiental para las actividades de generación, recolección, aprovechamiento y disposición de residuos sólidos, peligrosos y tóxicos.

Dicho lo anterior, la Secretaría Distrital de Ambiente efectúa la siguiente precisión en torno a la imposibilidad de atender, por lo menos en forma directa, la problemática referida en la demanda

⁹⁶ "Artículo 5°. Funciones. La Secretaría Distrital de Ambiente tiene las siguientes funciones: (...) f. Formular y orientar las políticas, planes y programas tendientes a la investigación, conservación, mejoramiento, promoción, valoración y uso sostenible de los recursos naturales y servicios ambientales del Distrito Capital y sus territorios socio ambientales reconocidos."

⁹⁷ Mediante comunicación 2023EE159111 del 14 de julio de 2023 y 2022EE165280 del 21 de julio de 2023, que se adjuntan como pruebas

⁹⁸ "Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones."

⁹⁹ "Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente."

¹⁰⁰ "Por medio de la cual se aprueba el "Convenio sobre la Diversidad Biológica", hecho en Río de Janeiro el 5 de junio de 1992."

¹⁰¹ "r. Realizar el control de vertimientos y emisiones contaminantes, disposición de desechos sólidos y desechos o residuos peligrosos y de residuos tóxicos, dictar las medidas de corrección o mitigación de daños ambientales y complementar la acción de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - EAAB- para desarrollar proyectos de saneamiento y descontaminación, en coordinación con la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos."

popular en cuanto al manejo y disposición de material reciclable (residuos ordinarios o mixtos), destacando la importancia de las gestiones, que como se ha acreditado, vienen adelantando la Alcaldía Local de Bosa, así como las labores de sensibilización y capacitación en para el adecuado acopio, clasificación y transporte de este material que ha ejecutado la UAESP, al señalar:

“Así las cosas, la SDA tiene competencia en el marco de estos dos tipos de residuos sólidos y no en lo referente a los residuos ordinarios, clasificación que es de suma importancia para verificar la acciones que puede llevar a cabo la entidad.

Ahora bien, conforme a la solicitud de tramitar los procesos sancionatorios que den a lugar, la ley 1333 de 2009 establece que el proceso puede iniciar por medio de imposición de medidas preventivas o con la indagación preliminar que permita establecer si existe mérito para el proceso sancionatorio, siempre y cuando haya lugar a ello.

Para el presente caso, se identifica que las problemáticas acusadas por la accionante no son competencia de la Secretaría Distrital de Ambiente y, como se mencionó con anterioridad, se aconseja solicitar a las autoridades que en ejercicio de sus funciones recuperen el espacio público, continúen con los operativos de convivencia y seguridad ciudadana, y realicen las actividades de recolección de basuras, residuos, y fomenten la educación y participación ciudadana en materia de separación en la fuente para obtener mayores resultados a la hora de reciclar.”

Dicho lo anterior se encuentra que la Secretaría Distrital de Ambiente ha desarrollado por conducto de la Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre, actividades propias de sus competencias en evaluación de control y seguimiento de la ejecución de actividades de silvicultura urbana en el Distrito Capital y manejo del arbolado urbano (literales e y f del artículo 18¹⁰² del Decreto 109 de 2009) en las zonas y parques aledaños al Conjunto Residencial Alondra de la Localidad de Bosa, aclarando que los procesos sancionatorios que adelanta como autoridad ambiental sólo proceden por infracciones frente a actividades de generación, recolección, aprovechamiento y disposición de residuos sólidos, peligrosos y tóxicos, y no respecto al acopio y clasificación de residuos ordinarios o mixtos generados por reciclaje, sin perjuicio de coadyuvar, dentro de su ámbito funcional, las labores que ya vienen adelantando las autoridades distritales y la Policía Nacional frente a la posible invasión del espacio público que puedan presentarse en la zona aledaña a la agrupación residencial.

- **Instituto Distrital de Recreación y Deporte- IDRD**

La Oficina Asesora Jurídica del IDRD allegó un insumo relacionado con el presente medio de control¹⁰³, en el que se hace referencia al informe presentado la Subdirección Técnica de Parques del instituto¹⁰⁴, dentro del cual se indica que el organismo fue creado mediante Acuerdo 4 de 1978 del Concejo de Bogotá¹⁰⁵, como un establecimiento público descentralizado, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, cuyo objetivo general consiste en brindar a la comunidad oportunidades de participación, formación, fomento y práctica del deporte y actividades recreacionales, creando espacios e instalaciones recreo deportivas como contribución al desarrollo del individuo para el mejoramiento de calidad de vida de los habitantes de Bogotá.

¹⁰² “**Artículo 18°. Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre.** Modificado por el art. 4, Decreto Distrital 175 de 2009. La Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre tiene por objeto adelantar los procesos técnico – jurídicos necesarios para el cumplimiento de las regulaciones y controles ambientales a la silvicultura, la flora y la fauna que sean aplicables al Distrito. Son funciones de la Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre: (...) e. Realizar la evaluación, control y seguimiento de la ejecución de actividades de silvicultura urbana en el Distrito Capital. f. Participar en la planificación y ejecución del manejo del arbolado urbano, en coordinación con el Jardín Botánico.”

¹⁰³ Mediante comunicación 20231100164731 del 21 de julio de 2023, que se adjunta como prueba

¹⁰⁴ A través de oficio 20236000358913 del 21 de julio de 2023, que se adjunta como prueba

¹⁰⁵ “Por el cual se crea el Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte.”

En tal virtud, conforme lo prevé el artículo 2º¹⁰⁶ del acuerdo en comento, el IDRDR cumple funciones relacionadas, entre otros asuntos, con promover las actividades de recreación en los parques de propiedad distrital, conservar y dotar las unidades deportivas y procurar el establecimiento de nuevas fuentes de recreación, administrar los escenarios deportivos, mejorar la cobertura y las condiciones de infraestructura de los parques y escenarios para el uso y disfrute de la población de Bogotá D.C.

Téngase igualmente en cuenta que la estructura organizacional y funciones que ejercen las distintas dependencias que conforman el Instituto Distrital de Recreación y Deporte esta contenida en la Resolución 006 de 2017¹⁰⁷, expedida por la Junta Directiva de ese establecimiento público, normativa que reitera que la administración y mantenimiento de parques y escenarios a cargo del instituto, así como su uso para el disfrute de la comunidad se cumplen a través de la Subdirección de Parques.

Es así como en el concepto técnico que emitió esa dependencia del IDRDR destaca que en virtud del ya citado Decreto 552 de 2018, si bien el organismo tiene a su cargo la administración de los parques y escenarios de la ciudad, los predios a que se hace referencia en la demanda, los cuales se identifican con Códigos ID 07-418 y 07-419, ubicados en la Localidad de Bosa, están catalogados como parques vecinales o de proximidad, según la clasificación establecida por el artículo 90¹⁰⁸ del Decreto 555 de 2021 (POT vigente en Bogotá), motivo por el cual su mantenimiento e intervención es competencia de la Alcaldía Local, sin perjuicio de señalar que el instituto busca el fomento del buen uso del espacio público por la ciudadanía en línea con el actual plan de desarrollo por lo que sería necesario diseñar actividades de recreación que se llevarían a cabo con toda la comunidad a fin de lograr el acceso, el disfrute del espacio de manera general y su destinación al uso común.

Sobre este último asunto se puntualiza lo siguiente:

“Dentro de los principios rectores del ordenamiento territorial y atendiendo la estrategia de cualificación, integración y conectividad del sistema con las demás estructuras territoriales con garantía de accesibilidad universal y calidad para todas las personas que hacen uso del espacio público, es necesario partir del criterio de vitalidad, en el sentido de que los espacios permanezcan activos en el mayor rango horario posible a fin de garantizar su control social, constituyendo espacios que deben ser versátiles, para permitir el desarrollo de servicios conexos a las actividades recreativas, deportivas, culturales de manera permanente o temporal, siendo acertado incorporar en zonas delimitadas dentro del diseño de los espacios públicos de encuentro.”

¹⁰⁶ **“Artículo 2º.- Funciones.** El Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte tendrá las siguientes funciones: 1. Formular políticas para el desarrollo masivo del deporte y la recreación en el Distrito Especial, con el fin de contribuir al mejoramiento físico y mental de sus habitantes, especialmente de la juventud. 2. Coordinar con otras instituciones oficiales o privadas, dedicadas a estas materias, el planeamiento y ejecución de sus programas. 3. Participar en la financiación y organización de competencias y certámenes nacionales e internacionales con sede en Bogotá. 4. Promover las actividades de recreación en los parques de propiedad distrital, conservar y dotar las unidades deportivas y procurar el establecimiento de nuevas fuentes de recreación. 5. Adquirir y enajenar a cualquier título los bienes muebles o inmuebles, cuando lo requiera el cumplimiento de sus fines. 6. Administrar los escenarios deportivos de modo que dentro de criterios de esparcimiento para los ciudadanos, permitan ingresos en taquillas para atender al mantenimiento y mejoramiento de los mismos. 7. Administrar, directa o indirectamente, la Plaza de Toros de Santamaría, fomentando la presentación de espectáculos taurinos y culturales y promover la formación de nuevos exponentes nacionales artísticos y deportivos. 8. En general, celebrar toda clase de negocios jurídicos, de administración, disposición, gravamen o compromiso de sus bienes o rentas, dentro de la órbita de sus funciones. (...)”

¹⁰⁷ “Por la cual se modifica la estructura organizacional y las funciones de las dependencias del Instituto Distrital de Recreación y Deporte, y se dictan otras disposiciones”

¹⁰⁸ **“Artículo 90. Componentes del Sistema Distrital de Espacio Público Peatonal para el Encuentro.** Está constituido por áreas destinadas al uso, goce y disfrute colectivo localizados en suelo urbano y rural cuyo propósito es el recorrido, el esparcimiento, la inclusión, el encuentro social, la recreación, el deporte, la cultura, la contemplación y el contacto con la naturaleza, que permiten garantizar una circulación y recorridos seguros, autónomos y confortables. Está conformado por franjas de circulación peatonal, franjas de paisajismo y calidad urbana, parques, plazas, plazoletas, elementos complementarios y elementos privados afectos al uso público. (...) Este sistema se organiza a partir de los siguientes elementos: (...) 2. **Parques de la Red de Proximidad.** Son principalmente aquellos de menos de una hectárea, que proveen una oferta desconcentrada y diversa de actividades de aprovechamiento del tiempo libre a escala local, atendiendo criterios de proximidad.”

Según se indicó en la contestación de los hechos de la demanda, la Subdirección Técnica de Parques, a través de la comunicación 20226100088911 del 11 de mayo de 2023¹⁰⁹, había puesto en conocimiento de la representante legal del Conjunto Residencial Alondra la información que registra el Sistema Distrital de Parques, respecto al Parque Vecinal denominado Urb. Palos Verdes Parque 2, aledaño a esa agrupación, como no certificado.

Recuérdese sobre este asunto que las zonas de cesión gratuitas conexas a ese proyecto de vivienda, donde se ubican los espacios públicos, parques y zonas afectas al uso común, no han sido cedidas a título gratuito al Distrito Capital por el urbanizador, actuación necesaria para su certificación e incorporación al ya mencionado Registro Único del Patrimonio Inmobiliario del Distrito Capital –RUI, pese a lo cual en todas ellas la Alcaldía Local de Bosa, en conjunto con la Policía Nacional, ha venido adelantado operativos para el control en el uso del espacio público y mantenimiento del orden y seguridad ciudadana.

Todo lo expuesto hasta aquí permite demostrar ante el despacho judicial las distintas actuaciones, operativos, visitas técnicas e informes que han ejecutado las autoridades distritales referidas en este escrito en el marco de sus competencias, en articulación con la Policía Nacional, para atender y mitigar las circunstancias de posible invasión del espacio y vías públicas en el sector posterior al Conjunto Residencial Alondra de la Localidad de Bosa, realización de conductas y actividades que atentan contra la integridad de las zonas y espacios de tránsito peatonal y recreación y demás factores que puedan generar contaminación ambiental, con lo cual se puede razonablemente suponer que sus acciones han estado dirigidas a garantizar el uso y goce efectivo de los derechos colectivos al ambiente sano, goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público, seguridad y salubridad públicas, realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes, cuya protección se reclama en la demanda popular.

V. EXCEPCIONES

De conformidad con lo previsto por el artículo 23¹¹⁰ de la Ley 472 de 1998, me permito proponer las siguientes excepciones de mérito:

5.1 Ausencia de afectación de los derechos colectivos invocados- Improcedencia de la acción popular

Según se expuso en párrafos precedentes, en el presente caso no se ha presentado ni fue acreditada con suficiencia por la parte demandante, vulneración, daño o amenaza de afectación cierta o concreta por parte de Bogotá D.C. Secretaría Distrital de Gobierno- Alcaldía Local de Bosa, Secretaría Distrital de Movilidad, Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público –DADEP, Secretaría Distrital de Salud y Secretaría Distrital de Hábitat u otras autoridades distritales, de los derechos colectivos que se invocan en el libelo, en relación con la preservación, mantenimiento y conservación del espacio público y seguridad en las zonas exteriores del Conjunto Residencial Alondra de la Localidad de Bosa, circulación y estacionamiento de vehículos en las vías y sectores aledaños, ejecución de actividades de reciclaje que puedan generar contaminación y demás circunstancias descritas en la demanda popular.

No ha existido omisión, desconocimiento o negligencia en la actuación de las entidades distritales demandadas, como lo manifiesta la parte actora, por el contrario, las pruebas aportadas junto con

¹⁰⁹ Hecho 16

¹¹⁰ **ARTÍCULO 23.-** Excepciones. En la contestación de la demanda sólo podrá proponerse las excepciones de mérito y las previas de falta de jurisdicción y cosa juzgada, las cuales serán resueltas por el juez en la sentencia. En consecuencia, las pruebas pertinentes se practicarán en el mismo plazo señalado para las pruebas solicitadas en la demanda y en la contestación de la misma."

la demanda popular y las que se adjuntan con la presente contestación dan cuenta de las distintas actividades, operativos de inspección, vigilancia y control, visitas técnicas de verificación, capacitación y/o sensibilización e informes que han ejecutado los organismos a que se ha hecho referencia en el acápite anterior, se recalca, en coordinación con la Policía Metropolitana y de Tránsito de Bogotá.

Pese a que en el libelo se hace la enunciación de una serie de vulneraciones sobre los derechos colectivos al ambiente sano, goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público, seguridad y salubridad públicas, realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes, esas afirmaciones no se soportan con pruebas concretas que permitan demostrar la omisión o falta de actuación de las demandadas en defensa de dichos intereses.

Ahora bien, las actividades que se han logrado evidenciar ante el despacho por supuesto no permiten concluir que han dejado de presentarse o desaparecido en forma definitiva circunstancias o conductas que puedan ir en detrimento del efectivo uso y goce de dichos intereses, por lo cual se ha insistido en este escrito sobre la necesidad y compromiso de la administración distrital para continuar desplegando todas las actuaciones que desde el ámbito competencial de cada entidad, resulten necesarias para salvaguardar y proteger los derechos colectivos de los habitantes y residentes del Conjunto Residencial Alondra y en general, de toda la comunidad de la Localidad de Bosa, que se invocan en la demanda popular.

5.1.1 Características y alcances del derecho colectivo al goce de un ambiente sano

La Sección Primera del Consejo de Estado ha considerado¹¹¹ en cuanto al alcance del derecho al goce de un ambiente sano, lo siguiente:

“La Carta Política en su artículo 79, reconoce el derecho a gozar de un ambiente sano y le atribuye al Estado el deber de proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. Con miras a una adecuada materialización de tales propósitos, dispone que la ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Desde el punto de vista constitucional, el medio ambiente involucra aspectos relacionados con el manejo, uso, aprovechamiento y conservación de los recursos naturales, el equilibrio de los ecosistemas, la protección de la diversidad biológica y cultural, el desarrollo sostenible, y la calidad de vida del hombre entendido como parte integrante de ese mundo natural...”

Respecto a las dimensiones que componen ese interés colectivo la misma corporación¹¹² ha precisado que comprende los siguientes aspectos:

“En ese orden de ideas, la Sección Primera del Consejo de Estado ha hecho alusión a las distintas dimensiones de este derecho, destacando que ostenta la calidad de: “[...] (i) derecho fundamental (por encontrarse estrechamente ligado con los derechos fundamentales a la vida y a la salud); (ii) de derecho-deber (todos son titulares del derecho a gozar de un ambiente sano pero, además, tienen la obligación correlativa de protegerlo); (iii) de objetivo social (conservación de las condiciones del medio ambiente para garantizar el aprovechamiento de los recursos naturales por parte de las generaciones presentes y futuras); (iv) de deber del Estado (conservación del medio ambiente, eficiente manejo de

¹¹¹ Sección Primera. Consejera ponente (E): María Claudia Rojas Lasso. Bogotá D.C., dieciocho (18) de marzo de dos mil diez (2010). Radicación número: 44001-23-31-000-2005-00328-01(AC). Actor: Bartolo Poveda González. Demandado: Municipio de Maicao y Otros.

¹¹² Sección primera. Consejero Ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés. Rad. 76001-23-31-000-2011-01300-01(AP). Actor: Henry Leoncio Barreiro Belalcázar.

los recursos, educación ambiental, fomento del desarrollo sostenible, e imposición las sanciones a que haya lugar); y (v) de derecho colectivo, de conformidad con lo previsto en el artículo 88 superior”

Lo dicho por la Corte Constitucional permite concluir que la defensa del medio ambiente constituye un objetivo primordial dentro del Estado Social de Derecho, ya que concierne al contexto vital del ser humano, indispensable para la supervivencia de las generaciones presentes y futuras por cuanto todos los habitantes del territorio nacional tienen derecho a gozar de un ambiente sano, lo que genera, por un lado, el deber de velar por su conservación, y por el otro, el derecho de participar en las decisiones que puedan afectarlo. Igualmente, al Estado se le imponen cargas para lograr su protección, como lo son prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer sanciones legales por conductas lesivas al ambiente y exigir la reparación de los daños causados.

Así lo ha entendido también la Corte Constitucional, en sentencia T-154 de 2013¹¹³, al precisar que el interés colectivo a un ambiente sano connota un derecho deber que lo convierte en una obligación estatal e individual y social ligado al derecho a la vida que implica que toda la sociedad, a partir de sus comportamientos y actividades resilientes, proteja las riquezas y patrimonio ecológico y cultural para preservar la humanidad y continuidad de las especies.

En los siguientes términos lo expresó esa corporación:

*“Bajo ese entendido, uno de los principios fundamentales del nuevo régimen constitucional **es la obligación estatal e individual de proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación**, en virtud de la cual, la Constitución recoge en la forma de derechos colectivos y obligaciones específicas las pautas generales que rigen la relación entre el ser humano y el ecosistema.*

*Estas disposiciones establecen, por ejemplo, (i) el derecho colectivo a gozar de un ambiente sano, (ii) **la obligación estatal y de todas las personas de proteger la diversidad e integridad del ambiente**, (iii) la obligación del Estado de prevenir y controlar los factores de deterioro y garantizar un desarrollo sostenible y (iv) la función ecológica de la propiedad.*

(...)

*De ahí que **todos los habitantes del territorio colombiano tienen derecho a gozar un entorno o hábitat sano y el deber de velar por la conservación de éste...**” (subrayado extratexto)*

La tesis expuesta por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional en las sentencias que se han traído a colación refuerza los planteamientos esgrimidos a lo largo del presente escrito en el sentido de considerar que el derecho colectivo a gozar de un medio ambiente sano, entendido como la adecuada conservación y protección de los recursos naturales y la biodiversidad ecológica y cultural, mediante su uso y aprovechamiento eficiente y racional, propiciando la educación ambiental y el desarrollo sostenible, es una obligación del Estado, al que se le atribuyen facultades para investigar y sancionar las infracciones que afecten el ambiente, pero igualmente comporta el correlativo deber ciudadano y de todas las organizaciones privadas para participar activamente en

¹¹³ Sentencia de 21 de marzo de 2013, Referencia: expediente T-2550727 Acción de tutela instaurada por Orlando José Morales Ramos, contra la Sociedad Drummond Ltda. Procedencia: Tribunal Superior de Valledupar, Sala Civil-Familia-Laboral Magistrado sustanciador: NILSON PINILLA PINILLA

la salvaguarda de su entorno y de los recursos disponibles, contribuyendo con esto a la mitigación y manejo de los riesgos y amenazas naturales u aquellas que se originan a partir de factores antrópicos.

En el caso bajo estudio, la protección del derecho colectivo a un ambiente sano por parte de las entidades distritales, a partir del ejercicio de sus competencias, se concreta no sólo en las actividades de verificación y control del espacio y vías públicas que han ejecutado la Secretaría Distrital de Gobierno, a través de la Alcaldía Local de Bosa y la Secretaría Distrital de Movilidad, en articulación con la Policía Nacional, sino mediante las visitas de inspección que ejecutaron la Secretaría Distrital de Ambiente, al parque aledaño a la copropiedad actora, la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente –E.S.E- para verificar las condiciones internas del conjunto, además de las distintas jornadas de capacitación y sensibilización para el adecuado desarrollo de la actividad de reciclaje que ha llevado a cabo la UAESP, y demás actuaciones detalladas en este escrito, las cuales deberán continuar siendo programas y materializadas hacia el futuro de acuerdo con la misionalidad, capacidades institucionales y presupuestales de cada una de ellas.

5.1.2 Características y alcances del derecho colectivo al goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso publico

En relación con el derecho colectivo al goce del espacio público, cuya protección invocan la parte actora, la Sección Primera del Consejo de Estado¹¹⁴ ha señalado:

“De conformidad con lo normado en los artículos 82, 88 y 102 de la Constitución Política, es un deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular. En lo atinente a la utilización del suelo y del espacio público para la defensa del interés común, debe ser regulado por las autoridades a través del ordenamiento territorial, entre otros.

Los artículos 5° y 7° de la Ley 9a de 11 de enero de 1989, definen el espacio público así:

«[...] el conjunto de inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados, destinados por su naturaleza, por su uso o afectación, a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que trascienden, por tanto, los límites de los intereses individuales de los habitantes.

[...] Así, constituyen el Espacio Público de la ciudad las áreas requeridas para la circulación, tanto peatonal, como vehicular, las áreas para la recreación pública, activa o pasiva; para la seguridad y tranquilidad ciudadana, las franjas de retiro de las edificaciones sobre las vías, fuentes de agua, parques, plazas, zonas verdes y similares [...]

El criterio de valoración de la afectación de los derechos e intereses colectivos que son objeto de protección a través de las acciones populares es de carácter legal, conforme está previsto en el artículo 7° de la Ley 472, que preceptúa:

«Artículo 7°.- Interpretación de los derechos protegidos. Los derechos e intereses protegidos por las acciones populares y de grupo, de conformidad con el artículo 4° de la presente Ley se observarán y aplicarán de acuerdo a como están definidos y regulados en la Constitución, las leyes y los tratados internacionales que vinculen a Colombia.[...]»

¹¹⁴ Sentencia del 13 de junio de 2019, con radicación número: 76001-23-33-000-2017-01201-01(AP) Actor: DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL VALLE DEL CAUCA Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCO, Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

(...)

Así las cosas, es deber Estatal velar por la protección de la integridad del espacio público y su destinación al uso común, tal como lo indicó la Corte Constitucional:

« [...] La consagración de este deber constitucional es reflejo de la importancia otorgada por el Constituyente a la preservación de espacios urbanos abiertos al uso de la colectividad, que satisfagan las diversas necesidades comunes derivadas de la vida en las ciudades y poblados y contribuyan, igualmente, a mejorar la calidad de vida de sus habitantes, permitiendo la confluencia de los diversos miembros de la sociedad en un lugar común de interacción [...]»

Conforme lo expone el aparte jurisprudencial transcrito, el espacio público comprende todos los bienes de uso común incluidas aquellas necesarias para la circulación vehicular y peatonal, las cuales deben ser protegidas por el Estado y destinadas a su uso con prevalencia del interés general, tesis que aplicada a la situación que ocupa la atención del despacho permite concluir, con fundamento en las pruebas allegadas al proceso que las entidades distritales demandadas, en particular la Secretaría Distrital de Gobierno, a través de la Alcaldía Local de Bosa y la Secretaría Distrital de Movilidad, vienen desplegando acciones afirmativas de protección y restitución de las zonas y vías públicas cercanas al Conjunto Residencial Alondra, y pretenden continuar realizando desde el ejercicio de sus funciones, y con acompañamiento de la Policía Nacional, las actividades que hacía el futuro se requieran para salvaguardar ese interés colectivo.

Importante recalcar que el DADEP se encuentra actualmente adelantando los trámites administrativos necesarios para materializar la entrega real y jurídica de las zonas de cesión gratuita y obligatoria que se generaron con el desarrollo de ese proyecto de vivienda, como quiera que la Constructora Fundación Compartir no ha cumplido a la fecha con la carga de compensación urbanística consistente en la cesión al Distrito Capital de dichos espacios, gestión que confirma la activa e ingente labor que se viene cumpliendo en este asunto para proteger el derecho colectivo al uso y goce del espacio público.

5.1.3 Características y alcances del derecho colectivo a la seguridad y salubridad públicas

Ha señalado lo siguiente la Sección Primera del Consejo de Estado¹¹⁵ respecto al contenido del derecho a la salud y su correspondencia con el concepto de salubridad pública como interés colectivo protegido por la ley:

“Al Estado Colombiano le asiste la obligación de asegurar a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud, al tiempo que a los habitantes les corresponde procurar el cuidado integral de su salud y de su comunidad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 Constitucional.

El bienestar general contiene responsabilidades compartidas entre el Estado y los ciudadanos, sobre el primero el artículo 366 Constitucional prevé que el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes es uno de los fines del Estado, motivo por el cual señala que la solución de las necesidades insatisfechas en materia de salud es un objetivo prioritario de las autoridades estatales.

¹¹⁵ Sentencia del 15 de junio de 2018, Radicación número: 18001-23-31-000-2011-00222-01(AP) Actor: LIGIA JOHANA PINEDA RAMÍREZ, Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

(...)

La atención de la salud al ser un servicio público a cargo del Estado (artículo 49 de la Constitución Política) implica que se garantice el acceso de todas las personas a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud.

(...)

La salud pública también se encuentra contenida en el numeral 4 del artículo 6º de la Ley 1801 de 2016, como una categoría jurídica de convivencia según la cual se trata de la responsabilidad que le asiste al Estado y a la ciudadanía frente a la protección de la salud como un derecho de diferentes connotaciones; a saber: individual, colectivo y comunitario, cuyo desarrollo se basa en las condiciones de bienestar y calidad de vida.

(...)

En este punto es necesario aclarar que la jurisprudencia constitucional y de lo contencioso administrativo han utilizado las expresiones “salubridad pública” y “salud pública”, a manera de sinónimos, incluso se ha arribado al concepto de salud humana como lo veremos a continuación.

La H. Corte Constitucional en sentencia T-579 de 2015 cita la providencia proferida por la Sección Primera de esta Corporación el 3 de septiembre de 2009, dentro del proceso con número de radicación 850012331000200040224401, que plasma la definición de salubridad pública en los siguientes términos:

“[...] 2.5.4. El Consejo de Estado ha definido la salubridad pública como ‘la garantía de la salud de los ciudadanos’ e implica ‘obligaciones que tiene el Estado de garantizar las condiciones mínimas que permitan el desarrollo de la vida en comunidad (...) Estos derechos colectivos están ligados al control y manejo de las situaciones de índole sanitario, para evitar que tanto en el interior como en el exterior de un establecimiento o de determinado lugar se generen focos de contaminación, epidemias u otras circunstancias que puedan afectar la salud y la tranquilidad de la comunidad y en general que afecten o amenacen el estado de sanidad comunitaria’ [...]”.

(...)

En tal escenario, de la recopilación jurisprudencial en referencia la Sala resalta que: i), no existe distinción entre los conceptos de “salud pública” y “salubridad pública” de hecho se han entendido como sinónimos; ii) este derecho colectivo se encuentra íntimamente relacionado con la conservación del orden público y la garantía del bienestar de la comunidad; iii) esto mediante la adopción de medidas tendientes a evitar su alteración.”

En el mismo sentido, la Corte Constitucional¹¹⁶ ha destacado las notas características del derecho colectivo a la salubridad pública, señalando que:

“39. Frente a este panorama, resulta necesario precisar el concepto de salubridad o salud pública, entendidas como expresiones sinónimas. Así, la salubridad pública puede ser definida como una serie de condiciones sanitarias, tanto químicas, como relativas a la

¹¹⁶ Sentencia C-225 de 2017

organización y disposición del espacio, necesarias para la protección de la vida, salud e integridad física del ser humano, así como de las especies animales y vegetales presentes en el ecosistema. Esta definición parte de entender que los problemas de salubridad pública no sólo afectan al ser humano directamente, sino que la afectación que genera en especies animales y vegetales, en sí misma problemática, también conduce indirectamente a la afectación del ser humano por vía alimentaria o cualquier otra forma de transmisión, al reconocer la interdependencia mutua.

40. De esta manera, la cobertura, prestación eficiente y de calidad de servicios públicos tales como el agua potable, alcantarillado, de recolección y adecuado tratamiento de basuras, con y sin riesgo biológico, está directamente relacionada con la creación y mantenimiento de condiciones de salud o salubridad públicas. También son instrumentos de salubridad pública, las actividades como el control de medicamentos, de determinación y verificación del cumplimiento de medidas sanitarias en la producción, almacenamiento y comercialización de alimentos y en el depósito o emisión de sustancias contaminantes al aire, al agua y al suelo. Así, la protección de la salubridad o salud públicas implica la prohibición y sanción de ciertos comportamientos, pero también una actividad prestacional por parte del Estado, por ejemplo, en cuanto a la disposición de la infraestructura y servicio público necesarios para crear condiciones adecuadas de sanidad.”

Apoyándose en las consideraciones expuestas por esas altas corporaciones, resulta pertinente inferir que en el *sub judice* las entidades distritales demandadas, y todas aquellas a las que se ha venido haciendo referencia en este escrito, han coadyuvado a través de sus actuaciones administrativas, operativos y visitas de control, recuperación y sensibilización sobre el uso del espacio público, incluidas las actuaciones policivas derivadas de la infracción a las normas de la Ley 1801 de 2016, y para la mitigación de factores antrópicos de contaminación como el inadecuado ejercicio de la actividad del reciclaje, o el estacionamiento permanente de vehículos en la zona exterior al Conjunto Residencial Alondra de la localidad de Bosa, con una efectiva generación de condiciones que favorezcan la salud de todos los habitantes del sector.

Por supuesto, como se ha insistido en precedencia, resulta claro atendiendo el hecho de que los comportamientos y circunstancias que pueden afectar el derecho a la salubridad pública resultan reiterativos, es imprescindible que las entidades distritales, en ejercicio de sus funciones misionales continúen ejecutando las actividades que permitan proteger en forma permanente ese derecho colectivo.

5.1.4 Características y alcances del derecho colectivo a la realización de construcciones y edificaciones ordenadas que respeten la calidad de vida de los habitantes

La jurisprudencia del Consejo de Estado ha señalado¹¹⁷ que el núcleo esencial del derecho colectivo a la realización de construcciones y edificaciones ordenadas que respeten la calidad de vida de los habitantes comprende los siguientes aspectos:

“37. De igual forma, esta Sección mediante sentencia de 7 de abril de 2011, determinó que el núcleo esencial del derecho colectivo comprende los siguientes aspectos: i) respeto y acatamiento del principio de función social y ecológica de la propiedad; ii) protección del espacio público procurando adelantar cualquier tipo de construcción o edificación con respeto por el espacio público, el patrimonio público y la calidad de vida de los demás

¹¹⁷ Sentencia dictada por la Sección Primera 1º de noviembre de 2019, Radicación número: 68001-23-31-000-2012-00104-02(AP) Actor: Roberto Hernán Baena Llorente y otro Demandado: Corporación Autónoma Regional para la defensa de la meseta de Bucaramanga y Municipio de Girón, Consejero Ponente. Hernán Sánchez Sánchez

habitantes; iii) respetar los derechos ajenos y no abusar del derecho propio; y iv) atender los procesos de cambio en el uso del suelo, en aras del interés común, procurando su utilización racional en armonía con la función social de la propiedad a la cual le es inherente una función ecológica, buscando el desarrollo sostenible.

38. Asimismo, esta Corporación ha establecido que abarca el acatamiento a los planes de ordenamiento territorial que sirven de guía y mapa para que el desarrollo urbano se haga de manera ordenada, coherente, de tal manera que prevalezca el interés general sobre el particular, y se garantice la aplicación de las disposiciones político - administrativas y de organización física contenidas en los mismos. Así como el cumplimiento de los preceptos normativos sobre usos del suelo; alturas máximas de construcción; cupos mínimos de parqueo; especificaciones técnicas y de seguridad; cesiones obligatorias al distrito; necesidad de obtener licencias de urbanismo y construcción; existencia de conexiones para los servicios públicos domiciliarios, entre otros.

39. Para la Sala es claro que el derecho señalado en el literal m) del artículo 4.º de la Ley 472, corresponde a la obligación que le impone el legislador a las autoridades públicas y particulares, en general, de acatar plenamente los preceptos jurídicos que rigen la materia urbanística, es decir, la forma como progresa y se desarrolla una determinada población, en términos de progreso físico y material, asentada en una determinada entidad territorial - bien sea en sus zonas urbanas o rurales- con miras a satisfacer plenamente las necesidades de la población.”

En el mismo sentido, la Sección Primera del máximo tribunal contencioso administrativo ha recalcado¹¹⁸ que la vulneración del derecho colectivo en comento se produce cuando las autoridades territoriales dejan de cumplir su propio plan de ordenamiento territorial, omiten aplicar las normas urbanísticas o de uso del suelo, o no procuran la materialización de la función ecológica de la propiedad, la protección del medio ambiente, el espacio público o la construcción de viviendas que garanticen tanto la infraestructura habitacional adecuada como los equipamientos públicos y servicios urbanísticos de soporte materialicen una mejor calidad de vida para los ciudadanos, y en caso de que se reclame su protección mediante la acción popular, el actor deberá demostrar actuaciones -u omisiones- de las autoridades públicas demandadas que hayan incidido negativamente y en forma directa sobre los bienes jurídicos colectivos tutelados por la legislación urbanística.

En los siguientes términos lo enfatizó la corporación:

“De acuerdo con lo señalado por la jurisprudencia de esta Corporación este derecho implica “la necesidad de proteger la adecuada utilización, transformación y ocupación del suelo, de manera que las autoridades competentes no actúen en forma arbitraria en contravención del respectivo plan de ordenamiento territorial o instrumento que haga sus veces, a través de acciones que estén fuera de su marco normativo”¹¹⁹. Se entiende así que esta Sala haya manifestado que “la vulneración al derecho colectivo de la realización de construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de calidad de vida de los habitantes es un derecho e interés colectivo que implica que las autoridades públicas y/o los particulares desconozcan la normativa en materia urbanística y usos del suelo”¹²⁰.

¹¹⁸ Consejo de Estado - Sección Primera - Sentencia de 23 de mayo de 2013 con ponencia del Dr. Guillermo Vargas Ayala - Radicación Número: Radicación número: 15001-23-31-000-2010-01166-01(AP).

¹¹⁹ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 6 de marzo de 2008, Rad. No. AP-2005-00901. C.P.: Mauricio Fajardo Gómez.

¹²⁰ Sentencia de 19 de noviembre de 2009, Rad. No. 17001 2331 000 2004 01492 01. C.P.: Rafael Ostau de Lafont Pianeta.

La importancia para la colectividad de los bienes jurídicos que ampara este conjunto normativo explica esta posición. En últimas, como se puede abstraer de una lectura sistemática de las distintas normas que integran este sector del ordenamiento, de ellas depende tanto el respeto y materialización del principio de la función social y ecológica de la propiedad, como la protección de los ecosistemas, del espacio público y del patrimonio histórico, arquitectónico, cultural y paisajístico de la comunidad; lo mismo que la garantía de una regulación de los usos del suelo que asegure la realización de la infraestructura, las viviendas, los equipamientos y servicios necesarios para procurar una calidad de vida adecuada a la colectividad e impulsar un desarrollo económico sostenible.

El crecimiento ordenado de la urbe, el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la prevención de riesgos y desastres y la conservación de los suelos con vocación agrícola son también, entre otros, objetivos que persigue esta legislación.

La consideración de esta constelación resulta relevante por cuanto permite acotar el ámbito del derecho colectivo establecido por el artículo 4 literal m) de la Ley 472 de 1998. Pese a su notoria amplitud, sus fronteras deben ser acotadas; so pena de caer en la vacuidad conceptual o en una indeterminación que solo puede restar fuerza y consistencia a este importante derecho. De aquí que no cualquier actuación que presente alguna relación con un bien inmueble o que tenga lugar en el espacio urbano o rural que disciplinan las normas urbanísticas pueda calificarse como atentatoria del derecho colectivo a la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando los marcos legales, de manera ordenada y dando prevalencia a la calidad de vida de los habitantes; será indispensable, para que se configure una transgresión susceptible de amparo por el juez de acción popular, que de la acción u omisión imputada se derive la vulneración o amenaza de alguno de los bienes jurídicos tutelados con su consagración.

(...)

Así las cosas, solo en aquellos eventos en los cuales se esté frente a una conducta capaz de incidir negativamente sobre los distintos bienes jurídicos tutelados por la legislación urbanística se estará frente a una conducta susceptible de ser enjuiciada a la luz de este derecho. Ello supondrá, en la generalidad de los casos, el desconocimiento del bloque normativo que integran los diferentes preceptos constitucionales, legales y reglamentarios de distinto rango y procedencia (Nacional, Departamental, Distrital o Municipal) y de diverso contenido (urbanístico, ambiental, agrario, prevención de riesgos, patrimonio histórico cultural, etc.) que rige la materia urbanística; entendida ésta como aquella relacionada con la ordenación y desarrollo de la ciudad, que se concreta en una multiplicidad de normas de regulación de usos del suelo, espacios públicos y propiedad urbana, así como en numerosas formas de intervención sobre el territorio municipal llevadas a cabo en aras de materializar el interés común y asegurar su prevalencia sobre el interés particular.

En estas condiciones, por no observarse en el expediente ningún elemento que permita afirmar que la omisión en el cumplimiento del deber de adecuación de sus puntos de atención fijado por la Ley 982 de 2005 comporta el desconocimiento de alguna de las disposiciones que conforman el referido bloque normativo, no resulta procedente declarar la afectación del derecho colectivo a la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando los marcos legales, de manera ordenada y dando prevalencia a la calidad de vida de los habitantes. Como se explicó en el apartado 3.2 de esta providencia, por tratarse la Ley 982 de 2005 de un estatuto con un claro propósito corrector de las desigualdades históricas existentes en nuestro medio en relación con la

población sorda y sordociega, resulta inviable adscribir esta regulación al bloque normativo que integra la materia urbanística. En consecuencia no puede admitirse que de su desconocimiento se pueda desprender una vulneración del derecho colectivo previsto por el literal m) del artículo 4 de la Ley 472 de 1998.”

A voces de esa corporación el interés colectivo que se viene analizando se compone por la salvaguarda de la función social y ecológica inherente a la propiedad, la necesidad de preservar el espacio y equipamiento público y promover la construcción de edificaciones, vías y equipamiento asociado que permitan hacer efectiva la calidad de vida y dignidad de los habitantes, respetando los derechos de terceros y sin abuso del derecho propio, teniendo en cuenta las transformaciones en el uso del suelo, de manera que se garantice su uso racional y un desarrollo coherente con la protección y sostenibilidad ambiental.

Como se ha venido argumentando a lo largo de la contestación de la demanda, la administración distrital, comprometida con la protección del interés colectivo inherente con la realización de construcciones y edificaciones ordenadas que respeten la calidad de vida de los habitantes, ha clasificado las zonas de reserva vial para la Avenida Primera de Mayo, tanto para el componente de malla vial arterial como intermedia y local que se encuentra aledaña al conjunto residencial que promueve la presente acción constitucional, en los términos en que lo ha hecho saber la Secretaría Distrital de Planeación, que serán destinadas a la construcción (ampliación) de dicho proyecto vial, así como al manejo y control ambiental y zonas como parques y demás elementos constitutivos del espacio público, de conformidad con las disposiciones del Decreto 555 de 2021, POT vigente para Bogotá, pero además se busca por intermedio del DADEP, hacer efectiva la cesión gratuita y obligatoria de las zonas que tienen esa condición como producto del desarrollo del Conjunto Residencial Alondra.

Estas actividades y las restantes gestiones que se han podido referenciar, deberán contribuir a mejorar a la calidad de vida de los habitantes del sector, bajo el entendido que las zonas que cesión que se incorporen al Registro Único del Patrimonio Inmobiliario del Distrito Capital –RUPÍ-, y demás sectores de espacio público peatonal y para el encuentro se encuentran sometidas a las restricciones para su cerramiento en los términos del ya citado artículo 122 del POT.

5.2 Insuficiencia probatoria y carga de la prueba a cargo del actor popular

De conformidad con lo establecido en el artículo 30¹²¹ de la ley 472 de 1998, corresponde al actor popular la prueba de los hechos en los cuales funda su pretensión, es decir, tiene la carga de demostrar procesalmente que la autoridad o el particular fueron o son potencialmente responsables de la vulneración de los derechos colectivos invocados, requisito que ha sido ampliamente desarrollado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado.

Al respecto la Corte Constitucional, en sentencia C-215 de 1999¹²², al abordar el estudio de exequibilidad de dicho precepto, reiteró que en la acción popular al demandante le corresponde probar los hechos, acciones u omisiones que constituyen la vulneración o amenaza de los derechos colectivos, aportando los elementos probatorios idóneos para ello, sin perjuicio de que el juez, en determinados casos, supla las deficiencias probatorias en que aquel hubiere podido incurrir.

¹²¹ “**ARTÍCULO 30.-** Carga de la Prueba. La carga de la prueba corresponderá al demandante. Sin embargo, si por razones de orden económico o técnico, si dicha carga no pudiese ser cumplida, el juez impartirá las órdenes necesarias para suplir la deficiencia y obtener los elementos probatorios indispensables para proferir un fallo de mérito, solicitando dichos experticios probatorios a la entidad pública cuyo objeto esté referido al tema materia de debate y con cargo a ella. En el evento de no existir la posibilidad de allegar la prueba respectiva, en virtud de lo establecido en el inciso anterior, el juez podrá ordenar su práctica con cargo al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos”

¹²² Referencia: Expedientes D-2176, D- 2184 y D-2196 (acumulados) Acción pública de inconstitucionalidad contra los artículos 11, 12 (parcial) , 13, 27, 30, 33, 34 (parcial), 45, 46, 47, 48 (parcial), 50, 53 (parcial), 55, 65 (parcial), 70 (parcial), 71, 73, 85 y 86 de la Ley 472 de 1998, “por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones.” Demandantes: Andrés de Zubiria Samper, Luis Enrique Cuervo Pontón y Armando Palau Aldana. Magistrada Ponente (E): Dra. MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO

En los siguientes términos lo señaló la Corte:

“En relación con el artículo 30 de la Ley 472 de 1998, se esgrimen dos argumentos distintos de inconstitucionalidad: el primero, relativo a la inconstitucionalidad por omisión legislativa, en cuanto esta ley no se ocupó de desarrollar el tema de la responsabilidad objetiva, y el segundo, concerniente a la carga de la prueba, según el cual al demandante en acciones populares en la medida en que el daño causado se presume, tan sólo le basta al actor demostrar la conexidad entre la conducta del funcionario y el daño causado.

Respecto al primer cargo formulado por el ciudadano Luis Enrique Cuervo, estima la Corte que no está llamado a prosperar por las mismas razones expuestas con anterioridad, cuando se analizó el mismo argumento invocado contra la totalidad de la Ley 472 de 1998, las cuales se predicán también en relación con esta disposición, toda vez que el demandante funda la inconstitucionalidad de la carga la prueba, en conexión con los casos de responsabilidad objetiva por el daño inferido a los derechos e intereses colectivos, eventos no regulados por la ley en mención.

De otro lado, en cuanto se refiere al cargo formulado en concreto contra el artículo 30, y teniendo en cuenta la naturaleza de la acción popular, para la Corte resulta admisible, lógico y necesario que la demostración de los perjuicios sufridos por una persona en uno de sus derechos e intereses colectivos, le corresponda al afectado.

En todo caso, el debido proceso queda a salvo, pues el mismo precepto establece que si por razones económicas o técnicas el demandante no puede acreditar las pruebas, el juez deba impartir las órdenes necesarias para suplir la deficiencia probatoria, para lo cual puede solicitar a la entidad pública cuyo objeto esté referido al tema materia de debate, dichos experticios probatorios y así obtener los elementos indispensables para adoptar un fallo de mérito.

Además, el derecho fundamental a la presunción de inocencia consagrado en el artículo 29 superior es aplicable a todos los poderes públicos y a las personas en general, razón por la cual trasladar la carga de la prueba al demandado como lo pretende el actor, equivaldría a presumir desde un comienzo, con la sola presentación de la demanda, su responsabilidad.” (Resaltado fuera de texto).

En el mismo sentido, la sección primera del Consejo de Estado, en providencia del 10 de mayo de 2012¹²³ señaló que para la prosperidad de las pretensiones de la demanda el actor popular debe acreditar con suficiencia mediante las pruebas correspondientes, las acciones u omisiones que se le imputan a la autoridad pública o particular como fuente de las amenazas, transgresiones o violaciones de los derechos colectivos invocados en la demanda, o en su defecto, debe manifestar la imposibilidad por motivos económicos o técnicos, de allegar dicho acervo.

Señaló el Consejo de Estado lo siguiente:

“Ahora bien, es de resaltar que en materia de acciones populares es al actor popular a quien corresponde la carga de probar los hechos, acciones u omisiones que a su juicio constituyen la causa de la amenaza o vulneración de los derechos e intereses colectivos cuya protección reclama.

¹²³ Radicación número: 76001-23-31-000-2010-01459-01(AP) Actor: FERNANDO PATIÑO MARTINEZ Demandado: MINISTERIO DE LA CULTURA, Consejera ponente: MARIA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ

Así las cosas, ciertamente se advierte que la parte demandante no aportó ningún elemento probatorio para acreditar idónea y válidamente la amenaza o vulneración de los derechos e intereses colectivos invocados en la demanda, y tampoco manifestó la imposibilidad de allegar las pruebas respectivas, simplemente se limitó a aportar un material fotográfico que es insuficiente para demostrar la situación alegada."

En el caso bajo estudio, sin que se desconozca la existencia de las distintas problemáticas derivadas de comportamientos y hechos que pueden afectar los derechos colectivos invocados en la demanda, lo cierto es que la parte actora no introdujo al proceso elementos de convicción suficientes que permitan demostrar la eventual omisión en que se señala han incurrido las entidades distritales demandadas, necesaria para evidenciar y concretar las violaciones derivadas de un daño cierto o amenaza potencial a esos intereses, y en cambio, si existen medios de prueba a partir de los cuales se acreditan actuaciones de las autoridades de Bogotá D.C. tendientes a garantizar la protección y restitución del espacio y vías públicas en las zonas circundantes a la agrupación residencial que funge como actora en este medio de control, así como a la mitigación de conductas que atentan contra la seguridad ciudadana y aquellas que pueden constituir factores de contaminación en la actividad de reciclaje.

Teniendo en cuenta las gestiones y trámites a los que se ha venido haciendo referencia se puede señalar que no se incorporaron en el libelo medios de prueba que permitan evidenciar una presunta responsabilidad por omisión atribuible las entidades distritales demandadas, como causa eficiente del daño que se invoca a los derechos colectivos al ambiente sano, goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público, seguridad y salubridad públicas, realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes, se insiste una vez más, cuya protección comporta darle continuidad y vocación de permanencia a las actividades que en el marco competencial de cada organismo involucrado, de acuerdo con sus capacidades institucionales y presupuestales, sean requeridas para el efectivo uso y goce de esos bienes jurídicos tutelados por el legislador.

5.3 Falta de nexo causal

Como se desprende de la anterior, en el asunto *sub examine*, es claro que la parte demandante no logró demostrar el nexo causal de orden fáctico o jurídico, ni los deberes u obligaciones presuntamente omitidos por Bogotá Distrito Capital- Secretaría Distrital de Gobierno- Alcaldía Local de Bosa, Secretaría Distrital de Movilidad, Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público –DADEP-, Secretaría Distrital de Salud y Secretaría Distrital de Hábitat u otra autoridad distrital en el ejercicio de sus funciones, que constituyan la causa eficiente (nexo causal) de la presunta perturbación de los derechos colectivos invocados en relación con la atención y mitigación de hechos constitutivos de posible invasión del espacio y vías públicas en el sector posterior al Conjunto Residencial Alondra de la Localidad de Bosa, realización de conductas y actividades que atentan contra la integridad de las zonas y espacios de tránsito peatonal y recreación y demás factores que puedan generar contaminación ambiental.

5.4. Falta de legitimación en la causa por pasiva de las Secretarías Distritales de Salud y Hábitat

La legitimación en la causa por pasiva es un principio del derecho procesal que determina que las obligaciones jurídicas son exigibles respecto de quien se encuentra llamado a responder por ellas, así, en el desarrollo de esta figura se ha dispuesto que la acción judicial es favorable siempre y cuando además de ciertos requisitos de la acción, haya además coincidencia entre el titular de la obligación pretendida y el sujeto frente al cual se reclama la conducta.

Como presupuesto de conformación de la *litis* dentro del ordenamiento jurídico procesal, la legitimación en la causa tiene una doble connotación: activa frente a quien promueve la controversia y reclama la protección de sus intereses o derecho y pasiva respecto de la parte contra quien se dirigen las pretensiones y se busca su condena. Se trata de una condición anterior necesaria para tramitar el proceso y dictar sentencia de mérito favorable al demandante o al demandado.

La legitimación en la causa, desde el punto de vista material no conlleva *a priori* el derecho a obtener una condena favorable a las pretensiones, o ser absuelto de aquellas. Así pues, para el extremo activo debe acreditarse la titularidad del interés que se reclama, en tanto que, para la parte demandada, supone que aquella sea efectivamente la llamada a responder, resarcir o restablecer el interés jurídico que se debate en el proceso.

En cuanto atañe a la legitimación en la causa ha señalado el Consejo de Estado, entre otras, en sentencia del 26 de septiembre de 2012¹²⁴:

“La legitimación en la causa constituye un presupuesto procesal para obtener decisión de fondo. En otros términos, la ausencia de este requisito enerva la posibilidad de que el juez se pronuncie frente a las súplicas del libelo petitorio.

En relación con la legitimación en la causa, la Sala ha precisado lo siguiente

“La legitimación en la causa -legitimatío ad causam- se refiere a la posición sustancial que tiene uno de los sujetos en la situación fáctica o relación jurídica de la que surge la controversia o litigio que se plantea en el proceso y de la cual según la ley se desprenden o no derechos u obligaciones o se les desconocen los primeros o se les exonera de las segundas. Es decir, tener legitimación en la causa consiste en ser la persona que, de conformidad con la ley sustancial, se encuentra autorizada para intervenir en el proceso y formular o contradecir las pretensiones contenidas en la demanda por ser sujeto activo o pasivo de la relación jurídica sustancial debatida objeto de la decisión del juez, en el supuesto de que aquella exista. Es un elemento de mérito de la litis y no un presupuesto procesal”¹²⁵.

Como se aprecia, la legitimación en la causa corresponde a uno de los presupuestos necesarios para obtener sentencia favorable a las pretensiones contenidas en la demanda y, por lo tanto, desde el extremo activo significa ser la persona titular del interés jurídico que se debate en el proceso, mientras que, desde la perspectiva pasiva de la relación jurídica – procesal, supone ser el sujeto llamado a responder a partir de la relación jurídica sustancial, por el derecho o interés que es objeto de controversia”.

A partir de lo señalado por el Consejo de Estado, se tiene que la legitimación en la causa para el extremo pasivo consiste en la capacidad o calidad para controvertir u oponerse a las pretensiones y oponerse a ellas por ser el sujeto de la relación jurídico sustancial realmente llamado a satisfacerlas.

¹²⁴ Radicación número: 05001-23-31-000-1995-00575-01(24677) Actor: MARTHA LUCIA BEDOYA VERA Y OTROS Demandado: NACION - MINISTERIO DE DEFENSA, POLICIA NACIONAL

¹²⁵ Sentencia proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, el 23 de abril de 2008, expediente 16.271, M.P. Ruth Stella Correa Palacio.

Así lo entendido la Sección Primera de esa corporación en sentencia del 9 de agosto de 2012¹²⁶, en la que señaló lo siguiente:

“...la legitimación en la causa por pasiva es entendida como la calidad que tiene una persona para formular o contradecir las pretensiones de la demanda, por cuanto es sujeto de la relación jurídica sustancial, por lo que para poder predicar esta calidad es necesario probar la existencia de dicha relación...”

En el sentido que se viene indicando, esa misma corporación resaltó sobre las consecuencias procesales de la falta de legitimación de la causa lo siguiente¹²⁷:

(...) “Con relación con la naturaleza jurídica de la noción de legitimación en la causa, en sentido amplio, la jurisprudencia constitucional se ha referido a ella, como la “calidad subjetiva reconocida a las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso”, de forma tal, que cuando una de las partes carece de dicha calidad o condición, no puede el juez adoptar una decisión favorable a las pretensiones demandadas. (Subraya fuera del texto original)

Entendido así el concepto de legitimación en la causa, es evidente que cuando ella falte, bien en el demandante o bien en el demandado, la sentencia no puede ser inhibitoria, sino desestimatoria de las pretensiones aducidas, pues querrá decir que quien las adujo o la persona contra las que se adujeron no eran las titulares del derecho o de la obligación correlativa alegada.” (Subraya fuera del texto original)

Ahora bien, el Consejo de Estado se ha pronunciado en múltiples oportunidades¹²⁸, indicando que existen dos tipos de legitimación en la causa por pasiva: la de hecho y la material, en los siguientes términos:

“La primera se refiere a la relación procesal que se establece entre el demandante y el demandado por intermedio de la pretensión procesal, es decir, se trata de una relación jurídica nacida de la atribución de una conducta en la demanda y de la notificación del libelo inicial al demandado, por manera que quien cita a otro y le endilga la conducta, actuación u omisión que dan lugar a que se incoe la acción, está legitimado de hecho por activa y aquél a quien se cita y se le atribuye la referida acción u omisión resulta legitimado de hecho y por pasiva, después de la notificación del auto admisorio de la demanda .”

Como se puede observar, este primer tipo de legitimación (de hecho), la realiza el juez en el momento en el que, recibida la demanda, entiende que tanto el demandante como el demandado, a simple vista, son los llamados a ser las partes procesales y la configura en el momento en el que admite la demanda.

La misma sentencia que se viene comentando señaló lo siguiente respecto a la legitimación material en la causa por pasiva:

“Por su parte, la legitimación material en la causa alude a la participación real de la(s) persona(s) demandante(s) y/o demandada(s) en los hechos que originaron el respectivo litigio, independientemente de que dicha(s) persona(s) haya(n), o no, demandado o sido demandada(s).

¹²⁶ Radicación número: 73001-23-31-000-2010-00472-01 (AP) Actor: ALEXANDER GUZMAN CARRILLO Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES – INCO Y CONSTRUCTORA CSS CONSTRUCTORES S.A. Consejero ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO (E)

¹²⁷ Consejo de Estado, mediante radicación 76001-23-25-000-1997-03056-01 en la cual el Magistrado Ponente Jaime Orlando Santofimio Gamboa

¹²⁸ Véase la Sentencia de la Sección Tercera, del 26 de junio de 2015, Radicado 760012321000200101302 (31169), Magistrado Ponente Danilo Rojas Betancourth

(...)

Por consiguiente, el análisis sobre la legitimación material en la causa se contrae a dilucidar si existe, o no, relación real de la parte demandada o de la demandante con la pretensión que ésta formula o la defensa que aquella realiza, pues bien puede suceder que una persona, natural o jurídica, esté legitimada en la causa de hecho por ser parte dentro del proceso, pero carezca de legitimación en la causa material debido a que no es titular de los derechos cuya vulneración alega o a que ninguna actuación o conducta suya guarda relación o conexión con los hechos que motivan el litigio. En estos eventos, las pretensiones formuladas estarán llamadas a fracasar puesto que el demandante carecería de un interés jurídico perjudicado y susceptible de ser resarcido o el demandado no sería el llamado a reparar los perjuicios ocasionados a los actores “

De acuerdo con lo expuesto por el Consejo de Estado, la legitimación en la causa por pasiva (material), es aquella en la que, tras la argumentación correspondiente, la parte que no la posee le indica al juez el por qué debe ser desvinculada del proceso, para que, ya no por la simple lectura sino tras el análisis correspondiente y previo a dar continuidad al proceso, el juzgador emita un pronunciamiento que *a posteriori*, le permita dictar la correspondiente sentencia de mérito a favor o en contra de una de las partes.

Respecto al análisis de los eventos en que se configura la falta de legitimación material por pasiva, el Consejo de Estado¹²⁹ precisa lo siguiente:

“En un sujeto procesal que se encuentra legitimado de hecho en la causa no necesariamente concurrirá, al mismo tiempo, legitimación material, pues ésta solamente es predicable de quienes participaron realmente en los hechos que han dado lugar a la instauración de la demanda o, en general, de los titulares de las correspondientes relaciones jurídicas sustanciales; por consiguiente, el análisis sobre la legitimación material en la causa se contrae a dilucidar si existe, o no, relación real de la parte demandada o de la demandante con la pretensión que ésta formula o la defensa que aquella realiza, pues la existencia de tal relación constituye condición anterior y necesaria para dictar sentencia de mérito favorable a una o a otra.”

En virtud de los anteriores pronunciamientos jurisprudenciales se puede establecer claramente que la legitimación por pasiva de la acción popular se rompe en este caso respecto a las Secretarías Distritales de Salud y Hábitat, vinculadas por juez de conocimiento, porque estas no resultan responsables en forma directa frente a las medidas pertinentes para contrarrestar las conductas generadoras de la violación de los derechos colectivos invocados en la demanda.

En el caso de la Secretaría Distrital de Salud, se precisó que las intervenciones de la Línea de Calidad de Agua y Saneamiento Básico para consumo humano que ejecuta esa entidad se realizan sobre establecimientos abiertos al público y no sobre el espacio público o unidades residenciales como ocurre en el caso de la agrupación actora, y se indicó que la visita técnica para atender e identificar los factores de contaminación por vectores y olores ofensivos fue llevada a cabo por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente –E.S.E.–.

En cuanto atañe a la Secretaría Distrital del Hábitat se advierte que no le corresponde atender “...las acciones jurídicas necesarias para lograr la incorporación y regularización de las zonas de cesión obligatorias, pactadas como contraprestación al desarrollo urbano Conjunto Residencial Alondra”, como se solicita en la demanda, pues esta actuación ya viene siendo adelantada por el

¹²⁹ Sentencia del 4 de febrero de 2010, Sección Tercera Radicación número: 70001-23-31-000-1995-05072-01(17720) Actor: ULISES MANUEL JULIO FRANCO Y OTROS Demandado: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLU Y OTROS, Magistrado Ponente; Mauricio Fajardo Gómez

DADEP en el marco de sus competencias, además de que el desarrollo de dicha agrupación no corresponde al de un asentamiento informal, en los términos indicados en párrafos precedentes

Bajo estas circunstancias respetuosamente se solicitará al despacho, en forma subsidiaria, desvincular de la presente acción a las Secretarías Distritales de Salud y del Hábitat, por no ser las autoridades legitimadas para pronunciarse de fondo y debatir las pretensiones formuladas en la demanda, sin detrimento de coadyuvar y adelantar, con arreglo a sus competencias, aquellas actuaciones que resulten pertinentes para garantizar los intereses colectivos cuya protección se reclama.

5.5. Excepción Genérica o Innominada

Comendidamente solicito al señor Juez que en el evento de que se encuentre probada cualquier otra excepción dentro de este proceso, se sirva declararla a favor de la administración distrital.

VI. PETICIONES

Actuando como apoderado de Bogotá Distrito Capital- Secretaría Distrital de Gobierno- Alcaldía Local de Bosa, Secretaría Distrital de Movilidad, Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público –DADEP-, Secretaría Distrital de Salud y Secretaría Distrital de Hábitat, conforme al poder y anexos previamente allegados, respetuosamente me permito presentar las siguientes peticiones al despacho:

Con fundamento en la argumentación expuesta en la presente contestación de la demanda, respetuosamente solicito al señor Juez declarar la improcedencia de la acción popular ante la ausencia de vulneración de los derechos colectivos invocados por parte de las entidades vinculadas que represento, teniendo en cuenta que la administración distrital por conducto de las referidas autoridades y todas aquellas con injerencia en este asunto, han actuado en el marco de sus competencias para prevenir la indebida ocupación del espacio y vías públicas o la realización de conductas que atenten contra la seguridad de los habitantes o que puedan constituir factores de contaminación para la comunidad residente y circundante del Conjunto Residencial Alondra de la localidad de Bosa, así como para materializar la incorporación al patrimonio del distrito de las zonas de cesión gratuita generados con este proyecto de vivienda.

De manera subsidiaria, solicito acoger las excepciones planteadas, denegar las pretensiones y declarar que no se ha configurado violación alguna de derechos colectivos por parte de las entidades demandadas y vinculadas por falta de prueba de la acción u omisión de estas que haya causado un daño o constituya potencial amenaza de los intereses colectivos al ambiente sano, goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público, seguridad y salubridad públicas, realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes, o por falta de nexo causal entre el eventual daño que se alega y las presuntas omisiones de las demandadas,

Finalmente solicito desvincular a las Secretarías Distritales del Hábitat y Salud por falta de legitimación en la causa por pasiva, conforme se argumentó en los acápites pertinentes de la contestación de la demanda.

VII. PRUEBAS

Además de todas las comunicaciones emitidas por las entidades distritales que se citan en este escrito y que fueron incorporadas como pruebas con la demanda, se adjuntan como pruebas documentales de la presente contestación las siguientes:

1. Insumo suministrado por la Secretaría Distrital de Gobierno- Alcaldía Local de Bosa, junto con anexos de las actividades adelantadas por esa instancia local.
2. Insumo suministrado por la Secretaría Distrital de Movilidad.
3. Insumo suministrado por el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, con anexo.
4. Insumo suministrado por la Secretaría Distrital de Salud, con anexo.
5. Insumo suministrado por la Secretaría Distrital del Hábitat.
6. Insumo suministrado por la Secretaría Distrital de Planeación, con anexos.
7. Insumo suministrado por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos- UAESP.
8. Insumos suministrados por la Secretaría Distrital de Ambiente.
9. Insumo suministrado por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte- IDRD, con anexo.

De otra parte, respetuosamente informamos que toda la normativa que alude a la temática planteada en el presente proceso y particularmente la citada en este escrito puede ser consultada en la dirección electrónica www.alcaldiabogota.gov.co en el enlace régimen legal.

VIII. ANEXOS

Lo anunciado en el acápite anterior.


IX. NOTIFICACIONES

A mis representadas, Bogotá Distrito Capital- Secretaría Distrital de Gobierno- Alcaldía Local de Bosa, Secretaría Distrital de Movilidad, Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público –DADEP-, Secretaría Distrital de Salud y Secretaría Distrital de y al suscrito, en la carrera 8ª 10-65 Piso 3º, Dirección Distrital de Gestión Judicial de la Secretaría Jurídica de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Igualmente, recibimos notificaciones en los correos electrónicos:

aardilam@secretariajuridica.gov.co y
notificacionesjudiciales@secretariajuridica.gov.co.

Atentamente,



ALVARO ARDILA MORA
C.C. 79.709.902 de Bogotá D.C.
T.P. 94953 del C.S.J.

Con copia a:

1. Parte actora: Cristina Pardo Ballesteros conjuntoresidencialalondra@gmail.com
2. Parte demandada PONAL decun_notificacion@policia.gov.co, maria.bernateq@correo.policia.gov.co
3. Partes vinculadas: Constructora Fundación Compartir notificaciones@fundacioncompartir.org
Asociación de Recicladores "Reciclemos Todos" reciclemos1todo@gmail.com

Carrera 8 No. 10 – 65
Código Postal: 111711
Tel: 3813000
www.bogotajuridica.gov.co
Info: Línea 195



CO21/962806

